



NACIONES UNIDAS ECUADOR

Documento Análisis País

12/julio/2018

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]

Índice

1. Introducción	9
2. Contexto nacional	11
2.1. La situación demográfica en Ecuador	11
2.2. Contexto económico	14
2.3. Marco normativo y organización del Estado	17
2.3.1. Marco normativo	18
2.3.2. Políticas y estrategias nacionales para el desarrollo	20
2.3.3. Marco organizativo del Estado	22
2.4. Marcos y compromisos internacionales	23
2.4.1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: avances en Ecuador	23
2.4.2. Normas internacionales y mecanismos de derechos humanos	24
2.4.3. Acuerdos y agendas ambientales internacionales	24
2.4.4. Ecuador y los mecanismos de integración y comerciales	25
2.4.5. Cooperación internacional	26
3. Principales desafíos	28
3.1 Personas	28
3.1.1 Combate y erradicación de la pobreza	28
3.1.2. Desarrollo integral de la primera infancia	31
3.1.3. Derecho a la alimentación	33
3.1.4. Derecho a la salud	34
3.1.5. Derecho a la educación	39
3.1.6. Derecho a la cultura y a la diversidad cultural	42
3.1.7. Protección social integral	44
3.1.8. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación	47
3.1.8.1. Violencia basada en género	47
3.1.8.2. Violencia contra los niños, niñas y adolescentes	49
3.1.8.3. Una vida sin discriminación	52
3.1.8.4. Igualdad de género y derechos de las mujeres	54
3.1.9. Preparación y respuesta a emergencias	55
3.1.9.1. Vulnerabilidad poblacional por amenazas naturales y antrópicas	55
3.1.9.2. Asistencia Humanitaria a poblaciones afectadas	57
3.2 Planeta	59

3.2.1. Cuidado y conservación de la biósfera	60
3.2.1.1. Biodiversidad terrestre	61
3.2.1.2. Biodiversidad marino-costera	62
3.2.2. Cambio climático	63
3.2.3. Producción y consumo responsable y sostenible	64
3.2.4. Eficiencia energética y productividad	66
3.3. Prosperidad	68
3.3.1. Trabajo estable, justo y digno	69
3.3.2. Desigualdad y crecimiento económico	74
3.3.3. Desarrollo productivo, competitividad y emprendimiento	76
3.3.4. Infraestructura para la producción, innovación y tecnología	82
3.3.5. Urbanización y comunidades sostenibles	84
3.4. Paz	88
3.4.1. Gestión pública eficiente y eficaz	89
3.4.2. Gestión pública transparente	91
3.4.3. Participación ciudadana	92
3.4.3.3 Participación política de las mujeres	93
3.4.3.4. Participación de pueblos indígenas y consulta previa, libre e informada	94
3.4.3.5. Participación de adolescentes	95
3.4.5. Acceso a la justicia	97
3.4.6. Sistema de Rehabilitación Social	99
3.4.6.1. Adolescentes en conflicto con la ley penal	100
3.4.7. Entornos seguros y libres de violencia	101
3.5. Alianzas	103
3.5.1. Información para el Desarrollo Sostenible	105
3.5.2. Implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030	107
4. Conclusiones	109
4.1 Ventajas comparativas	110
Bibliografía	111
ANEXOS	123

Índice de material gráfico

Tabla 1. Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (2005-2016)-	16
Gráfico 1. Remesas recibidas en Ecuador -----	17
Tabla 2. Ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” -----	21
Tabla 3. Competencias del Estado Central y de los GAD -----	22
Tabla 4. Incidencia de pobreza extrema por ingresos (por ciclo de vida) -----	29
Tabla 5. Incidencia de pobreza por ingresos (por territorio) -----	29
Tabla 6. Incidencia de pobreza por ingresos (según género y etnia) -----	30
Gráfico 2. Crecimiento del PIB y participación laboral -----	70
Gráfico 3. -----	70
Tabla 7. Tasas de crecimiento promedio anual de la productividad del trabajo, 1980-2013. (En porcentajes) -----	77
Tabla 8. Comparación del desempeño industrial de Ecuador con Latinoamérica y el mundo-----	80
Gráfico 4. PIB y desigualdad de ingresos -----	75
Gráfico 5. Brechas de ingresos laborales (2007-2016) -----	75
Gráfico 6. Índice del ecosistema digital CAF en América Latina y el Caribe (2015)- -----	83
Gráfico 7. Calificaciones del índice de desarrollo del ecosistema digital CAF -----	83
Gráfico 8. Plan de Desarrollo Estadístico para ODS -----	106

Siglas y acrónimos

ACCESS	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada
ACNUR	Agencia ONU para los Refugiados
AE	Agricultura empresarial
AFC	Agricultura familiar campesina
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
AME	Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo
APP	Alianzas público-privadas
ARCSA	Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
BCE	Banco Central del Ecuador
BDH	Bono de Desarrollo Humano
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAI	Centros de Adolescentes Infractores
CAF	Corporación Andina de Fomento
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CDH	Crédito de Desarrollo Humano
CE	Constitución de la República del Ecuador
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CELAC	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CEOSC	Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CERD	Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
CGE	Contraloría General del Estado
CLIRSEN	Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos

CITES	Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CNII	Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
COFJ	Código Orgánico de la Función Judicial
COGEP	Código General de Procesos
COIP	Código Orgánico Integral Penal
CONA	Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
CONADIS	Consejo Nacional de Discapacidades
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COP	Componentes Orgánicos Persistentes
COPFP	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
CPCCS	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CPR	Comunidades de Población en Resistencia
CRC	Convention on the Rights of the Child (Comité de los Derechos del Niño)
CRI	Cuarta Revolución Industrial
CRS	Centros de Rehabilitación Social
DPE	Defensoría del Pueblo
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida
EDV	Esperanza de Vida
EGB	Educación General Básica
EGI-Dengue	Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control del Dengue para la Subregión Andina
ENEMDU	Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
ENES	Examen Nacional de Educación Superior
ENIEP	Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza
ENSANUT-ECU	Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
EPU	Examen Periódico Universal
ETN	Estrategia Territorial Nacional
FAO	Food and Agriculture Organization
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano

FGE	Fiscalía General del Estado
FTLC	Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GEM	Monitor Global del Emprendedurismo
GRI	Global Report Initiative
ICE	Índice de Confianza Empresarial
IDEAC	Índice de Actividad Económica Coyuntural
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IED	Inversión Extranjera Directa
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
IGM	Instituto Geográfico Militar
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INEVAL	Instituto Nacional de Evaluación Educativa
ISSFA	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
ISSPOL	Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
ITT	Ishpingo-Tambococha-Tiputini
IUCD	Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo
IVU	Índice Verde Urbano
LGBTTTIQ	Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexuales y <i>queer</i>)
LOCNI	Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad
LOEI	Ley Orgánica de Educación Intercultural
LOES	Ley Orgánica de Educación Superior
MAE	Ministerio del Ambiente
MAP	Ministerio de Acuicultura y Pesca
MCDS	Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MCyP	Ministerio de Cultura y Patrimonio
MEER	Ministerio de Electricidad y Energías Renovables
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MIDUVI	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINEDU	Ministerio de Educación
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MJDHC	Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
MOSEIB	Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
MREMH	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MW	Megavatios
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
NNA	Niños, Niñas y Adolescentes
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCHA Affairs	United Nations Office for the Coordination of for Humanitarian
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMPI	Organización Mundial de Propiedad Intelectual
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de Naciones Unidas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OSE	Observatorio Social del Ecuador
OTCA	Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
Parlatino	Parlamento Latinoamericano
PEA	Población Económicamente Activa
PEI	Población Económicamente Inactiva
PIB	Producto Interno Bruto
PLANEE	Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPL	Personas privadas de su libertad
PUCE	Pontificia Universidad Católica del Ecuador
SATJE	Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano

SEGIB	Secretaría General Iberoamericana
SEN	Sistema Estadístico Nacional
SENAGUA	Secretaría Nacional del Agua
SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SETECI	Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
SGR	Secretaría de Gestión de Riesgos
SIISE	Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador
SNDGR	Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos
SNDPP	Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
SNGR	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
SNI	Sistema Nacional de Información
SNU	Sistema de Naciones Unidas
SUIOS	Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas
SUPA	Sistema Único de Pensiones Alimenticias
UN DESA	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNDAF	Marco de Cooperación de las Naciones Unidas en Ecuador
UNDP	United Nations for Development Program
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población para las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPA	Unidad de Producción Agrícola
USCUSS	Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
UTPL	Universidad Técnica Particular de Loja
VAM	Valor agregado manufacturero
WBCSD	World Business Council for Sustainable Development

1. Introducción

El Análisis Común de País del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador (CCA, por sus siglas en inglés) es una caracterización y aproximación a la situación económica, social y ambiental del país. Este instrumento articula, con base en los mandatos de las agencias, las oportunidades y desafíos en los ámbitos del desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y seguridad y los asuntos humanitarios. Se sustenta en los principios de “no dejar a nadie atrás”: derechos humanos, género, sostenibilidad ambiental y rendición de cuentas.

El CCA constituye el primer paso para la planificación de la ONU en los países. Permite definir y priorizar los desafíos que se abordarán en un período determinado. Las áreas de cooperación y estrategias se traducen luego en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNDAF, por sus siglas en inglés), producto de un proceso de diálogo entre el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y el Gobierno de la República del Ecuador

La programación de la ONU tiene entre sus objetivos centrales apoyar al país para implementar y dar seguimiento a la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Esta Agenda es un esfuerzo mundial que busca ir más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y afrontar temas como la desigualdad, el crecimiento económico, el acceso al trabajo decente, la inclusión social, el desarrollo de ciudades sostenibles, la industrialización, el cambio climático, la energía sostenible, la paz y la justicia.

Ecuador registra importantes avances en la implementación de esta agenda global. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 “Toda una vida” articula sus políticas al logro de los ODS. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó un primer diagnóstico de la capacidad estadística del país para medir y dar seguimiento a los ODS. Por su parte, la Asamblea Nacional adoptó una histórica resolución que coloca estos objetivos como un referente obligatorio para el trabajo legislativo. La nueva Agenda plantea desafíos importantes para el país tanto en el cumplimiento de las metas como en la necesidad de generar indicadores y herramientas para recopilar datos fiables, accesibles y seguros, que permitan el seguimiento.

El presente análisis se estructura en dos capítulos. El primero es una caracterización del escenario nacional en cuanto a su situación demográfica, socioeconómica, al marco normativo e institucional nacional, así como a los compromisos internacionales suscritos. El segundo identifica los principales desafíos que presenta el contexto nacional, agrupados en secciones sobre las cinco esferas de la Agenda 2030.

- **PERSONAS:** las condiciones y calidad de vida de las y los habitantes;
- **PLANETA:** la situación de los recursos naturales, la energía sostenible, el consumo responsable y el cambio climático;

- **PROSPERIDAD:** las condiciones para alcanzar el bienestar en sus distintos niveles;
- **PAZ:** las circunstancias para alcanzar la convivencia armónica de las personas y los pueblos; y
- **ALIANZAS:** para alcanzar el desarrollo sostenible.

Para elaborar el CCA se tomaron como referencias las fuentes oficiales de información, el marco normativo nacional y las políticas, programas e informes nacionales, así como documentos de las agencias del SNU y otras fuentes provenientes de la academia, la sociedad civil y socios de la cooperación. Se mantuvieron reuniones de revisión con el comité técnico del UNDAF, con la Cancillería y, por su intermedio, con los/as directores/as de cooperación del Gobierno nacional, así como con socios nacionales del sector privado, la sociedad civil, la academia y otros socios de cooperación presentes en el país.

Adicionalmente a estos espacios, el análisis se complementó con las reflexiones del taller de planificación estratégica, en el que se analizaron las causas de los desafíos identificados, con el objetivo de definir una respuesta conjunta para su abordaje a través del UNDAF 2019-2022.

(Infografía sobre proceso construcción)

2. Contexto nacional

2.1. La situación demográfica en Ecuador

Ecuador representa el 0,2% de la población mundial y el 2% de la población de América Latina¹. Su extensión territorial es de 256.370 km²; tiene una densidad poblacional de 64 hab/km². Es el país más pequeño de la subregión andina y el más densamente poblado de América del Sur².

Según el INEC, en 2018 la población alcanzaría los **17'023.408 habitantes** (8'427.261 hombres y 8'596.147 mujeres). Para el año 2020, la población total se proyecta en 17'510.643 habitantes (49% de población masculina y 51% de población femenina); mientras que para el año 2030 será de 19'814.767)³.

La población se concentra de forma mayoritaria en la Costa, con 8'303.168 habitantes y en la Sierra, con 7'504.942 habitantes⁴. Las provincias con mayor ritmo de crecimiento poblacional son Orellana, Sucumbíos y Pastaza, seguidas de Galápagos, Santa Elena y Santo Domingo. La tasa de crecimiento proyectada mantiene un incremento sostenido y estable hacia el año 2030.

El **62,2% de la población tiene entre 15 y 64 años**. Por tanto, Ecuador ha ingresado en lo que se conoce como “bono demográfico”, momento en el que la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar⁵. Eso le permite solventar asuntos como la seguridad social de los grupos dependientes. Sin embargo, se proyecta un envejecimiento poblacional hacia el año 2030, situación que tendrá impactos en la recaudación tributaria y el sostenimiento actuarial de la seguridad social.

En 2017, la población de **niños, niñas y adolescentes (NNA)** se acercaba a los 6 millones (5'971.827), es decir, el 36% de la población total del país. Dentro de este grupo los y las adolescentes representaban el 44%. La incidencia de la pobreza es mayor en los hogares que tienen mayor número de hijos e hijas. De cada 10 NNA, 6 viven en ciudades; el 35% de las mujeres en el país es niña o adolescente⁶. El 9% de la niñez ecuatoriana es indígena; 8%, afroecuatoriana y 7%, montubia. La gran mayoría (76%) es mestiza⁷. La condición de vida de este sector poblacional está matizada por la presencia de un 2% de NNA cuyos padres han migrado fuera del país. Asimismo, 25.000 NNA son inmigrantes y 21.000 han emigrado.

En cuanto a la **población adulta mayor**, en 2017, 1'716.002 personas eran mayores de 60 años (9,3% de la población, de los cuales, 53% son mujeres y 47% hombres).

¹ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 10.

² OMS (Organización Mundial de la Salud). 2017. “Situación en materia de salud y desarrollo”. Hoja de trabajo.

³ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017a. *Ecuador en cifras*. (Quito: INEC).

⁴ *Ibidem*.

⁵ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 18.

⁶ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017e. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*, (Quito: INEC).

⁷ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

Las provincias de Manabí y Azuay son las que tienen mayor población adulta mayor, pues superan los 90.000 habitantes incluidos en ese grupo poblacional⁸.

La edad promedio en Ecuador es de 27 años y la **esperanza de vida** alcanza los 75 años (77,8 para las mujeres y 72,2 para los hombres). Según las proyecciones del INEC, la esperanza de vida (EDV) llegará a 80,5 años en 2050. La cifra es aún mayor para las mujeres, quienes para 2050 tendrán una EDV de 83,5 años, frente a 77,6 años en los hombres. Por ende, al igual que en otros países de la región, se presenta una progresiva feminización del envejecimiento⁹.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Ecuador el índice de envejecimiento es moderado (entre 30 y 50 adultos mayores por cada 100 niños). Sin embargo, la tendencia en los próximos 30 años es hacia el incremento de la población adulta mayor. Se prevé que en 2050 las personas mayores de América Latina y el Caribe representarán el 26% de la población. “Esto significa que, a mediados de este siglo, la región podría llegar al mismo estadio del proceso de envejecimiento que se observa en los países desarrollados en la actualidad”¹⁰.

Ecuador es un país **plurinacional**. El 7,0% de la población se autoidentifica como indígena, 7,2%, como afroecuatoriano y 7,4%, como montubio¹¹. La población indígena está integrada por 14 nacionalidades y 18 pueblos. Estos están mayoritariamente presentes en la sierra norte y centro, en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar. En las zonas de integración fronteriza habitan 11 nacionalidades y pueblos indígenas, de los cuales 8 son transfronterizos: Shuar, Achuar, Shiwiar, Andwa, Siekopa'i, Sápara, Siona y Kichwas, ubicados hacia la Amazonía. Según el último censo nacional, la población indígena está integrada por un 50,9% de mujeres y un 49,1% de hombres¹². Los grupos poblacionales de 0 a 34 años, en su conjunto, representan el 71,3% de la población indígena. La población afrodescendiente está concentrada sobre todo en la provincia de Esmeraldas y en los cantones de Guayaquil, Ibarra y Mira. La población montubia, en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí¹³.

El 4,5% de la población (433.169 personas) **registra alguna discapacidad**. De estas, 43,78% son mujeres y 56,22%, hombres. El 48,25% tiene entre 30 y 65 años; 23,52% son personas mayores de 65 años; 14,85% son jóvenes (18 a 29 años); 5,35% tienen entre 7 y 12 años; 1,35%, entre 4 y 6 años. El 46,68% presenta discapacidad físico-

⁸ MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 2014. *Ciudadanía activa y envejecimiento positivo*. (Quito: MIES).

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018. *Panorama social de América Latina*, (Santiago: Naciones Unidas), 29.

¹¹ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 44.

¹² INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2011. *Las cifras del pueblo indígena: una mirada desde el Censo de Población y Vivienda 2010*, (Quito: INEC), 16-17.

¹³ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 114.

motriz, el 22,54%, intelectual; el 12,80%, auditiva; el 11,89%, visual; el 4,71%, psico-social y el 1,30%, de lenguaje¹⁴.

La población ecuatoriana **en el exterior** se estima en 1'131.000, una cifra que afecta el perfil poblacional en varias zonas del país e impacta en las políticas de desarrollo.

En los últimos años, las cifras de personas en situación de **movilidad humana** han crecido. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN DESA, por sus siglas en inglés) señaló un aumento en el número de inmigrantes desde el año 2000 (152,000 inmigrantes) hasta 2017 (399,000 inmigrantes, 2.4% de la población total del país)¹⁵. Desde 1989 hasta 2017, unas 250.000 personas solicitaron el reconocimiento de la **condición de refugiado**; a 60.500 les fue otorgada. El 98% es de nacionalidad colombiana; 53% son hombres y 47%, mujeres; 28% son niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años. Entre 1989 y 2017, las ciudades que mayor población refugiada acogieron fueron: Quito (34%), Esmeraldas (18%), Lago Agrio (14%), Tulcán (13%), Guayaquil (11%), Cuenca (4%), Ibarra (4%), San Lorenzo (0,5%) y Santo Domingo (0,4%)¹⁶.

El país también registró un ingreso masivo de personas venezolanas, 485,088 entre 2015 y 2017¹⁷. Alrededor del 80% continuó su camino hacia otros países de Sudamérica. En 2017, la venezolana se convirtió en la segunda nacionalidad entre los solicitantes de la condición de refugiado. Así, Ecuador se ha convertido en un país de tránsito y destino para la población venezolana. El Ministerio del Interior reporta que entre los años 2014 y 2017 la migración neta fue de 93.929 personas, que arribaron en su gran mayoría por vía terrestre, ingresando por el puente internacional de Rumichaca¹⁸. En lo que va de 2018, aproximadamente 600.000 personas de nacionalidad venezolana han registrado su ingreso al país, principalmente por los pasos fronterizos de Rumichaca, en Carchi, y San Miguel, en Sucumbíos. Casi 5.000 han solicitado refugio, lo cual supera la cifra de 1.500 en 2017. El porcentaje de personas venezolanas que llegan y permanecen en Ecuador subió de un 20% a un 37% durante el mes de agosto, mientras que las demás están en tránsito hacia otros países de la región, sobre todo Perú¹⁹.

Las personas venezolanas llegan con su salud física y mental deteriorada y reportan haber viajado durante varios días. Los servicios de migración en las fronteras con Colombia (Rumichaca y Sucumbíos) se han visto desbordados, lo cual ha generado esperas de hasta 48 horas. Las personas están expuestas, además, a condiciones

¹⁴ CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). 2013. *Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017*. (Quito: CONADIS).

¹⁵ UN DESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas). 2017. *International Migration Report 2017 Highlights*, (Nueva York: ONU).

¹⁶ MREMH (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana). 2018. *Plan nacional de movilidad humana*. Quito: MREMH.

¹⁷ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017d. *Estadísticas de entradas y salidas internacionales*. (Quito: INEC).

¹⁸ El Universo. 2018. "Ecuador es país de paso para la mayoría de venezolanos". 19 de febrero.

¹⁹ SNU (Sistema de Naciones Unidas). 2018. "Reporte del Sistema de Naciones Unidas Ecuador, 2018". Hoja Informativa.

climáticas adversas. Se han identificado necesidades en los ámbitos de albergue temporal, alimentación, agua y saneamiento, acceso a información e identificación y atención de casos con necesidades específicas de protección²⁰.

Según una encuesta de ACNUR y el PMA realizada a la población venezolana, el 92% de esta tiene entre 18 y 59 años. La edad promedio es 30 años. La mitad de las personas encuestadas tiene algún tipo de estudio superior, universitario o técnico. El 43% trabaja por cuenta propia y solo el 34% reporta alcanzar el salario básico unificado²¹.

2.2. Contexto económico

Ecuador es un país de ingresos medios, cuyo modelo económico-productivo está basado en la producción y exportación de bienes primarios, principalmente petróleo y productos agrícolas. La tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2007 y 2014 fue de 4,4% anual, por encima del 3,2% de América Latina y el Caribe. El crecimiento fue impulsado por el fuerte aumento del consumo privado²², el alza en los precios del petróleo y el incremento significativo de la inversión pública.

La economía se desaceleró desde el año 2014, fundamentalmente debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, lo cual generó una reducción del 4,5% del PIB en 2015, seguida por una reducción adicional en 2016. En 2015, la tasa de crecimiento del PIB fue de 0,2%; en 2016 cerró con un decrecimiento de -1,5%. El consumo privado se estancó y la inversión pública se redujo de manera significativa²³.

En 2017 existió un leve crecimiento del PIB: 0,71. Para los siguientes años se proyecta también un crecimiento de la economía: 1,60% en 2018; 2,39% en 2019 y 2,49% en 2020²⁴. Esto obedecería al crecimiento de las ramas no petroleras, con excepción del año 2018, en que el aporte mayor seguirá siendo de esta rama, como resultado de la nueva producción y exportación de petróleo crudo que sumaría el proyecto *Ishpingo Tiputini Tambococha* (ITT).

El Gobierno nacional reporta que en los últimos 10 años realizó considerables inversiones en el cambio de matriz energética, con el fin de reducir la dependencia de la energía proveniente de combustibles fósiles y generar mayor seguridad energética, a partir de fuentes renovables. Se inició la construcción de ocho proyectos hidroeléctricos, con el objetivo de aumentar la capacidad instalada del país en 2.849 MW (con una generación de más de 16.200 GWh promedio por año) y mitigar las emisiones de CO₂ en aproximadamente 6,3 MM de toneladas²⁵. En 2017 la matriz

²⁰ SNU (Sistema de Naciones Unidas). 2018. "Reporte del Sistema de Naciones Unidas Ecuador, 2018". Hoja Informativa.

²¹ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. "Encuesta de Línea Media". Hoja Informativa.

²² BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Documento de enfoque Ecuador 2012-2017. Evaluación del programa país*. (Washington: BID), 2.

²³ *Ibidem*.

²⁴ BCE (Banco Central del Ecuador). 2017. *Previsiones macroeconómicas del Ecuador 2017-2020*. (Quito: BCE).

²⁵ MICSE (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del Ecuador). 2016. *Agenda Nacional de Energía 2016-2040*. (Quito: MICSE), 30.

energética de Ecuador estaba compuesta en un 90% por energía hidroeléctrica, un 8%, térmica y 2%, por otras fuentes renovables²⁶.

La inversión privada sigue siendo modesta en Ecuador: fluctuó alrededor del 14,2% del PBI entre 2000 y 2014, muy por debajo de los niveles alcanzados por otros países de ingresos medios y altos, como Perú (20,3% en 2014) y Colombia (18,8%)²⁷. En las proyecciones de la inversión pública y privada destacan dos sectores: construcción y minería. Para 2018, el crecimiento estaría dado por el programa de vivienda popular que ejecuta el Gobierno nacional, en el cual se prevé una inversión de alrededor de 4,800 millones de dólares²⁸. En el caso del sector minero, se proyecta un incremento de la inversión privada. Para 2017 se estimaron 670,1 millones de dólares y para 2020 se proyectan 944,9 millones de dólares²⁹.

La deuda pública del Gobierno central y de las empresas públicas no financieras, excluyendo obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, aumentó de 18,4% del PIB en 2012 a 32,7% en 2015 y 39,6% en 2016. La deuda pública externa, equivalente al 26,7% del PIB y al 67,4% de la deuda total, estaba compuesta en 2016 por deuda con multilaterales (32,1%), acreedores bilaterales y bancos (41,8%) y Bonos Brady, global y soberanos (26,1%). China constituye el principal acreedor externo, con 31,7% de la deuda externa total. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el mayor acreedor multilateral, con 18,1% de la deuda externa total y 56,3% de la deuda multilateral. Casi la totalidad de la deuda interna está constituida por títulos del Gobierno a largo plazo³⁰.

El sector externo es determinante para generar suficiente circulante en la economía. La balanza de pagos registra los movimientos asociados al comercio exterior, a la inversión extranjera directa, remesas, entre otros rubros. En la composición de la **balanza comercial de Ecuador**, las exportaciones petroleras representan en promedio, en los últimos 10 años, el 51,9%. El 23,5% se concentra en productos tradicionales como banano, camarón, flores, café y atún. En cuanto a las importaciones, el 80% corresponde a bienes de capital y materias primas para la producción nacional. Con excepción de 2016, la balanza comercial ecuatoriana ha sido negativa en los últimos años, en especial por el fortalecimiento del dólar y la devaluación de moneda de países vecinos como Colombia y Perú. La aplicación de salvaguardas permitió proteger la balanza comercial y la economía ante la situación de vulnerabilidad económica, incrementada por el terremoto de abril de 2016³¹.

La Inversión Extranjera Directa (IED), tras alcanzar un valor récord en 2015, descendió en 2016 un 44% y retomó valores similares a los de años previos, con ingresos por 744 millones de dólares (tabla 1). Todos los componentes de la IED

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ BM (Banco Mundial). 2015. *Republic of Ecuador Fostering Productivity for Export and Growth Technical Note. Report No: ACS16906*. (S.l.: BM), 3.

²⁸ BCE (Banco Central del Ecuador). 2017. *Previsiones macroeconómicas del Ecuador 2017-2020*. (Quito: BCE).

²⁹

³⁰ BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Documento de enfoque Ecuador 2012-2017. Evaluación del programa país*. (Washington: BID), 4.

³¹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 73.

disminuyeron, pero la mayor caída se registró en los préstamos entre empresas, que alcanzaron incluso valores negativos³².

Tabla 1. Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (2005-2016)

Subregiones y países	2005-2009 ^a	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Diferencia absoluta 2016-2015 (millones de dólares)	Diferencia relativa 2016-2015 (porcentajes)
América del Sur^b	68 400	135 957	168 689	170 153	134 545	150 895	131 724	118 219	-12 122	-9,3
Argentina	6 204	11 333	10 840	15 324	9 822	5 065	11 759	4 229	-7 530	-64,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	259	643	859	1 060	1 750	657	555	410	-145	-26,1
Brasil	32 331	88 452	101 158	86 607	69 181	96 895	74 694	78 929	4 235	5,7
Chile	12 268	16 153	24 374	30 562	21 092	24 011	20 469	12 225	-8 243	-40,3
Colombia	8 894	6 430	14 648	15 039	16 209	16 163	11 732	13 593	1 860	15,9
Ecuador	465	166	644	568	727	772	1 322	744	-578	-43,7
Paraguay	137	462	581	697	252	382	260	274	13	5,1
Perú	4 978	8 455	7 341	11 788	9 800	4 441	8 272	6 863	-1 409	-17,0
Uruguay	1 461	2 289	2 504	2 536	3 032	2 188	1 279	953	-326	-25,5
Venezuela (República Bolivariana de) ^c	1 403	1 574	5 740	5 973	2 680	320	1 383	...		

Fuente: CEPAL 2017a.

La industria petrolera sigue siendo el principal receptor de capitales extranjeros (alcanzó el 64% del total en 2016). Se registra una disminución del 14% de la IED en las manufacturas y los servicios, sectores que se vieron más afectados, con rebajas del 86% y el 57%, respectivamente. La Unión Europea fue el principal bloque inversionista en el país, mientras que los cuatro principales países fueron China, España, Estados Unidos y los Países Bajos, que acumularon cerca del 80% del total³³.

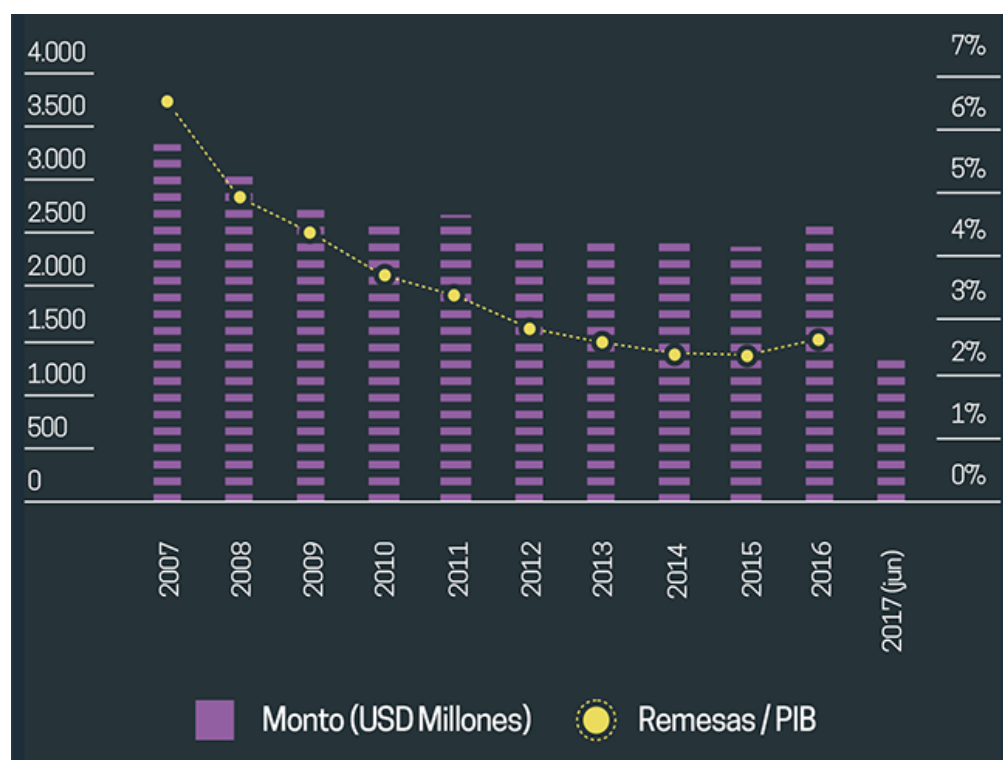
El flujo de remesas sigue siendo una fuente importante de ingresos para el país, a pesar de su decrecimiento en la última década. En 2016 se recibieron 2.602 millones de dólares por este concepto. En el primer semestre de 2017, 1.324 millones de dólares³⁴. Esto equivale a que en 2016 las remesas representaron un 2,66% del PIB, la tercera fuente de divisas (gráfico 1).

³² CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018. *Panorama social de América Latina 2017*. (Santiago de Chile: Naciones Unidas), 67.

³³ *Ibidem*.

³⁴ BCE (Banco Central del Ecuador). 2017. *Previsiones macroeconómicas del Ecuador 2017-2020*. (Quito: BCE).

Gráfico 1. Remesas recibidas en Ecuador



Fuente: EKOS 2017, con datos del BCE.

El crecimiento económico sostenido de los últimos años repercutió en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La tasa de pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,1% en junio de 2017 (22,6% para hombres y 23,6% para mujeres), 11,9 puntos porcentuales por debajo de la registrada en junio de 2008. La tasa de extrema pobreza decreció de 15,5% en junio de 2008 a 8,4% en el mismo mes de 2017 (8,1 para hombres y 8,6% para mujeres)³⁵.

2.3. Marco normativo y organización del Estado

La vigésima Constitución de la República del Ecuador, en vigor desde octubre de 2008, organiza el Estado en cinco funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia y control social, y electoral. La Carta Constitucional contiene 444 artículos y define al país como un Estado constitucional de derechos. Promueve una

³⁵ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017e. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*. (Quito: INEC).

nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, a fin de alcanzar el buen vivir o *Sumak Kawsay*. Prevé, además, un modelo de desarrollo basado en los principios de justicia, solidaridad y equidad, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, planteando un giro importante hacia la concepción biocéntrica de la relación ser humano-naturaleza.

2.3.1. Marco normativo

La Constitución reconoce la garantía de los derechos, sin discriminación alguna, como deber primordial del Estado (art. 3). Los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; todos, sin distinción, son plenamente exigibles y justiciables. Los contenidos en esta y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación (art. 11), sin perjuicio de otros, derivados de la dignidad humana. Se deben aplicar los principios pro ser humano y de no restricción de derechos (art. 417).

La Constitución incorpora derechos de los **grupos de atención prioritaria**: personas adultas mayores, NNA, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana (incluidas aquellas en condición de asilo o refugio), personas privadas de libertad y personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Por otra parte, se reconocen de manera explícita los derechos de los **adultos mayores** a atención de salud, trabajo remunerado, jubilación, rebajas en servicios, exenciones tributarias y acceso a vivienda. En relación con los **jóvenes**, el Estado debe garantizar sus derechos y promover su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Además, se reconoce a los y las jóvenes como actores estratégicos y se garantiza su acceso a educación, salud, vivienda, recreación, libertad de expresión y asociación. Además, se fomenta su inclusión al trabajo en condiciones justas y dignas (art. 35, 36 y 39).

La Constitución garantiza los derechos de las **comunidades, pueblos y nacionalidades**. Recoge los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Los derechos colectivos contemplados incluyen mantener, desarrollar y fortalecer su identidad, tradiciones ancestrales y formas de organización social; conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, así como participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Además, reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles. Establece que tienen derecho a participar de los beneficios de dichos proyectos y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les puedan causar.

La Carta Magna desarrolla también derechos de los pueblos en **aislamiento voluntario**. Dispone que los territorios de dichos pueblos son de posesión ancestral irreductible e intangible, y que en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Se estipula que la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio.

Según el texto constitucional, está prohibida toda forma de discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física o cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación (art. 11). El principio de paridad de género en el desempeño de empleos y funciones públicas también está respaldado, lo que implica garantizar la participación de las mujeres en igual número que los hombres en el ámbito público, incluidos los espacios de toma de decisiones (art. 61).

Las personas en situación de movilidad humana que se encuentren en el país tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas y no se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Se reconocen los derechos de asilo y refugio y el derecho a la no devolución (art. 9, 40, 41).

A partir de la reforma constitucional, en la última década se aprobaron las siguientes leyes orgánicas³⁶:

- Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018);
- Código Orgánico del Ambiente (2017);
- Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017);
- Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016);
- Ley Orgánica de Cultura (2016);
- Código Civil (ref. 2015);
- Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (2015);
- Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad (2014);
- Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2014);
- Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurrecidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008 (2013);
- Código del Trabajo (2005, ref. 2012);
- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2012);
- Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales (2012);
- Ley Orgánica de Salud (2006, ref. 2012);
- Ley Orgánica de Discapacidades (2012);

³⁶ Pueden consultarse en la página web de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el apartado “Registro de leyes de la Asamblea Nacional del Ecuador”.

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011);
- Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011);
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010);
- Ley Orgánica de Educación Superior (2010);
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010);
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010);
- Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (2009);
- Código Orgánico de la Función Judicial (2009).

Los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han recomendado a Ecuador articular sus leyes con los estándares internacionales aplicables en los siguientes ámbitos: libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, derecho a la comunicación, definición de tortura, privación de la libertad, trabajo infantil, prohibición explícita de castigo corporal a la niñez y adolescencia, discriminación y violencia contra las mujeres, prohibición de prácticas de deshomosexualización, despenalización del aborto en casos de violación, consulta previa, libre e informada, jurisdicción indígena, trabajadores migratorios, movilidad humana y generación de datos desagregados.

2.3.2. Políticas y estrategias nacionales para el desarrollo

La Constitución del Ecuador establece que el régimen de desarrollo tiene como objetivos, entre otros, mejorar la calidad y esperanza de vida, aumentar las capacidades y potencialidades de la población; construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible; fomentar la participación y el control social; recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable; garantizar la soberanía nacional; promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional; promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo, así como proteger y promover la diversidad cultural (art. 275 y 276).

La planificación estará orientada al ejercicio de los derechos y de la convivencia armónica con la naturaleza (art. 275). El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) establece que la planificación nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno central. Se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, al cual define como “la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores”³⁷.

El PND 2017-2021 contiene 3 ejes, 9 objetivos y 81 políticas. Los ejes definen retos programáticos en términos de garantía de derechos, temas económicos y productivos, así como el fortalecimiento del Estado para una mejor provisión de servicios bajo criterios de calidad, transparencia, eficiencia y pertinencia. La visión de largo plazo

³⁷ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Registro Oficial No. 306, de 22 de octubre de 2010, Segundo Suplemento), artículo 10.

del PND 2017-2021 se enmarca en los compromisos internacionales de desarrollo global, particularmente en la Agenda 2030 (tabla 2).

Tabla 2. Ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”

EJES	OBJETIVOS		
Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida.	✓ Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	✓ Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas	✓ Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones.
Eje 2. Economía al servicio de la Sociedad.	✓ Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización.	✓ Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.	✓ Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.
Eje 3. Más sociedad, mejor Estado.	✓ Incentivar una sociedad activa y participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.	✓ Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.	✓ Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.

Fuente: SENPLADES 2017.

Una serie de estrategias e instrumentos sectoriales y territoriales acompañan al PND. Entre ellos, la Estrategia Territorial Nacional (ETN), las Agendas de Coordinación Intersectorial, las Agendas para la Igualdad, las Agendas Zonales, las Políticas Sectoriales, los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, los Planes de Uso y Gestión del Suelo, así como algunas estrategias temáticas, entre las que se destacan la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia de Reconversión Productiva, la Estrategia de Economía Popular y Solidaria, el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, entre otros.

2.3.3. Marco organizativo del Estado

De acuerdo con la Constitución (art. 242), el Estado ecuatoriano se organiza en provincias, cantones y parroquias, así como en regímenes especiales, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población (por ejemplo, los distritos metropolitanos autónomos, el régimen especial de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales). Existen además las mancomunidades, que agrupan dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias, con el fin de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer procesos de integración (art. 243).

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)³⁸ desarrolla el Sistema Nacional de Competencias (SNC) aplicable a los GAD y promueve un proceso de descentralización ordenado y progresivo, solidario, con equidad territorial e incluyente. La tabla 3 resume las competencias del Estado Central y de los GAD.

Tabla 3. Competencias del Estado Central y de los GAD

Estado central	Provincias	Municipios y Distritos Metropolitanos	Parroquias rurales
<ul style="list-style-type: none"> ♦ Defensa nacional, protección interna y orden público ♦ Relaciones internacionales ♦ Registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio ♦ Planificación nacional ♦ Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento ♦ Las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda ♦ Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales ♦ Las que corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales ♦ El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos ♦ Los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales ♦ El control y administración de las empresas públicas nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, cantonal y parroquial ♦ Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas ♦ Ejecutar en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas ♦ La gestión ambiental provincial ♦ Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego ♦ Planificar la actividad agropecuaria ♦ Fomentar las actividades productivas provinciales ♦ Gestión de la cooperación internacional 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial ♦ Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo ♦ Planificar, construir y mantener la vialidad urbana ♦ Servicios de agua potable, saneamiento y manejo de desechos sólidos ♦ Tránsito y transporte público ♦ Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo ♦ Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón ♦ Catastros inmobiliarios urbanos y rurales ♦ Regular y controlar el uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas ♦ Explotación de materiales áridos y pétreos ♦ Prevención, protección, socorro y extinción de incendios ♦ Gestión de la cooperación internacional 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial ♦ Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia ♦ Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural ♦ Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente ♦ Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno ♦ Promover la organización de los ciudadanos de las comunas ♦ Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos ♦ Gestión de la cooperación internacional

Fuente: Constitución del Ecuador.

³⁸ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Registro Oficial No. 303, de 19 de octubre de 2010, Primer Suplemento).

Como un elemento nuevo, la Constitución estableció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este tiene a su cargo promover la participación y designar las comisiones ciudadanas encargadas de seleccionar a los titulares de los organismos de control: la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Procuraduría General. Mediante referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018, se aprobó establecer un CPCCS transitorio que relevó al anterior y evaluará a las autoridades elegidas, como paso previo al establecimiento de un CPCCS de elección popular, en 2019.

2.4. Marcos y compromisos internacionales

2.4.1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: avances en Ecuador

El Estado ecuatoriano mantiene una activa participación e incidencia en la implementación de la Agenda 2030. Ha estado presente desde la propia definición de los ODS, por ejemplo, a través de su trabajo en el Grupo de Composición Abierta para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, así como en el desarrollo de herramientas para monitorear y reportar el cumplimiento de los ODS. Destacan también los aportes a la discusión de la Agenda 2030 del presidente de la República, Lenin Moreno, en su condición previa de representante especial del secretario general en asuntos de movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad. Ecuador fue parte de consultas globales, regionales y temáticas en torno a la Agenda 2030.

El país ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del Gobierno nacional³⁹. La Asamblea Nacional adoptó una resolución en la que se compromete con la implementación de los ODS y los coloca como un referente obligatorio para su trabajo⁴⁰. A nivel local, varios GAD han articulado su planificación para el cumplimiento de la agenda global.

El Gobierno nacional articula además su PND 2017-2021 y su visión de largo plazo con los ODS. Ha desarrollado una línea base sobre su capacidad estadística para medirlos. Finalmente, el sector privado, la sociedad civil y el sector académico también han reconocido su rol frente a esta agenda global y han tomado varias medidas, entre las que se destacan:

- La Visión 2030 del Comité Empresarial;
- Las actividades de representantes locales del Pacto Global, del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) y de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés);
- El proyecto ODS Territorio Ecuador, implementado por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el Grupo FARO, que busca contribuir al cumplimiento de los ODS en lo local;

³⁹ El decreto ejecutivo 371, de 19 de abril de 2018, declara como política pública del Gobierno nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Registro Oficial No. 234, de 4 de mayo de 2018).

⁴⁰ La Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, de 20 de julio de 2017, la compromete con la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, a través de todos los actos legislativos.

- El trabajo de varias universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad de Cuenca, para articular la Agenda al ámbito académico.

En 2018, Ecuador presentó su primer informe nacional voluntario sobre el avance de los ODS ante el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas⁴¹, en el cual destacó los avances y desafíos en la implementación de la Agenda.

2.4.2. Normas internacionales y mecanismos de derechos humanos

Ecuador ha ratificado los instrumentos fundamentales de derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas⁴², así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario. Ha cumplido con el envío de los informes periódicos a los Comités de la ONU encargados de revisar el cumplimiento de dichos tratados. En 2017, recibió observaciones finales del Comité contra la Tortura, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, del Comité de los Derechos del Niño y del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

El país ha pasado por tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso que permite a los Estados hacer una valoración entre pares y recomendar formas de mejorar la situación de los derechos humanos en cada país. Mantiene una invitación abierta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU⁴³. Como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha ratificado sus principales instrumentos en la materia, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha reconocido la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia de la cual ha recibido 22 sentencias en la última década⁴⁴.

2.4.3. Acuerdos y agendas ambientales internacionales

Ecuador integra los principales convenios y convenciones internacionales relacionados con la conservación del medio ambiente, tales como la Convención

⁴¹ Los informes y mensajes principales de la revisión de Ecuador pueden encontrarse en la página web de la Plataforma de Conocimiento sobre Desarrollo Sostenible.

⁴² Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

⁴³ Sus dos últimas visitas incluyen la del Experto Independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (2017) y la del Relator Especial sobre el derecho a la educación (2012).

⁴⁴ En los casos: Zambrano Vélez y otros; Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez; Albán Cornejo y otros; Salvador Chiriboga; Vera Vera y otra; Mejía Idrovo; Pueblo indígena kichwa de Sarayaku; Palma Mendoza y otros; Suárez Peralta; Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros); Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros); Gonzales Lluy y otros; García Ibarra y otros; Flor Freire; Herrera Espinoza y otros; Valencia Hinojosa y otra y Vásquez Durand y otros.

sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos (1993), la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y Sequía (1995), el Protocolo de Kyoto (1997), la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (2000), la Convención de Ramsar o Convención sobre los Humedales (1975), el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2000), la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES (1975), y el Protocolo de Nagoya (2011) sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Ecuador ha ratificado también acuerdos en materia de uso y control de plaguicidas, contaminantes orgánicos persistentes, protección de la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal), de contaminantes orgánicos (Convenio de Estocolmo), de mercurio (Convenio de Minamata), productos químicos peligrosos, patrimonio cultural y natural (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural), cooperación amazónica, reservas de biósfera, manejo medio ambiental, entre los más relevantes.

Recientemente, el país ratificó el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación. De igual manera, tuvo un rol importante en la Conferencia de las Partes en Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP23) y en su presidencia del G77+China, en 2017, al afianzar la necesidad de financiamiento para los países del Sur. También ha propuesto el fortalecimiento institucional de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía, reafirma la soberanía de los países amazónicos e incentiva y orienta el proceso de cooperación regional entre estos. Con esa iniciativa se pretende responder a los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático, la deforestación y la aplicación del Acuerdo de París.

2.4.4. Ecuador y los mecanismos de integración y comerciales

La Constitución establece como uno de los objetivos del régimen de desarrollo “promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial” (art. 276). El PND 2017-2021 señala que Ecuador ha buscado insertarse estratégica y activamente en el orden internacional, privilegiando la integración soberana de los pueblos bajo principios de respeto mutuo de los Estados y su autodeterminación en materia política, económica y financiera, alimentaria, cultural y ambiental. La política 9.2. plantea profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los países vecinos, como espacio de convergencia política y complementariedad económica, logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de cooperación. Esto se dirige a afianzar la capacidad negociadora de la región, el desarrollo de las zonas fronterizas y la libre movilidad de las personas.

Ecuador ha privilegiado el fortalecimiento de mecanismos de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones

Suramericanas (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), para que desde estos espacios se consoliden posiciones comunes de los Estados miembros. El país también es parte de distintas organizaciones internacionales de desarrollo, como los organismos especializados de las Naciones Unidas y del Grupo G77+China.

Son varios los acuerdos comerciales suscritos con otros países o bloques comerciales, que tienen incidencia sobre las exportaciones e importaciones ecuatorianas. Uno de ellos es el Acuerdo de Cartagena (1969), por el que se creó la Comunidad Andina, en busca de un mercado común entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. El Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional No.4 (1984) se firmó con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (1988) fue suscrito entre los países miembros del Grupo de los 77. Entre países del MERCOSUR y la CAN, el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 (2004). En 2016 se firmó el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Existen, además, sistemas generalizados de preferencias con Estados Unidos, México, Panamá, Canadá, Rusia, Japón, Suiza, Noruega, Corea del Sur, Cuba, Chile, Nicaragua, Guatemala, Turquía y Nueva Zelanda⁴⁵.

Finalmente, el país mantiene agendas programáticas y compromisos bilaterales con varios países de la región (Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Honduras, entre otros), con los cuales se abordan temas de desarrollo y seguridad fronterizos. En estos y otros espacios, Ecuador ha impulsado debates sobre desarrollo, pobreza, ambiente y lucha contra los paraísos fiscales y la corrupción.

2.4.5. Cooperación internacional

La generación de relaciones con la comunidad internacional responde a los principios de independencia, igualdad jurídica, convivencia pacífica y autodeterminación, así como a la cooperación, integración y solidaridad. Así lo establece el artículo 416 de la Constitución de Ecuador. El país es signatario de la Declaración de París (2005), la cual constituye un compromiso internacional con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) dirigida a los países en vías de desarrollo, en el marco de principios de apropiación, alineamiento, armonización, rendición de cuentas y gestión por resultados.

En ese marco, el PND 2017-2021 privilegia líneas de cooperación que complementen la acción del Estado para su desarrollo, en especial la cooperación Sur-Sur. El PND resalta la importancia de un enfoque territorial para la cooperación, en línea con lo establecido en el COOTAD, que asigna la gestión de la cooperación internacional como una competencia de los GAD.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) es la entidad nacional rectora del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional. Tiene las funciones de planificación, regulación, control y gestión de la cooperación internacional. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),

45

por su parte, aprueba los programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable⁴⁶.

El nivel de ingreso per cápita es el principal criterio para asignar los recursos financieros de cooperación para el desarrollo. Junto con la decisión de concentrar la cooperación internacional en el combate a la pobreza, ha implicado una canalización hacia países de menores ingresos. Como resultado, la AOD para la región está en descenso desde los años sesenta. Cabe mencionar que la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), en el año 2015, definió al país como no dependiente de la cooperación internacional⁴⁷.

Los principales países u organismos que han entregado cooperación financiera no reembolsable son Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, China, Gran Bretaña, España, Japón, Suiza, Austria y el Banco Interamericano de Desarrollo, en ese orden. En el período referido se registra cooperación internacional por un total de USD 286'687.524. La mayor parte de la cooperación va dirigida al sector social, que representa más de la mitad de los recursos⁴⁸.

En cuanto a cooperación sur-sur, en 2016 se reportó que Ecuador fue oferente de 20 proyectos y receptor de 33 bajo esta modalidad. Los países involucrados incluyen a Perú, Haití, Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Chile, Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil, Cuba, Honduras y San Vicente y las Granadinas⁴⁹.

⁴⁶ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Registro Oficial No. 306, de 22 de octubre de 2010, Segundo Suplemento).

⁴⁷ SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional). 2015. *Agenda nacional de cooperación internacional. Primera parte: política y prioridades de la cooperación internacional*. (Quito: SETECI).

⁴⁸ Información del MREMH sobre los desembolsos de la cooperación internacional en el Ecuador, a partir de datos de los programas y proyectos reportados por los cooperantes entre 2015 y 2016.

⁴⁹ SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). 2016. *Informe de la Cooperación Sur-Sur 2016 en Iberoamérica*. (Madrid: SEGIB), 47-48.

3. Principales desafíos

A continuación, se resumen los principales desafíos identificados dentro de las cinco esferas de actuación establecidas en la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

3.1 Personas

La Agenda 2030 prioriza el desarrollo integral de las personas, incluyendo la erradicación de la pobreza y el hambre en todas sus formas y la garantía de la dignidad e igualdad. Esta esfera abarca los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5, relacionados con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, e igualdad de género.

La Constitución reconoce que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar los derechos, sin discriminación, con miras a alcanzar el “desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (art. 3). El PND 2017-2021 estableció un primer eje para hacer efectivos los derechos de todos y todas, a lo largo del ciclo de vida, con el objetivo de garantizar una vida digna, en igualdad de oportunidades y de condiciones para alcanzarlas, respetando los principios de interculturalidad y plurinacionalidad.

Ecuador ha realizado importantes avances en estos ámbitos, pero aún enfrenta desafíos que serán abordados en los siguientes subtemas: combate y erradicación de la pobreza; desarrollo integral de la primera infancia; derecho a la alimentación; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho a la cultura y diversidad cultural; protección social integral; derecho a una vida libre de violencia y discriminación y preparación y respuesta a emergencias.

3.1.1 Combate y erradicación de la pobreza

La erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad son imperativos de la Agenda 2030 y del PND 2017-2021, bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”. El modelo de desarrollo establecido en la Constitución garantiza los derechos para alcanzar el Buen Vivir, fundamentado en principios como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, y la solidaridad. De este modo, la pobreza no se considera solo un estado de carencia o necesidad, sino uno de no satisfacción plena de derechos.

Respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH)⁵⁰, Ecuador ocupa el puesto 89 de 188 países, por delante de Colombia, República Dominicana y Haití, y por detrás de Uruguay, Perú y Cuba. Desde 1990 hasta 2015, el IDH de Ecuador creció en un 15%, hasta ubicarse en 0,739, lo cual consolida al país en un nivel de alto desarrollo humano⁵¹.

La pobreza por ingresos pasó entre los años 2007 y 2016 de 36,7% a 22,9%, es decir, 1,5 millones de personas salieron de la pobreza, desde una perspectiva monetaria. Sin embargo, al desagregar la población en situación de pobreza por grupo etario

⁵⁰ El IDH es una medición compuesta por los criterios de la longevidad, el nivel de vida y la educación, que desafía las evaluaciones puramente económicas del progreso de las naciones.

⁵¹ PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. *Estrategia de urbanización sostenible: apoyo del PNUD a las ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes en los países en desarrollo*. (Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

(tabla 4), se evidencia que los NNA son más vulnerables a ella, en comparación con el promedio nacional.

Tabla 4. Incidencia de pobreza extrema por ingresos (por ciclo de vida)

Edad (años)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De 0 a 4	22,7 %	22,4 %	20,5 %	17,8 %	15,8 %	15,2 %	11,8 %	11,2 %	11,8 %	11,5 %
De 5 a 11	23,3 %	22,1 %	22,6 %	19,8 %	16,5 %	15,7 %	13,6 %	11,4 %	12,9 %	12,8 %
De 12 a 17	19,6 %	19,5 %	20,2 %	17,4 %	15,4 %	15% %	12,3 %	10,7 %	11,1 %	11,2 %
De 18 a 29	11,6 %	11,5 %	11,2 %	9,5 %	7,9% %	7,6% %	6% %	5,3% %	6,5% %	-
De 30 a 64	13,1 %	12,2 %	12,4 %	10,4 %	9,2% %	8,9% %	6,9% %	6% %	6,5% %	6,9% %
De 65 y más	16,7 %	15,7 %	13,3 %	11,4 %	13,1 %	12,9 %	5% %	4,6% %	5,7% %	6,3% %

Fuente: MCDS 2017.

En el mismo período, el porcentaje de personas con pobreza multidimensional disminuyó de 51,5% en 2009 a 35,1% en 2016. Es decir, 1,8 millones de personas mejoraron sus condiciones de acceso a una vida digna⁵².

Pese a estos avances, en diciembre de 2017 la pobreza nacional se ubicó en 21,5% y la pobreza extrema, en 7,9%. En el área urbana, la pobreza alcanzó el 13,2% y la pobreza extrema el 3,3%, mientras que, en el área rural, estos indicadores fueron del 39,3% y 17,9%, respectivamente⁵³ (tabla 5). También se observan disparidades entre regiones; la Amazonía tiene el mayor porcentaje de población que vive en situación de pobreza, un 59,7%⁵⁴.

Tabla 5. Incidencia de pobreza por ingresos (por territorio)

Territorio	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Urbano	16,1%	17,6%	16,43%	14,44%	15,6%	14,6%
Rural	49,1%	42,0%	35,29%	38,04%	40,9%	40,1%

Fuente: SENPLADES y SETEP 2014; INEC 2017g.

Los índices de pobreza por ingresos, según género y etnia, demuestran una mayor incidencia en mujeres y en poblaciones indígenas, montubias y afrodescendientes. Como se observa en la tabla 6, las mujeres indígenas, montubias y afrodescendientes sufren mayor pobreza que las de otras etnias.

⁵² SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 25.

⁵³ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017e. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*. (Quito: INEC).

⁵⁴ *Ibidem*.

Tabla 6. Incidencia de pobreza por ingresos (según género y etnia)

Sexo y etnia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hombres	34,7 %	35,5 %	32,3 %	28,0 %	26,6 %	24,8 %	21,8 %	22,5 %	22,4 %	22,7 %
Mujeres	35,4 %	36,6 %	33,2 %	29,3 %	28,0 %	26,3 %	23,1 %	24,0 %	23,4 %	23,5 %
Indígena	65,9 %	68,2 %	65,2 %	60,1 %	61,7 %	50,0 %	48,2 %	51,4 %	53,0 %	56,1 %
Blanco	25,7 %	26,3 %	20,6 %	21,3 %	18,6 %	14,2 %	-	-	-	-
Mestizo	31,3 %	32,7 %	28,1 %	23,5 %	22,5 %	21,4 %	18,8 %	18,7 %	18,7 %	19,1 %
Afrodescendiente	43,4 %	42,9 %	37,8 %	35,5 %	36,3 %	34,4 %	-	-	-	-
Montubio	-	-	47,9 %	49,4 %	45,6 %	43,0 %	36,5 %	33,7 %	28,9 %	27,1 %
Nacional	35,1 %	36,0 %	32,8 %	28,6 %	27,3 %	25,6 %	22,5 %	23,3 %	22,9 %	23,1 %

Fuente: INEC – Enemdu (2006-2013). Banco Central del Ecuador (2014-2017).

Las poblaciones indígenas presentan las cifras más altas de pobreza, así como brechas en sus condiciones de vida y atención en salud, en comparación con los promedios nacionales. De acuerdo con los datos de pobreza extrema, esta población presentaba una incidencia de 36,8% en 2006, con una tasa de decrecimiento de 13% durante estos 10 años, llegando a 31,9% en 2016⁵⁵.

Si bien en el período 2006-2014 el coeficiente de Gini se redujo de 0,445 a 0,408, persisten inequidades en los indicadores de pobreza en las zonas rurales: la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es mayor en el sector rural (91%) y en los hogares con más de dos niños/as (80%)⁵⁶. Asimismo, a nivel nacional la pobreza por NBI alcanzó el 31,8%, con una brecha significativa entre lo urbano y lo rural (20,5% y 56,1%, respectivamente)⁵⁷.

Por otro lado, la feminidad de la pobreza se incrementó en Ecuador en dos puntos en los últimos 10 años. Hay tres veces más mujeres que hombres sin ingresos; los hogares con jefatura femenina son más pobres por ingresos que los dirigidos por hombres. La mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. La desigualdad de género en ingresos laborales (en promedio, 20%) se incrementa a medida que mejoran las calificaciones educativas. El número de mujeres adultas mayores sin protección de seguridad social duplica al de hombres⁵⁸. En las zonas

⁵⁵ MCDS (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social). 2017. *Informe de Desarrollo Social 2007-2017*. (Quito: MCDS), 25.

⁵⁶ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2014. *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza*. (Quito: SENPLADES), 29.

⁵⁷ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2013. *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. Quito: SENPLADES), 41.

⁵⁸ Ferreira Salazar, Cynthia, Karina García García, Leandra Macías Leiva, Alba Pérez Avellaneda y Carlos Tomsich. 2014. *Mujeres y hombres del Ecuador en cifras II serie información estratégica*. (Quito: CNIG), 70.

rurales, las brechas de género crecen; el acceso a servicios de cuidado y oportunidades económicas es menor. Por ende, es mayor la inestabilidad de ingresos: en las zonas rurales, la informalidad que afecta a las mujeres supera en 10 puntos a la de los hombres, frente a 2 puntos en las zonas urbanas, de acuerdo con la ENEMDU de 2017⁵⁹.

Las mujeres en hogares más pobres tienen mayor carga de trabajo doméstico. Las indígenas trabajan en promedio 23 horas más a la semana que el resto de la población y presentan los indicadores más graves de pobreza, dependencia económica, bajo acceso a salud, educación, servicios sociales, derechos sexuales y reproductivos⁶⁰. Un elemento importante para entender las desigualdades de género es la brecha en la carga de trabajo dedicado a cuidados no remunerados, el cual se mantiene invisibilizado en la economía por la escasa información, regulación y desigual distribución. La estructura de este trabajo no se ha modificado sustancialmente en los últimos 15 años. La dedicación horaria al trabajo doméstico de las mujeres, frente a la de los hombres, era de 3,5 a 1 en 2003 y de 3 a 1 en 2014, de acuerdo con la información del módulo de uso del tiempo de las encuestas ENEMDU del INEC⁶¹.

La población con necesidades de protección internacional en Ecuador (solicitantes de refugio y refugiados) se encuentra en una situación económica difícil: el 76% de los jefes de familia no alcanza a cubrir el salario básico unificado (SBU). El problema se acentúa en el caso de personas que trabajan por cuenta propia, frente a quienes son asalariados, y en el caso de personas afrodescendientes e indígenas. Las mujeres refugiadas afrodescendientes son las más afectadas⁶².

La pobreza es causa y consecuencia de otros problemas relacionados con el desarrollo infantil, los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la cultura, a la protección integral, a una vida libre de violencia y a la protección de las personas ante situaciones de emergencia.

3.1.2. Desarrollo integral de la primera infancia

El desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población desde la primera infancia contribuye a cumplir estas metas. El objetivo 4, meta 4.2 establece que NNA deben tener acceso a un desarrollo de la primera infancia de calidad. La Constitución señala que el Estado, la sociedad y la familia deberán promover de forma prioritaria el desarrollo integral de este grupo y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo al principio de interés superior.

La primera infancia, comprendida entre los 0 y 5 años de edad, es la etapa de desarrollo más importante y determinante de la vida de los seres humanos. También es la de mayor vulnerabilidad, y en la que debe evitarse a toda costa que ocurran violaciones a los derechos. Las intervenciones en la primera infancia son las más

⁵⁹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017e. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*. (Quito: INEC).

⁶⁰ Ferreira Salazar, Cynthia, Karina García García, Leandra Macías Leiva, Alba Pérez Avellaneda y Carlos Tomsich. 2014. *Mujeres y hombres del Ecuador en cifras II serie información estratégica*. (Quito: CNIG), 108.

⁶¹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2016a. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad 2012-2016*. (Quito: INEC).

⁶² ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de Línea Media”. Hoja Informativa.

costo-efectivas para lograr resultados sostenibles de crecimiento, evidenciadas en el aprendizaje y el potencial mejorados. A largo plazo, esto se palpa en la mayor productividad de una nación.

En primer lugar, la nutrición tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de niñas y niños y, consecuentemente, en el de los países⁶³. La desnutrición es el resultado complejo de la sumatoria de algunas causas, como pobreza, desigualdad, escasa educación de los padres, inseguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene deficitarios, falta de acceso y calidad de servicios, alimentación insuficiente, hábitos alimenticios y enfermedades infecciosas de la infancia.

En Ecuador, pese al incremento de la inversión social (de 4,2% del PIB en 2006 a 9,4% del PIB en 2016)⁶⁴, la desnutrición crónica y la anemia afectan a 1 de cada 4 menores de 5 años⁶⁵. La población indígena es el grupo más vulnerable, con altas prevalencias de retardo en talla en todos los segmentos etarios, aproximadamente el doble que en los grupos no indígenas. Por dicha razón, las áreas geográficas con mayor cantidad de población indígena concentran mayores prevalencias de desnutrición, sobre todo en las provincias de Chimborazo y Bolívar⁶⁶. La tendencia a reducir la desnutrición crónica de los más pequeños se ha estancado⁶⁷. Asimismo, el grupo etario más afectado es el de 6 a 11 meses, con una prevalencia nacional por encima del 60%⁶⁸.

Paralelamente, el país sufre las consecuencias de una doble carga de malnutrición. Existe una incidencia de 29,9% de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años, lo cual implica un alto riesgo de adultos con enfermedades crónicas no transmisibles⁶⁹, con alto costo de atención a problemas crónicos de salud en el futuro⁷⁰.

En segundo lugar, persisten prácticas de cuidado que han naturalizado la violencia en la crianza, lo cual vulnera los derechos de la primera infancia. El castigo corporal,

⁶³ Black, Robert E., Lindsay H. Allen, Zulfiqar A. Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes de Onis, Majid Ezzati, Colin Mathers, y Juan Rivera y for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. 2008. "Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences". *The Lancet* 371.

⁶⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 27.

⁶⁵ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

⁶⁶ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁶⁷ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

⁶⁸ OMS (Organización Mundial de la Salud). 2017. "Situación en materia de salud y desarrollo". Hoja de trabajo.

⁶⁹ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁷⁰

reportado como una realidad cotidiana para NNA, no está prohibido por la legislación de manera expresa en todos los ámbitos. Casi el 40% de los NNA informa haber recibido un trato violento por parte de sus padres, como golpes, baños de agua fría, insultos y burlas⁷¹. Los más afectados son los niños y niñas entre 5 y 12 años. La mayor prevalencia de la violencia contra la niñez en el hogar se registra en la zona rural (42%), en contraste con la zona urbana (36%). En cuanto a etnias, la más afectada es la población infantil afroecuatoriana (52%), seguida de la indígena (48%) y la mestiza (34%)⁷². Las principales expresiones de violencia contra niños y niñas incluyen la negligencia o falta de cuidados adecuados (42%). Le siguen un 25% de niños y niñas que sufren maltrato psicológico; un 18%, maltrato físico y un 7%, abuso sexual. Estas prácticas, junto a la desnutrición y a la falta de entornos estimulantes y saludables, traen consecuencias negativas como bajos niveles de desarrollo y bajos logros de aprendizaje⁷³.

En 2016, el 44,6% de los menores de cinco años participaba en programas de primera infancia, públicos y privados. El PND 2017-2021 tiene como meta incrementar ese porcentaje. El reto en este ámbito es mejorar la calidad, la integralidad, el acceso y la ampliación significativa de la cobertura⁷⁴. El acceso a la educación inicial se ha incrementado durante los últimos seis años. Sin embargo, esta solo llega a la mitad de los niños y niñas de 3 a 5 años y, en algunos distritos, únicamente al 30% de este grupo etario⁷⁵.

3.1.3. Derecho a la alimentación

El ODS 2 de la Agenda 2030 busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. La Constitución establece como deber primordial del Estado la garantía sin discriminación del derecho a la alimentación (art. 3), además de reconocer la soberanía alimentaria como uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo. Los artículos 13 y 281 reflejan el derecho a un acceso seguro y permanente a alimentos sanos y nutritivos. El objetivo 6 del eje 2 del PND 2017-2021 busca generar capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

En Ecuador, la prevalencia de subalimentación se ha reducido de 17% en 2006 a 12,1% en 2016. Sin embargo, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), el 6,6% de la población se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria severa⁷⁶. Uno de los principales problemas de

⁷¹ Velasco, Margarita, Gioconda Carrera, Jesús Tapia y Eduardo Encalada. 2016. *Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad. Ecuador 2016*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 49.

⁷⁵ MINEDUC (Ministerio de Educación). 2016. *Rendición de cuentas 2016*. (Quito: MINEDUC).

⁷⁶ FAO (Food and Agriculture Organization), FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), OMS (Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de Alimentos) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2017. *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria*. Roma: FAO.

salud pública es la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, cuantificada en 25,3%⁷⁷. Además, resaltan otras condiciones relacionadas como anemia (25,7%), deficiencia de zinc (27,5%) y bajo peso (6,4%), que contrastan con la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mismo grupo de edad (8,6%)⁷⁸.

Ecuador ocupa el lugar 62 entre los 119 países incluidos en el Índice Global del Hambre (IGH). La dieta alimentaria nacional revela varias carencias: las frutas representan el 16% de los productos consumidos por las personas más pobres y el 27% en el caso de los hogares más ricos⁷⁹. El consumo nacional medio de frutas y hortalizas (183 gramos por persona al día) es considerablemente menor que los 400 gramos recomendados por la OMS. El acceso limitado de la población refugiada a alimentos se traduce en que el 64% de los recién llegados los consume de forma insuficiente o apenas suficiente para atender sus necesidades alimentarias básicas. La variedad de su régimen alimenticio es escasa⁸⁰.

Pese a que la prevalencia de la malnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años disminuyó de 40,2% a 23,9% entre 1986 y 2014, aún existen índices altos de desnutrición infantil. Entre las razones del limitado progreso figuran la falta de sensibilización nutricional, la escasa diversidad alimentaria, el limitado acceso a alimentos nutritivos, agua e infraestructura de saneamiento básica, las deficientes prácticas de higiene y la elevada exposición de niños y niñas a enfermedades⁸¹.

Ligada a la alimentación se encuentra la seguridad y soberanía alimentaria. La agricultura familiar representa el 75% de las unidades agrarias, pero solo utiliza el 17% de la superficie agrícola del país. Si bien Ecuador es un país con autosuficiencia en la mayoría de los alimentos básicos, en el transcurso de los últimos 50 años la ha perdido principalmente en los de origen vegetal. Entre 1961 y 2009, Ecuador perdió cerca de siete puntos en autosuficiencia alimentaria: de 99,2% a 92,4%. La tendencia creciente a la disminución se debe, en especial, a la apertura de la economía y la dedicación de la tierra y los productos agrícolas a fines no alimentarios como los biocombustibles. La competencia externa afecta a la pequeña producción que alimenta el consumo interno, a cargo principalmente de las mujeres en zonas rurales⁸².

3.1.4. Derecho a la salud

La Constitución de 2008 reconoce la salud como un derecho cuya realización se vincula al ejercicio de otros, entre ellos, el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social y a los ambientes sanos.

⁷⁷ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. *Plan estratégico para el Ecuador (2017-2021)*. (Roma: PMA), 5.

⁸⁰ *Ibidem*, 3.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Enríquez Bermeo, Francisco. 2015. *Seguridad alimentaria: responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales*. (Quito: Ediciones Abya-Yala).

En el ámbito institucional, la autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), que tiene la rectoría en salud, así como la responsabilidad de aplicar, controlar y vigilar por el cumplimiento de las normas en este ámbito. El MSP cuenta con una Dirección Nacional de Salud Intercultural, encargada de formular y coordinar la implementación de políticas de salud intercultural que garanticen el reconocimiento y respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades, al igual que la articulación de los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de salud. En 2015 se atendieron en el país 13.785 partos en libre posición. Un total de 26.804 partos tuvieron el acompañamiento de un familiar elegido por la parturienta. A nivel nacional existen 76 salas de parto, adecuadas con la infraestructura y el equipamiento necesarios⁸³.

El gasto público en salud registró un crecimiento de 2007 a 2016: pasó del 1,2% del PIB al 2,92%. Como resultado, se incrementó la atención en los establecimientos de salud pública. En 2012, 64,6% de la población fue atendida en un establecimiento público, en comparación con un 32,5% en 2004⁸⁴. Al desagregar estos datos por área, el 75,2% de la población rural acudió a un establecimiento público y el 19,7%, a un centro privado; mientras que en la zona urbana los datos son 59,9% y 31,6%, respectivamente. La población refugiada accedió principalmente a la red pública de salud (85%); 6% accedió a servicios de salud privada y 9% optó por automedicarse o no atenderse⁸⁵.

El 5,7% de la población con discapacidad se encuentra afiliada al IESS; el 2,6%, a un seguro privado. Persisten algunos desafíos en su acceso a los servicios de salud, sobre todo en la dotación de insumos médicos, dispositivos de apoyo, órtesis y prótesis, servicios de rehabilitación y accesibilidad⁸⁶.

A continuación se describen los principales desafíos para garantizar el derecho a la salud. El país presenta una transición epidemiológica en la que coexisten enfermedades transmisibles y parasitarias con enfermedades crónicas no transmisibles y otras asociadas con causas externas. Las principales causas de muerte son: 1) enfermedades no transmisibles, con una tasa de 430,3 por cada 100.000 habitantes (enfermedades del corazón, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades hipertensivas); 2) enfermedades transmisibles, con 86,9 por cada 100.000 habitantes (neumonía, influenza) y 3) causas externas por accidentes y violencias, con 81,3 por cada 100.000 habitantes. Estos datos superan la

⁸³ MSP (Ministerio de Salud Pública), SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), UNFPA (Fondo de Población para las Naciones Unidas) y SENDAS. 2017. *Estudio costos de omisión en salud sexual y reproductiva en el Ecuador*. (Quito: MSP/SENPLADES/UNFPA/SENDAS).

⁸⁴ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁸⁵ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. "Encuesta de Línea Media". Hoja Informativa.

⁸⁶ CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). 2013. *Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017*. (Quito: CONADIS).

tasa estimada por la OMS de 14,2 por cada 100.000 habitantes y representan una de las mayores tasas de los países andinos⁸⁷.

Respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, la morbilidad y mortalidad prematura está asociada con factores de riesgo intermedios como obesidad e hipertensión, y con factores de riesgo conductuales como alimentación inadecuada, consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol y actividad física insuficiente. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU) de 2012, el 62,8% de adultos de 20 a 60 años presentó sobrepeso y obesidad; el 2,7% de la población de 10 a 59 años presentó glucosa elevada en sangre y el 9,3% de la población entre 18 y 59 años presentó hipertensión arterial. Además, en la población mayor de 15 años, el 2,8% consumía tabaco, el 6,6% consumía alcohol en exceso y el 62,7% hacía actividad física insuficiente⁸⁸.

En relación con las enfermedades crónicas transmisibles, la introducción de los virus de Chikungunya y Zika y los reportes de casos de fiebre amarilla, sumados al comportamiento endémico del dengue, representan un reto para el diagnóstico, manejo de casos y la vigilancia epidemiológica. La letalidad por dengue en 2016 fue de 0,02%, lo cual superó la meta de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control del Dengue para la Subregión Andina (EGI-Dengue). La circulación viral expresa un riesgo latente de brotes que, de no ser controlados, pueden causar un impacto negativo en la salud pública y en las condiciones socioeconómicas del país. Desde la introducción del virus de Zika, se han reportado 6.811 casos (sospechosos y confirmados). El número de embarazadas infectadas por virus se ha triplicado desde 2015.

Adicionalmente, en los últimos 10 años, Ecuador ha logrado reducir más del 90% de la transmisión de la malaria, lo que lo ubica en la región como país con perspectivas de eliminación. En relación con las enfermedades categorizadas como desatendidas, muestra condiciones y oportunidades para eliminar la lepra, la rabia, el pian, la peste y el vector *T. dimidiata*, transmisor de la enfermedad de Chagas. Si se mantiene una voluntad política de alto nivel y una planificación programática clara, es posible la certificación de interrupción y eliminación en los próximos cuatro años.

En cuanto al virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), se estima que en Ecuador hay 33,000 personas que viven con el virus, 1900 nuevas infecciones por año y menos de 1,000 muertes relacionadas con el SIDA por año (la mayoría, adultos varones). Las poblaciones que presentan

⁸⁷ OMS (Organización Mundial de la Salud). 2017. “Situación en materia de salud y desarrollo”. Hoja de trabajo.

⁸⁸ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁸⁸ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

las más altas prevalencias del VIH son los hombres que tienen sexo con hombres (16,5% en Quito y 11,2% en Guayaquil) y las mujeres transgénero (34,8% en Quito y 20,7% en Guayaquil). En 2016, la cobertura del tratamiento antirretroviral alcanzó al 51% de la población; apenas el 19% había suprimido la carga viral ese mismo año. La prevalencia en mujeres embarazadas en la Costa (El Oro, Esmeraldas y Guayas) es de 1,2%, mayor al resto del país (0,25%). Por ende, son necesarias intervenciones específicas para evitar la transmisión de madre a hijo. El MSP ha recibido información sobre casos de VIH notificados en áreas indígenas de la Amazonía (cerca de la frontera entre Ecuador y Perú), pero se requiere mayor evidencia para diseñar un programa culturalmente pertinente.

El MSP lidera la respuesta nacional al VIH, con el apoyo del Comité Multisectorial Ecuatoriano VIH / SIDA (CEMSIDA). Ecuador recientemente actualizó el Plan Estratégico Nacional. Este tiene como objetivo cerrar las brechas para alcanzar las metas “90 90 90” en VIH (90% de las personas con VIH conocen su diagnóstico, 90% de las anteriores acceden a tratamiento y 90% de las personas que están en tratamiento logran suprimir la carga viral y, por lo tanto, no transmitir el virus) e invertir en la eliminación de la transmisión del VIH de madre a hijo (eMTCT). El país también cuenta con un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021, que incluye lineamientos para salud materna y neonatal, planificación familiar, prevención de embarazo adolescente, violencia basada en género, salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad, VIH/SIDA, entre otros.

Se observa un descenso de la fecundidad en Ecuador, cuya tasa global pasó de 5,4 hijos entre 1975 y 1979 a 3 hijos entre 2007 y 2012. Sin embargo, las mujeres sin instrucción tienen una tasa global de fecundidad de 4,4; mientras que aquellas con nivel de educación superior tienen una tasa de 2,1. Según quintiles de pobreza, existe una brecha significativa entre el número de hijos de los hogares más pobres (Q1: 4,1 hijos) y el de los hogares más ricos (Q5: 2,1 hijos)⁸⁹.

Los embarazos adolescentes tienden a incrementarse y a ocurrir en edades más tempranas. Se registran 2.083 madres entre 10 y 14 años; entre 15 y 19 años, 60.623⁹⁰. En 2015, el porcentaje de nacimientos en mujeres entre 12 y 17 años fue de 10,2%, mientras que en 2006 fue de 8,1%. El embarazo de menores de 15 años requiere consideraciones especiales, por su tendencia al aumento y por su vinculación con la violencia sexual. Así, el 8% de los embarazos fueron con un hombre de 30 años o más. El 7,5% de embarazos en menores de 15 años terminó en aborto⁹¹. De

⁸⁹ UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). 2017a. *Documento de información contextual*. (Quito: UNFPA).

⁹⁰ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 101.

⁹¹ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

igual forma, el 3% de mujeres con discapacidad tuvo su primer hijo antes de los 14 años⁹².

El embarazo y la maternidad causan deserción escolar y pobreza. Según la ENSANUT, 6.487 adolescentes abandonaron los estudios por esta razón⁹³, lo que conlleva situaciones de vulneración de derechos que afectan su proyecto de vida. Por ser una problemática en aumento, se ha colocado como meta nacional para el 2021 disminuir del 76,5% al 63,5% la tasa específica de nacidos vivos en mujeres adolescentes entre 15 a 19 años⁹⁴.

El Comité de Derechos del Niño recomendó en 2017 crear una política nacional para enfrentar los embarazos en la adolescencia. Entre otras acciones, esta contemplaría el acceso a información actualizada sobre los métodos de planificación familiar, el enfrentamiento a la violencia sexual por razones de género y la colaboración estrecha con las organizaciones de mujeres y de niños. Esto se enfoca a crear mecanismos de prevención eficaces, que incluyan procedimientos de denuncia y alerta temprana en las situaciones de violencia y abusos sexuales por parte de padres, familiares o cuidadores. También ha enfatizado en la necesidad de garantizar que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos, el aborto terapéutico. Se ha recomendado estudiar la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y a los casos de incesto o violencia sexual⁹⁵.

De 2010 a 2014 se reportó un descenso continuo de la mortalidad infantil: de 9,32 a 8,4 por 1.000 nacidos vivos. El 55% de las muertes ocurrió antes del primer mes de edad y el 31%, en los tres primeros días después del nacimiento. Las provincias de Bolívar, Chimborazo y Carchi registran los índices más altos. Cinco enfermedades provocan el 63% de los fallecimientos: afecciones en el período perinatal, malformaciones congénitas, influenza y neumonía, accidentes de transporte e infecciones intestinales⁹⁶. Las causas de muerte ligadas a la dotación de agua y saneamiento han ido desapareciendo a lo largo de los últimos 25 años, pero simultáneamente se ha incrementado la morbilidad por la calidad de los servicios de salud y los accidentes de tránsito.

⁹²

⁹³ Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. (Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC).

⁹⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), 58.

⁹⁵ CRC (Comité de los Derechos del Niño). 2017. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador. (S.l.: CRC), 5-6.

⁹⁶ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2016b. *Reporte de pobreza por consumo. Ecuador 2006-2014*. (Quito: INEC).

La mortalidad neonatal disminuyó de 2007 a 2015: de 6 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos a 5,2. La razón de mortalidad materna fue de 64 por 100.000 nacidos vivos en 2015⁹⁷. Las muertes fueron producidas principalmente por complicaciones durante el embarazo y el parto o después de ellos. El 75% de las muertes maternas fue causado por hemorragias graves, infecciones, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y abortos peligrosos. El 23,4% de las madres indígenas afirmó no haber tenido control prenatal. Solo el 8,4% recibió el control posparto en los primeros 7 días; el 37,6%, entre los 8 y los 40 días posteriores al parto⁹⁸.

El uso de anticonceptivos modernos alcanza el 67,2%. Sin embargo, persisten las brechas de demanda insatisfecha, la cual corresponde al 7% a nivel nacional. En el caso de mujeres indígenas, asciende al 10,4%; en afroecuatorianas, 10,1% y en mujeres sin instrucción, 9,2%. Se observa un mayor uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres, con respecto a los hombres. La esterilización femenina es el método más utilizado para prevenir un embarazo no intencionado. La práctica aumentó en alrededor de 8 puntos porcentuales entre 2004 y 2012, al pasar del 24,2% al 32,3%. Otros métodos que crecieron en casi cinco puntos fueron la inyección y el implante. Mientras tanto, se redujo el uso de métodos como las pastillas anticonceptivas, el dispositivo intrauterino (DIU) y el ritmo⁹⁹.

El derecho a la salud enfrenta varios desafíos tanto en el acceso y la atención oportunos y de calidad como en la implementación integral familiar y comunitaria. Es necesario fortalecer un modelo preventivo, fomentando hábitos saludables en la población, así como garantizar recursos económicos y de talento humano en el Sistema de Salud Pública. La salud física y mental debe ser inclusiva e intercultural y, asimismo, enfatizar en la salud reproductiva y la malnutrición, problemas que afectan gravemente a la sociedad.

3.1.5. Derecho a la educación

El ODS 4 busca garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. La Constitución (art. 26) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantizan el derecho de la población a la educación universal y gratuita en los niveles inicial, básico, bachillerato y superior, hasta el tercer nivel.

El presupuesto total de educación para el período 2007-2016 ascendió a 24.165 millones de dólares, lo que representa un promedio anual 3,37 veces mayor al logrado durante los años 2000 y 2006. Esta inversión permitió incrementar el acceso a la educación escolarizada (tanto en planteles públicos como particulares y fiscomisionales)¹⁰⁰, así como avanzar en la revalorización y el fortalecimiento de la carrera docente.

⁹⁷ OMS (Organización Mundial de la Salud). 2017. “Situación en materia de salud y desarrollo”. Hoja de trabajo.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 26.

Entre 2007 y 2015 creció la matriculación en el sistema público de educación. La tasa neta de asistencia a Educación General Básica (EGB) alcanzó un 96,23% en 2016, con lo que se logró mantener la universalización obtenida en 2011¹⁰¹. Asimismo, la tasa neta ajustada de asistencia al bachillerato alcanzó un 72,25% ese mismo año, es decir, 18,87 puntos porcentuales más que en 2007 y 3,32 puntos porcentuales más que en 2015¹⁰².

La población en edad escolar de 3 a 17 años fue de 4'971.294 en 2016. En educación inicial se contabilizaban 427.909 estudiantes, en la EGB, 3'337.249 y en bachillerato, 847.471¹⁰³. Ecuador tiene cerca de 11 años de escolaridad promedio y la brecha de género en este ámbito tiende a eliminarse. A pesar de las mejoras, las desigualdades aún persisten, en especial las relacionadas con grupos étnicos y área de residencia. Las mujeres en el área rural presentan cerca de la mitad de escolaridad, en comparación con el área urbana. También se observa que el acceso en las zonas rurales y la permanencia en contextos de vulnerabilidad siguen siendo retos para la inclusión educativa.

La exclusión afecta principalmente a los pueblos montubio, indígena y afrodescendiente, así como a la población en movilidad humana. Las zonas que concentran más del 60% de los NNA excluidos están en la Costa, la Sierra centro y la frontera norte¹⁰⁴. Es importante resaltar que 223.426 NNA de 5 a 17 años se encuentran fuera del sistema educativo ecuatoriano y 424.655 NNA de 7 a 19 años presentan rezago escolar¹⁰⁵.

La tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más decreció de 7,9% en 2007 a 5,6% en 2016. Las mujeres presentan igual nivel de analfabetismo en promedio que los hombres, sin embargo, el promedio de analfabetismo de las mujeres indígenas es 5 veces mayor al de los hombres mestizos.

La calidad de la educación, entre los años 2016 y 2017, se refleja en las pruebas Ser Bachiller, que evalúan las aptitudes del estudiantado de tercer año de bachillerato para postular por un cupo a instituciones de educación superior. En el caso de los hombres de zonas urbanas, el 27,32% tuvo un logro insuficiente y en el caso de las mujeres, el 28,37%. En las zonas rurales, los niveles de insuficiencia son más altos: 33,45% para los hombres y 33,2% para las mujeres¹⁰⁶. Entre las principales causas de la falta de acceso al bachillerato se encuentran, además del rezago escolar, el género, la etnia y la procedencia geográfica. La mitad de los adolescentes que presentan retraso escolar entre los 15 y 17 años son indígenas¹⁰⁷. A estas causas se suman el embarazo y las condiciones de vida de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Durante 2015 se estimaron 6.487 casos de adolescentes que

¹⁰¹ MINEDUC (Ministerio de Educación). 2016. *Rendición de cuentas 2016*. (Quito: MINEDUC).

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³

¹⁰⁴ INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 2014. *Encuesta de condiciones de vida*. (Quito: INEC).

¹⁰⁵ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

¹⁰⁶ INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 2017. "Evaluaciones Ser Bachiller".

¹⁰⁷ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 69.

abandonaron los estudios por un embarazo. Más de la mitad (56%) estaba cursando la educación básica, por lo que se calculó un total de 36.871 años de escolaridad perdidos, con una media de 5,8 años por mujer¹⁰⁸.

Con respecto a la población refugiada, las familias tienden a brindar mayor apoyo al acceso de la educación básica de población entre 5 y 14 años de edad: 85,71% frente al 95,2% de la población nacional. La situación cambia en el grupo de personas que debería cursar la educación media, entre los 15 y 17 años: el 69% se encuentra asistiendo a clases, pero tan solo el 42% en el nivel que le corresponde, frente al 70% de la población nacional¹⁰⁹.

Es importante destacar que el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) está reconocido en la Constitución (art. 57) y garantizado a través de la LOEI en todos los niveles de Gobierno. No obstante, en 2015 se evidenció un déficit en el número de docentes y de material didáctico adecuado para una educación intercultural. Además, 9 de cada 10 instituciones educativas interculturales bilingües carecen de oferta de bachillerato. El Comité de Derechos del Niño recomendó al país aprobar estrategias como programas de acción afirmativa para enfrentar las diferencias en el acceso a la educación y en el abandono escolar por parte de los niños que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos. De igual forma, recomendó asegurar una asignación presupuestaria apropiada y acelerar la aplicación de una educación bilingüe intercultural de calidad en todas las provincias, entre otras vías mediante materiales adecuados, docentes bilingües y herramientas educativas¹¹⁰.

Por otro lado, según la Constitución (art. 347), es responsabilidad del Estado asegurar que todas las entidades educativas impartan educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. No obstante, uno de los temas pendientes en el país es la adopción de un currículo de Educación Integral de la Sexualidad y su implementación en el sistema educativo nacional.

Otra problemática que requiere atención prioritaria es la violencia en espacios educativos. Existe una incidencia mayor en niños y niñas indígenas y afroecuatorianos: en ambos casos, el 23% refiere haber recibido algún trato violento. En la población blanco mestiza, la cifra es solo el 6%. Vinculado con ello se encuentra el alto grado de incidencia de acoso escolar. En el país la problemática afecta aproximadamente a 2 de cada 10 estudiantes entre 11 a 18 años. El 22,8% de los estudiantes ha sido víctima de un acto violento más de tres veces en un quimestre. Entre 2003 y 2013, la incidencia de acoso escolar fue del 29%¹¹¹.

¹⁰⁸ MSP (Ministerio de Salud Pública), SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), UNFPA (Fondo de Población para las Naciones Unidas) y SENDAS. 2017. *Estudio costos de omisión en salud sexual y reproductiva en el Ecuador*. Quito: MSP/SENPLADES/UNFPA/SENDAS.

¹⁰⁹ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de Línea Media”. Hoja Informativa.

¹¹⁰ CRC (Comité de los Derechos del Niño). 2017. *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador*. (S.l.: Comité de los Derechos del Niño).

¹¹¹ MINEDUC (Ministerio de Educación), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y World Vision. 2015. *Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador. Violencia entre pares en el sistema educativo*. (Quito: MINEDUC/UNICEF/World Vision), 36.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) replanteó la educación superior como bien público y motor del desarrollo. Los recursos asignados entre 2007 y 2016 llegaron a 8.799,83 millones de dólares. Existió un aumento del 28% al 39% de estudiantes matriculados¹¹². En 2017 egresaron de bachillerato 127.477 estudiantes, de los cuales 110.496 estaban habilitados para postular a la educación superior, por haber obtenido el puntaje requerido en la prueba Ser Bachiller. De ellos, 63.544 postularon a uno de los 30.106 cupos existentes para las universidades públicas, lo cual generó una amplia brecha entre la oferta y la demanda¹¹³.

Se registra también un aumento del número de becas otorgadas para formación y/o especialización de profesionales. Entre 2007 y 2016 se entregaron 19.586 becas, en comparación con las 237 otorgadas entre 1995 y 2006. Pese a los avances en la gratuidad del acceso a la educación superior, la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES), a partir de 2012, creó una nueva barrera al ingreso, puesto que favoreció a estudiantes provenientes de unidades educativas con mayor trayectoria, en muchos casos del sector privado¹¹⁴.

Los datos de los últimos 20 años muestran incrementos importantes en el acceso de las mujeres a la educación superior. En 2016, el 22% de hombres y mujeres mayores de 18 años tenía acceso a educación superior, sin existir brechas de género. Cerca del 62% de la población de hombres y mujeres con educación superior tenía un título universitario. No obstante, existen diferencias marcadas en la culminación de la carrera universitaria. Contribuyen a esa situación carreras diferenciadas por sexo, con barreras formales e informales de acceso, como los horarios de estudio (las mujeres prefieren estudiar de día, por la inseguridad), la distancia de los centros de estudio, la falta de centros de cuidado para hijas e hijos de madres estudiantes y el acoso y la violencia sexual¹¹⁵. A ello se añade la desigualdad en el porcentaje de mujeres docentes y en el acceso de mujeres a puestos de dirección en las instituciones de educación superior.

Asimismo, el acceso a la educación superior de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y en movilidad humana aún es limitado. Se estima que solo un 2% de la población refugiada reconocida en Ecuador accede a educación terciaria. Muy pocos establecimientos de educación superior brindan becas a este sector. La situación general de vulnerabilidad de las familias refugiadas y los limitados recursos económicos obligan a los jóvenes a priorizar las actividades de generación de ingresos, en lugar de la educación.

3.1.6. Derecho a la cultura y a la diversidad cultural

La Agenda de Desarrollo Sostenible incorpora por primera vez y de forma específica la cultura como un aspecto fundamental del desarrollo humano. El objetivo 11 plantea como meta la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y

¹¹² SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 26.

¹¹³

¹¹⁴ Ponce, Juan, y Fernando Carrasco. 2016. “Acceso y equidad a la educación superior y posgrado en el Ecuador, un enfoque descriptivo”. *Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Política y Acción Pública* 2 (3): 9-22.

¹¹⁵ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2012. *Atlas mundial de la igualdad de género en la educación*. (Francia: Ediciones UNESCO).

natural del mundo. La Constitución reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Establece la igualdad de oportunidades para acceder a los bienes de la cultura y para participar en la creación de nuevos valores culturales.

Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales encaminados a fomentar el desarrollo de la cultura, los derechos culturales y la diversidad cultural en el país. Según los Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD), el país tuvo un resultado de 0,96 / 1,00 en la variable de desarrollo del marco normativo nacional. Asimismo, cuenta con 5 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, 3 manifestaciones inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y, finalmente, 2 ciudades que forman parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

En el año 2016 se aprobó la Ley Orgánica de Cultura, que tiene entre sus fines fomentar el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad; fortalecer la identidad nacional; impulsar la libre creación y promover el uso del espacio público para las expresiones artísticas y culturales; salvaguardar el patrimonio e incentivar la descentralización y desconcentración de la institucionalidad del sector cultural. La normativa ecuatoriana también ha incluido reformas tributarias a fin de impulsar las actividades culturales. Una de las más recientes es la introducida en el año 2018, que incorpora los gastos en arte y cultura como valores deducibles en las declaraciones de impuestos.

Con respecto a las industrias culturales y creativas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), órgano rector de las políticas culturales nacionales, ha priorizado la ejecución de acciones en cuatro sectores: (i) editorial, (ii) audiovisual, (iii) fonográfico y (iv) diseños y artes aplicadas. Entre 2012 y 2016 se generó una serie de políticas para promover y difundir la producción artística cultural nacional.

La contribución del sector cultural al PIB, así como la población en ocupaciones culturales, revela la importancia de este sector para el país. El aporte fue del 4,76% del PIB¹¹⁶

; el 57,4% provenía de las actividades culturales centrales y el 42,6% de actividades de apoyo o equipamiento. Al examinar la contribución de la cultura por sectores de la economía, el 42,6% se ubica en el sector de la información y la comunicación, mientras que el segundo mayor porcentaje corresponde a actividades profesionales científicas y técnicas (20,8%), lo cual incluye la publicidad, el diseño y la arquitectura.

En 2010, el 2,2% de la población empleada en Ecuador se ocupó en empleos culturales y creativos. De ella, 63,5% eran hombres y 36,5%, mujeres¹¹⁷. Los subsectores que más contribuyeron al empleo nacional incluyeron artesanos textiles y del cuero (27,9%), arquitectos (7,0%), diseñadores gráficos y multimedia (5,6%), profesionales de marketing y publicidad (5,5%) e impresores (4,4%).

Las cifras contrastan con la participación de la población ecuatoriana en actividades culturales fuera del hogar (8,4%) y con el consumo cultural de los hogares (3,41%).

¹¹⁶ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2012. *Atlas mundial de la igualdad de género en la educación*. (Francia: Ediciones UNESCO).

¹¹⁷ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2012. *Atlas mundial de la igualdad de género en la educación*. (Francia: Ediciones UNESCO), 6.

El 8,2% de la población urbana y el 8,7% de la rural participó al menos una vez en una actividad cultural. De acuerdo con la última encuesta de uso del tiempo, realizada en 2012, los hombres dedicaban un 35% más de tiempo a actividades culturales que las mujeres, lo cual ratifica la pobreza de tiempo que tienen ellas, cuya carga global de trabajo es superior a la de los hombres en 20 horas (promedio urbano y rural)¹¹⁸.

Ecuador obtuvo un resultado de 0,57 / 1,00 en la distribución de la infraestructura cultural; 0,59 / 1,00 para museos; 0,38 / 1,00 para espacios de exhibición dedicados a las artes escénicas y 0,73 / 1,00 para bibliotecas y mediatecas. Todas las provincias cuentan con un mínimo de 30 bibliotecas; las cifras más altas corresponden a las de mayor población¹¹⁹.

La promoción de la educación artística en los primeros años de enseñanza también fue considerada dentro de los IUCD de la UNESCO. En 2010 se dedicó a la educación artística un promedio nacional del 17% del total de horas de instrucción en la educación secundaria. Esto le permitió a Ecuador tener un porcentaje mayor que el de la media de los países donde han sido implementados los IUCD.

La cooperación en el sector cultural se ha reflejado principalmente en las acciones desarrolladas por España, Japón, la Corporación Andina de Fomento (CAF), Francia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de becas, expertos y asistencia técnica reembolsable¹²⁰.

3.1.7. Protección social integral

De acuerdo con la CEPAL, la protección social incluye “una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y también buscar “el logro de ciertos niveles dignos de ingreso”¹²¹. El PND 2017-2021 vincula al Sistema de Protección Integral con la seguridad social y lo define como un mecanismo para lograr justicia y equidad, que incluye protección social, protección especial y servicios de cuidados a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad. El sistema está encaminado a prevenir la vulneración de derechos de quienes más lo necesitan, entre ellos, las madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad¹²².

Por mandato constitucional, la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, un deber y responsabilidad primordial del Estado (art. 34). Por tanto, su ejercicio debe ser garantizado de manera plena y efectiva. Este derecho abarca todo tipo de trabajo, sea remunerado o no. Se protege el trabajo no remunerado en los hogares, las actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo e inclusive a quienes se encuentran en situación de desempleo. El

¹¹⁸ INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2012. *Encuesta del uso del tiempo 2012*. (Quito: INEC/CDT).

¹¹⁹ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2012. *Atlas mundial de la igualdad de género en la educación*. (Francia: Ediciones UNESCO).

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Cecchini, Simone, Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossell. 2015. *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. (Santiago de Chile: Naciones Unidas).

¹²² SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 54.

Gobierno nacional se planteó la meta de incrementar al 51,2% para el año 2021 el número de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública contributiva¹²³.

El porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) afiliada a la seguridad social contributiva –Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)– presentó una mejora sustancial entre 2007 y 2016, al pasar de 26,3% a 42,1%¹²⁴. Parte importante del incremento guarda relación con reformas que permitieron la afiliación al IESS de trabajadores y trabajadoras no remuneradas del hogar. Si bien la medida permitió incrementar el acceso a la seguridad social, requiere ser revisada desde un enfoque de género, pues sostiene la dependencia de mujeres y hombres que trabajan en casa sin remuneración, lo cual profundiza la relación de poder.

Pese a los avances, 6 de cada 10 personas de la PEA no tienen acceso a la seguridad social contributiva. Las poblaciones que están por fuera de la PEA incluyen mayoritariamente a aquellos grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad, entre los que destacan las adultas y los adultos mayores (solo el 34% tiene acceso) y la población en movilidad humana. El acceso desigual afecta de manera especial a las personas más pobres, pues en el quintil 1 de la PEA apenas el 18% tiene acceso a la seguridad social contributiva. De la población indígena, apenas el 21%¹²⁵.

Las brechas de género en el acceso a la seguridad social están asociadas directamente con la vinculación al trabajo formal. En 2017 existía una brecha de 10 puntos. Por otro lado, 60% de las mujeres adultas mayores no están cubiertas por pensiones del sistema regular de la seguridad social, frente al 10% de hombres en estas edades¹²⁶. Esa desprotección implica también un menor acceso a servicios de salud, cuidado directo y autonomía económica. ~~Además, en el caso de las mujeres, el orden de género y los roles asignados han provocado que la mitad de esta población en edad de trabajar quede por fuera de la PEA. De este grupo, el 85% se ve afectado por su trabajo de cuidados y tareas en el hogar (Fuente).~~

El PND 2017-2021 ha establecido como política nacional el fortalecimiento del Sistema de Inclusión y Equidad Social, la protección integral, la protección especial, la atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en grupos de atención prioritaria y personas en situación de movilidad humana¹²⁷.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dirige la política de inclusión económica y movilidad social. Esta incluye dos elementos fundamentales: el aseguramiento universal y no contributivo frente a un conjunto de riesgos (entre ellos,

¹²³ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), 58.

¹²⁴ *Ibidem*, 50.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2016. *Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016*. Ginebra: OIT.

¹²⁷ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), 58.

la caída en pobreza) y la garantía de acceso a un conjunto básico de satisfactores de necesidades y capacidades para la autonomía. La política combina diferentes modalidades de aseguramiento no contributivo, como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que ha sido definido por CEPAL como el “principal Programa de la Política de Protección Social en el país por la cobertura e inversión que representa”¹²⁸.

El BDH consiste en transferencias monetarias, condicionadas al cumplimiento de controles de salud y al enrolamiento en la educación de los NNA. Es entregado a madres en situación de pobreza; a adultos mayores, para dar un aseguramiento mínimo a quienes no tienen ninguna jubilación y están en situación de pobreza y a personas con una discapacidad mayor del 40%, que tienen el carné del MSP y que están en hogares en situación de pobreza. En 2016 se entregó este bono a 433.313 personas, lo que significó un presupuesto de USD 249'138.720,15¹²⁹. El BDH también comprende un componente crediticio para fomentar emprendimientos, que consiste en la entrega del monto adelantado del bono, junto con asistencia técnica, para el inicio de un negocio. En diciembre de 2016, más de 120.000 familias habían accedido al Crédito de Desarrollo Humano (CDH).

Además, Ecuador cuenta con el Bono “Joaquín Gallegos Lara”, que consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a un familiar cuidador o a la persona responsable del cuidado de quien padece discapacidad física o intelectual severa. Este está condicionado a realizar el cuidado de manera exclusiva. Es importante mencionar que las mujeres están sobrerrepresentadas en el grupo de cuidadoras de estas personas, lo que profundiza la brecha, pues el cuidado exclusivo limita a estas personas en la búsqueda de otras oportunidades para su desarrollo, como pueden ser el estudio, la capacitación u otras fuentes de trabajo. El bono también puede ser entregado a personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, y a menores de 14 años portadores de VIH/SIDA. En 2016 se entregó un monto equivalente a USD 62'512.507,50, que benefició a 18.898 personas con discapacidad, 1.762 personas con enfermedades catastróficas y huérfanas y 322 menores de 14 años con VIH/SIDA¹³⁰.

El MIES también prevé la entrega de Bonos de Emergencia: dos transferencias de 45 dólares, para solventar gastos de una familia que ha atravesado situaciones catastróficas colectivas como inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, deslizamientos, entre otros.

La protección integral de los grupos de atención prioritaria presenta una serie de dificultades. En el caso de adultos mayores, se estima que el 57,4% (537.421 personas) se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Las principales situaciones que afectan la calidad de vida de este grupo incluyen la baja escolaridad, las enfermedades crónico-degenerativas, la discapacidad, condiciones de dependencia y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes¹³¹. De cada 10 adultos mayores, más de 3 reportan vivir en condiciones malas o de indigencia¹³².

¹²⁸

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰

¹³¹ MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 2014. *Ciudadanía activa y envejecimiento positivo*. (Quito: MIES).

¹³² INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2009. *Encuesta de salud, bienestar y envejecimiento*. (Quito: INEC), 48.

La cobertura de la pensión no contributiva a la población adulta mayor en pobreza ha constituido un aporte importante que, en ocasiones, representa el único ingreso de las mujeres adultas mayores de estos estratos. Sin embargo, el monto asignado dista de lo requerido para cubrir sus necesidades personales y el trabajo de cuidado que realizan para sus familias.

Muchos de estos mecanismos de protección social tienen como requisito la presentación de una cédula de identidad o sus bases de datos (como el Registro Social) se encuentran interconectadas con el Sistema del Registro Civil. Esto constituye una barrera de acceso para las personas en movilidad humana, específicamente para la población refugiada y solicitante de asilo que no dispone de ese documento.

La Experta Independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza formuló las siguientes recomendaciones al país en este ámbito¹³³:

- Aumentar progresivamente la cobertura, calidad, disponibilidad, pertinencia cultural y los mecanismos de participación en los programas sociales.
- Asegurar la sostenibilidad de la inversión social.
- Eliminar las barreras administrativas, económicas, culturales o de otra índole para el acceso a los programas de protección e inclusión social.
- Integrar y coordinar el BDH con una serie de políticas sociales, en especial aquellas que aseguren la prestación de servicios públicos de calidad, con pertinencia cultural y de género, en todo el país.

3.1.8. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación

El cumplimiento de la Agenda 2030 requiere una sociedad libre de todo tipo de violencia y discriminación. La Constitución incluye como parte del derecho a la integridad personal el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Señala que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual (art. 66).

El Plan Nacional de Desarrollo incluye entre sus políticas “1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones”¹³⁴.

3.1.8.1. Violencia basada en género

En Ecuador, el 60% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género, el 40% ha sufrido violencia sexual y el 53,9%, violencia psicológica¹³⁵. La pareja o expareja

¹³³ Consejo de Derechos Humanos. 2008. *Informe de la Experta Independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, Misión al Ecuador*. (Quito: Consejo de Derechos Humanos).

¹³⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 58.

¹³⁵ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2011.

es el perpetrador más común (76,3% en los casos de violencia psicológica; 87,3% en la física; 53,5% en la sexual y 61% en la patrimonial).

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus artículos 156, 157 y 158, tipifica tres tipos de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: violencia física, psicológica y sexual. El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) ha creado para conocer este tipo de casos los juzgados especializados en violencia contra la mujer y la familia. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, aprobada en 2018, amplía el ámbito de protección, al incluir otros tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica. Sin embargo, se establecen importantes retos, debido a las nuevas competencias desconcentradas y descentralizadas que se brinda a instancias locales al momento de establecer medidas administrativas de protección. Por su parte, la Ley Orgánica de Salud incluye avances en cuanto a la atención a las víctimas de violencia de género, a la salud materno-infantil, a la salud sexual y a la salud reproductiva.

En el país se registra una tasa de 2,05 homicidios por cada 100.000 mujeres. El COIP tipificó el femicidio como delito en el año 2014. En ese mismo año se juzgaron 27 femicidios; en 2015, 55; en 2016, 69 y en 2017, 108. Mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias viven una situación de violencia agravada, pues reportan una incidencia mayor que las mujeres mestizas. El 59,1% de estas últimas reporta haber sido víctima de algún tipo de violencia; la cifra aumenta entre las montubias al 62,9%; entre las afroecuatorianas, al 66,7% y entre las indígenas, al 67,8%¹³⁶.

Analizar otras variables permite evidenciar que la violencia de género varía según el nivel de instrucción. En todos los niveles sobrepasa el 50%; sin embargo, en el grupo de mujeres con menor nivel de instrucción llega al 70%, y en el de las mujeres con posgrado, al 52,8%. Si se analiza la violencia de género por quintiles de ingreso, se puede observar su incidencia generalizada en los cinco, con un promedio de 60,7%¹³⁷.

Una de cada 10 mujeres ha sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años. Al 13,8% le ocurrió a los 14 años. Únicamente el 35,1% de las mujeres abusadas comunicó el hecho; de estas, solo al 72% le creyeron. Apenas en el 55,6% de los casos se tomaron medidas para que no se repitiera el hecho. De los abusos sexuales, solo el 15% fue denunciado y el 35% llegó a ser sancionado¹³⁸.

La violencia contra las mujeres en el espacio público requiere especial atención. En la ciudad de Quito, por ejemplo, el 91% de las mujeres reporta haber experimentado

Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. (Quito: INEC/CDT).

¹³⁶ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2011. *Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres.* (Quito: INEC/CDT).

¹³⁷ *Ibidem.*

¹³⁸ *Ibidem.*

acoso sexual. El 77% de ellas evita esquinas y calles en las cuales se reúnen grupos de hombres; el 63% trata de terminar sus actividades diarias antes de las 6 de la tarde, por considerar insegura la ciudad para ellas. El 27% de adolescentes mujeres ha sido acosado por un grupo de hombres al salir del colegio. El 84% de las mujeres considera inseguro el transporte público; el 39% señala que le han tocado su cuerpo sin razón aparente y el 40%, que le han dicho frases o comentarios relativos a su imagen, su cuerpo o su aspecto físico. Frente a esa situación, las mujeres han desarrollado algunos mecanismos de protección: el 39% sale de la casa en compañía de su pareja; el 11%, en compañía de sus hijos y el 53% se organiza para tomar el transporte a la misma hora.

El Gobierno ecuatoriano entiende al género como una construcción social, distinta y no limitada a la categoría “sexo”, en relación con las condiciones biológicas¹³⁹. En ese contexto, los grupos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexuales y *queer* (LGBTTTIQ) también han sido sujetos de discriminación, exclusión y violencia estructural e histórica. Esas condiciones se mantienen, lo cual merma el ejercicio pleno de sus derechos, conforme será abordado en el tercer punto de esta sección (3.1.8.3).

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la tolerancia social a la violencia de género ha desembocado en una impasibilidad colectiva, que potencia su reproducción. La conducta violenta hacia las mujeres y su naturalización e impunidad se afianzan en el convencimiento de que mujeres y hombres no pueden vivir en igualdad de condiciones y derechos porque existen relaciones de poder que las subordinan a ellas. Con esa lógica, los roles y estereotipos de género asignados a hombres y mujeres se asumen como realidades inmutables, con consecuencias inaceptables para la vida de las mujeres¹⁴⁰. Esta, sumada a otras cuestiones estructurales como la inequidad y la asimétrica distribución del poder que persisten en la sociedad, constituyen las causas y el fundamento de la violencia de género contra las mujeres. También explican su reproducción y persistencia, a pesar de los marcos normativos y las políticas nacionales, lo que evidencia la necesidad de abordar los factores estructurales para su erradicación.

3.1.8.2. Violencia contra los niños, niñas y adolescentes¹⁴¹

La niñez y adolescencia tiene el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia, lo cual emana de una obligación jurídica constitucional e internacional del Estado ecuatoriano. Sin embargo, el contexto actual del país postula desafíos normativos, políticos, institucionales y presupuestarios importantes para asegurar la protección de NNA ante la violencia. Los principales retos son la ausencia de una rectoría en la coordinación de las políticas públicas para la protección de la niñez y adolescencia; la falta de especialización en la atención y respuesta del Sistema de Protección frente a las amenazas y vulneraciones de derechos y el no reconocimiento en la práctica, por la sociedad en general, de los NNA como sujetos de derechos.

¹³⁹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 51.

¹⁴⁰ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 69.

¹⁴¹ Sección tomada literalmente de la Nota Estratégica del Programa de País de UNICEF 2019-2022.

En este contexto, una gran parte de los 6 millones de NNA en el país vive cotidianamente una o varias situaciones de violencia en sus hogares, escuelas y comunidades. De acuerdo con la encuesta “Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad”, en 2016 casi el 40% de los NNA recibió un trato violento por parte de sus padres, porcentaje que ha disminuido 6 puntos en los últimos cinco años. El 26% recibió un trato violento por parte de sus profesores. En 2015, la incidencia de la violencia entre pares en el espacio educativo (por quimestre) en estudiantes adolescentes fue de 60%; la de acoso escolar, 23%. En los espacios públicos, 4 de cada 10 NNA afirman sentirse inseguros; 3 de cada 10, al caminar fuera de su barrio. En términos generales, la violencia en el hogar y la escuela afecta más a los niños y niñas entre 5 y 11 años, a los de origen afrodescendiente y a los que viven en las zonas rurales. La violencia contra la niñez y adolescencia afrodescendiente aumentó de 38% en 2010 a 47% en 2015. El problema pasa de una generación a otra: cerca del 40% de los niños ecuatorianos que fue golpeado por sus padres proviene de un hogar donde sus cuidadores también fueron agredidos en su niñez¹⁴².

En las zonas rurales, fronterizas, afectadas y vulnerables a riesgos naturales, la insuficiencia e ineffectividad de las intervenciones, políticas y mecanismos existentes para la protección ante la amenaza o vulneración de derechos de NNA se hace más evidente y notoria. Otras condiciones personales, sociales, familiares y económicas, como la edad, la situación migratoria/movilidad humana, el género, la etnia y las discapacidades las exacerban aún más.

El sistema de protección especializado de la niñez y la adolescencia en Ecuador, previsto en la Constitución de 2008, que por definición debería prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia, está fragmentado por los cambios normativos e institucionales que se dieron en los últimos años. Su debilitamiento se explica también, en gran medida, por el no reconocimiento *de facto* de los NNA como sujetos de derechos, en la sociedad y en la institucionalidad. Todo sistema de protección se asienta sobre el entendimiento de la niñez y adolescencia como sujeto del derecho a una atención especializada en caso de haber sufrido violencia¹⁴³. Establecer mecanismos idóneos para ejercer ese derecho, en oposición a considerarlos objetos de tutela o parte de la población general, es el cambio fundamental hacia el paradigma de la protección integral. En Ecuador, la incorporación del enfoque intergeneracional en la legislación y en la política pública ha afectado la consideración de las necesidades específicas de NNA. En la práctica, este enfoque ha puesto a los sujetos de derecho en competencia por su protección, sobre todo por las dificultades que tienen los niños para solicitarla y la necesidad de que alguien lo haga por ellos, pero también por las dificultades para establecer coordinaciones en el nivel local entre los distintos actores que deberían protegerlos.

En 2017, el Comité de Derechos del Niño manifestó su preocupación de que el nuevo enfoque intergeneracional aprobado por el Estado pudiera afectar la especificidad y la especialización de su marco institucional y normativo para aplicar lo establecido por la correspondiente Convención, y socavar la protección efectiva de los derechos

¹⁴² Velasco, Margarita, Gioconda Carrera, Jesús Tapia y Eduardo Encalada. 2016. *Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad. Ecuador 2016*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

¹⁴³ CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2013. *Sistemas nacionales de protección de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe*. (Santiago de Chile: CEPAL).

de niños y niñas, particularmente en el nivel local. El Comité recomendó al Estado asegurar la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros en todos los niveles. Además, que el mandato del Sistema siguiera siendo específico para los derechos del niño.

Sus preocupaciones fueron:

1. Que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia no está en funcionamiento;
2. Que las instituciones que solían ser las responsables de hacer efectivos los derechos del niño, como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, los consejos cantonales de la niñez y adolescencia y los consejos para la protección de los derechos se han transformado en consejos intergeneracionales y no mantienen su mandato específico y especial, en relación con la protección de los derechos del niño;
3. Las lagunas existentes en la cobertura y la falta de conocimientos especializados en la prestación de servicios especiales de protección en el nivel local;
4. La falta de servicios de especializados para niños;
5. La ausencia de un ente nacional responsable de coordinar y aplicar las políticas y los programas públicos relativos a la promoción y la protección de los derechos del niño en la primera infancia¹⁴⁴.

Otro aspecto a considerar en cuanto a la vulneración de derechos de NNA es el trabajo infantil y adolescente. Entre 2001 y 2013 se redujo sustancialmente en el país. Así, el trabajo de menores de 15 años disminuyó de 15,4% en 2001 a 2,6% en 2013; y el trabajo adolescente entre 15 y 17 años bajó de 40,5% en 2001 a 12,8% en 2013¹⁴⁵. Pese a ello, de los NNA de 5 a 17 años, el 8,56% realiza actividades de trabajo infantil. De ellos, el 62,8% son hombres y el 37,2%, mujeres. La agricultura y la ganadería son las actividades que más emplean mano de obra infantil y adolescente. Del total de NNA en el área rural, el 15,5% está en condición de trabajo infantil, mientras que en el área urbana es el 4,3%. Existe una prevalencia de trabajo infantil de NNA indígenas (29%) muy por encima de los mestizos (7,0%), afrodescendientes (6,9%) y blancos (6,2%). Entre NNA montubios también hay una incidencia importante: 9,2%¹⁴⁶.

El PND 2017-2021 señala que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de la pobreza y el estancamiento económico, debido a las secuelas físicas, emocionales y psicológicas que deja a las víctimas. La violencia trunca el potencial de la sociedad,

¹⁴⁴ CRC (Comité de los Derechos del Niño). 2017. *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador*. (S.l.: Comité de los Derechos del Niño).

¹⁴⁵ Vásconez Alison, Fabián Muñoz y Carlos Tomsich. 2015. *Trabajo infantil en Ecuador: hacia un entendimiento integral de la problemática*. (Quito: INEC/UNICEF).

¹⁴⁶ INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2012. *Encuesta del uso del tiempo 2012*. (Quito: INEC/CDT).

genera costos económicos y sociales a largo plazo y, por lo tanto, perjudica las posibilidades para un desarrollo sostenible¹⁴⁷.

3.1.8.3. Una vida sin discriminación

La Constitución señala que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (art. 11.2).

El COIP tipifica los delitos de odio por violencia física o psicológica contra una o más personas por razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH.

El PND 2017-2021 establece como política erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral, para construir una sociedad inclusiva. Asimismo, se guía por el imperativo de eliminar toda forma de violencia¹⁴⁸.

Un estudio oficial del INEC y la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres (CDT) muestra una prevalencia preocupante de discriminación, exclusión y violencia hacia los grupos LGTTTIQ, quienes describen que el mayor porcentaje de eventos de discriminación (55,8%) y violencia (65,6%) se ha suscitado en espacios públicos, mientras que la exclusión (71,4%) se da en mayor medida en espacios privados¹⁴⁹. El 83% de la población se muestra muy en desacuerdo o en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo¹⁵⁰.

El Comité de Derechos Humanos ha tomado nota de las acciones desplegadas por Ecuador para rescatar a muchas personas que habían sido sometidas a “tratamientos” para “curar” la identidad sexual o la identidad de género en centros de rehabilitación de adicciones y para clausurar algunos de esos centros. Sin embargo, persiste la preocupación, dado que continúan reportándose casos de ese tipo. El Comité ha llamado a redoblar los esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra

¹⁴⁷ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 54.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2013. *Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humano de la población LGBTI en el Ecuador*. (Quito: INEC/CDT).

¹⁵⁰

las personas LGBTTTIQ y prevenir actos de discriminación. Requiere que se investigue, procese y sancione con penas apropiadas a quienes sean responsables de la violencia y que se otorgue reparación integral a las víctimas¹⁵¹. En ello coinciden numerosas recomendaciones que recibió el país en el tercer ciclo del EPU, en el cual se subrayó la importancia de luchar contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, especialmente contra los NNA y sus padres¹⁵².

Asimismo, la Encuesta de Línea Media evidenció que el 40% de la población participante se ha sentido discriminada en Ecuador. De ese 40%, la gran mayoría (72%) refiere haber sufrido discriminación por su nacionalidad y un 14%, por su grupo étnico o color de piel. Las mujeres dicen sentir mayor discriminación: un 52%, en comparación con el 49% de los hombres. Por otro lado, cabe notar que los espacios públicos son el lugar donde han sentido mayor discriminación. En los espacios de trabajo, el 42% de las personas menciona haberse sentido discriminado por su condición de extranjero o refugiado. Los comentarios discriminatorios constituyen el principal tipo de discriminación en estos espacios (60,8%). Las mujeres destacan, además, haber recibido un pago menor que los hombres en un 22,4%¹⁵³.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial observó la persistencia y, en algunos casos, ampliación de las brechas socioeconómicas que históricamente han separado a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios de la población que se autodefine como blanca y mestiza. Pidió continuar implementando políticas de inclusión social y de desarrollo, con identidad, que reduzcan los niveles de desigualdad y pobreza. Asimismo, solicitó mantener los esfuerzos para eliminar los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, especialmente en las esferas de empleo, educación, vivienda y salud. Recomendó adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para estos grupos¹⁵⁴.

En el ámbito de la movilidad humana, el mismo Comité expresó preocupación por a) la discriminación, estigmatización, prejuicios y estereotipos que enfrentan los migrantes; b) las barreras administrativas que impiden el acceso de muchos migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, a la sanidad, a la educación, al empleo, al programa de acompañamiento familiar o al Bono de Desarrollo Humano; c) retrasos en el registro de refugiados y en la emisión de documentos de identidad que luego son requeridos para acceder a los servicios públicos y prestaciones sociales; d) discriminación y acoso escolar de niños y niñas en las escuelas, por motivo de su nacionalidad o su estatus de refugiados, lo cual en muchos casos provoca el abandono escolar; e) las condiciones laborales precarias y discriminatorias de muchas mujeres refugiadas; y f) la falta de desarrollo reglamentario de un procedimiento de determinación de la apatridia regulado en la Ley de Movilidad Humana (art. 2 y 5). El Comité apuntó a la falta de información

¹⁵¹ CCPR (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas). 2016. “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador. CCPR/C/ECU/CO/6”. (S.l.: CCPR).

¹⁵² Consejo de Derechos Humanos. 2017. *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Ecuador. A/HRC/36/4*. (S.l.: Consejo de Derechos Humanos).

¹⁵³ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de Línea Media”. Hoja Informativa.

¹⁵⁴ CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). 2017. “Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador. CERD/C/ECU/CO/23-24”. (S.l.: CERD).

del Estado ecuatoriano acerca de la discriminación y del racismo que suelen afrontar los migrantes¹⁵⁵.

El racismo y la discriminación son fenómenos complejos que se evidencian en toda la estructura social. Su diagnóstico implica una mirada global a las manifestaciones ideológicas, a los sentimientos y valores de prejuicio racial, a prácticas de dominación, poder, opresión, exclusión política y socioeconómica por parte de actores sociales. Estos se convierten en un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos por parte de sectores históricamente discriminados¹⁵⁶.

Tres de las metas del Plan Nacional de Desarrollo se orientan a erradicar la discriminación por género, etnia, situación de movilidad, orientación sexual e identidad de género. Su cumplimiento requerirá un abordaje de las causas estructurales que la perpetúan, así como la articulación de acciones en los ámbitos educativo, cultural y judicial, entre otros.

3.1.8.4. Igualdad de género y derechos de las mujeres

El ODS 5 plantea: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Además de ser un derecho, la igualdad de género es la base para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Ecuador es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Declaración y Plataforma de Beijing, entre otros instrumentos internacionales que promueven los derechos específicos de las mujeres y la igualdad de género.

El país cuenta con un marco jurídico que reconoce lo anterior. En la década de los 90 aprobó la ley de primera generación contra la violencia hacia las mujeres y la familia, la ley de maternidad gratuita y la ley de cuotas; creó las comisarías de la mujer y los comités de usuarias para el seguimiento a la ley de maternidad gratuita. Con la creación del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), que tenía la rectoría de las políticas por igualdad de género, se logró elevar a política de Estado el Plan de Igualdad de Oportunidades. Fue también de los primeros países de la región en recopilar información estratégica sobre brechas de género, mediante instrumentos como la Encuesta de Uso del Tiempo y la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género. Ecuador cuenta también con un catálogo y clasificador de gasto, que permite conocer el presupuesto asignado a la igualdad de género. A través de él se ha evidenciado, por ejemplo, que la erradicación de la violencia está en la agenda política, pero ello no se refleja en las asignaciones presupuestarias.

En esta materia persisten varios desafíos. En el ámbito institucional, se requiere un Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, con rectoría, competencia y

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ Antón, John, y Fernando García. 2010. *Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural 2009-2012*. (Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio/Unesco).

presupuesto. El Consejo Nacional por la Igualdad de Género carece de una ubicación en la estructura del Estado y de la competencia para hacerlo.

Las mujeres aún demandan cambios normativos porque ganan menos que los hombres, aunque hagan el mismo trabajo. Sus ingresos son menores porque están sobrerrepresentadas en el segmento del mercado laboral menos pagado, el de servicios, así como en el subempleo y la informalidad. Presentan, además, pobreza de tiempo: su carga global de trabajo es de 17 horas y 47 minutos a la semana más que los hombres, en la ciudad, y 23 horas y 2 minutos, en el campo. Tienen menos acceso a los medios de producción, al capital y a su propio tiempo y menor control sobre estos. Sin embargo, son las encargadas de garantizar el cuidado de la red de la vida. Por todo lo anterior, superar la desigualdad de género es esencial para el desarrollo y la garantía de derechos.

3.1.9. Preparación y respuesta a emergencias

La Constitución establece el manejo de desastres de origen natural o antrópico y la gestión de riesgos como elementos esenciales del Régimen del Buen Vivir (art. 389). Por tanto, los marcos normativos y la política pública requieren una mirada integral para reducir el riesgo de perder vidas humanas y aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por un desastre, de acuerdo con sus distintas necesidades y capacidades de resiliencia, considerando las brechas de género, etnia, edad, salud u otros. Tras el 16 de abril de 2016, el país ha mejorado su capacidad para enfrentar las emergencias de impacto leve y moderado.

3.1.9.1. Vulnerabilidad poblacional por amenazas naturales y antrópicas

Los desastres naturales se duplicaron en las dos últimas décadas. En el mundo, han sido más de 400 por año. La vulnerabilidad ante amenazas naturales ha aumentado en muchos países y Ecuador no es la excepción. El país se localiza en una zona de alta complejidad geológica; la diversidad de condiciones a las que está expuesto puede originar diversas situaciones de emergencia o desastre (inundaciones, sequías, erupciones volcánicas y sismos en el territorio). Los terremotos son el fenómeno natural que tiene una amenaza de mayor área de influencia, seguidos por las sequías, las granizadas y las amenazas localizadas por erupciones volcánicas. Estos fenómenos pueden causar las mayores pérdidas como consecuencia de eventos extremos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia¹⁵⁷. De igual forma, el cambio climático multiplica las amenazas a los ecosistemas y a los medios de vida de las personas.

La Constitución elevó la gestión de riesgos a política de Estado, sustentada en un sistema descentralizado y desconcentrado (art. 389 y 390). Determina una gestión corresponsable, lo cual implica que cada entidad pública o privada es responsable de manejar sus riesgos y no puede esperar a que estos sean gestionados por ninguna otra. De ese modo, deben desarrollar sus capacidades, prever los recursos y estar prestas a articular acciones con otros actores para disminuir el riesgo en sus territorios o ámbitos de competencia.

¹⁵⁷ BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2012. *Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos. Programa para América Latina y el Caribe: Ecuador*. (S.l.: BID).

El país ha incorporado paulatinamente un enfoque integral de gestión de riesgos, que trasciende la atención a la emergencia, al incluir la planificación, prevención, reducción del riesgo, recuperación y gestión del conocimiento. El PND 2017-2021 contempla una planificación a largo plazo, con una perspectiva territorial fundada en la sustentabilidad ambiental y la gestión de riesgos. Plantea ampliar el trabajo interinstitucional para identificar las zonas más propensas a eventos naturales adversos y, a partir de esto, elaborar estrategias que incluyan medidas de prevención, mitigación y reducción de riesgos. Esto facilita generar mapas de vulnerabilidad ambiental y concientizar a las comunidades sobre la necesidad de su participación y de asumir la corresponsabilidad de la gestión ambiental¹⁵⁸.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) es la entidad encargada de liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico. Le compete la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre, así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres¹⁵⁹.

El COOTAD establece que los GAD tienen competencia para gestionar la prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia de recursos para amenazas, en articulación con el Gobierno central. En 2015 se identificó que 101 municipios, de 221, contaban con planes de prevención de amenazas naturales.

Entre 2008 y 2015, el Gobierno asignó USD 289 millones al presupuesto de la SNGR, destinado a fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (44%), a construir obras de mitigación y recuperación de infraestructura afectada por fenómenos naturales (28%), a programas de prevención y mitigación para reducir riesgos por diferentes amenazas y a sistemas de alerta temprana (27%), y aspectos administrativos (1%). SENPLADES identificó que en el año 2012 se evitaron costos por 641 millones de dólares, mediante infraestructuras para prevenir inundaciones y desastres. El estudio concluye que por cada dólar invertido en mitigación de riesgos el país ahorró 9¹⁶⁰.

El índice de vulnerabilidad ante factores de origen natural y antrópico es elevado en el país. Entre 1900 y 2009, se registraron 65 desastres de gran magnitud¹⁶¹: el 60%, por fenómenos hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, deslizamientos húmedos) y el 40%, por sucesos geofísicos (sismos, erupciones volcánicas y deslizamientos secos). Las pérdidas económicas por sismos se elevaron a 1.500 millones de dólares durante el período¹⁶². Un peligro constante son los incendios forestales, que han afectado miles de hectáreas en todo el país, provocando daños significativos a los sembríos, la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante el año 2017, según cifras de la SNGR, alrededor de 4.300 personas fueron afectadas por eventos de origen natural o antrópico, de las cuales, 12 fallecieron. Un

¹⁵⁸ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES).

¹⁵⁹

¹⁶⁰

¹⁶¹

¹⁶²

total de 838 viviendas se vieron afectadas y 14 fueron destruidas¹⁶³. En 2018, desde el 1ero de febrero al 7 de marzo, se registraron 202 eventos de esta naturaleza. Han dejado 6 personas fallecidas, 11 heridas, 3790 afectadas y 246 que lo han perdido todo. Un total de 1,082 viviendas están afectadas y 53 totalmente destruidas; 7,246 metros de vías lineales de acceso han sido afectadas.

Ecuador se encuentra entre los países del mundo con mayor exposición económica frente al riesgo por amenazas naturales; el 72,2% del PIB está en áreas expuestas a este. Entre 1995 y 2015, más de 2 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales. Las pérdidas económicas se estiman en 1.500 millones de dólares¹⁶⁴.

Según el Índice de Gestión de Riesgos 2018¹⁶⁵ (INFORM, por sus siglas en inglés), Ecuador mantiene su clasificación de país con riesgo medio (4,2 en una escala de 10). Los principales indicadores a tener en cuenta son la exposición a terremotos y tsunamis, desde la perspectiva de las amenazas, y la accesibilidad y gobernanza del riesgo, desde la perspectiva de la capacidad nacional para responder a las crisis.

El crecimiento de la población en zonas altamente expuestas e inseguras (áreas inundables, costeras y montañosas), junto con el deterioro ambiental del territorio y la falta de planificación urbana, constituyen factores determinantes en el aumento del riesgo en muchas localidades, donde cada vez existe más población y bienes expuestos a eventos adversos¹⁶⁶. La vulnerabilidad de la población asentada en la franja costera es mayor: el 60% está asentado en zonas de amenaza. La erosión del perfil costero representa un riesgo debido a la construcción e instalación de infraestructura de mitigación, de comercio informal, portuarias, hoteles, viviendas construidas en bermas, dunas y acantilados. Las amenazas volcánicas son mayores en las islas habitadas de Galápagos, donde pueden ocurrir por movimientos en masa, tsunamis e inundaciones¹⁶⁷.

En una situación de riesgo, la vulnerabilidad de los actores crece según el área geográfica o los grupos poblacionales, sobre todo en los casos del área rural, la Amazonía, los pueblos y nacionalidades, los hogares con menores de 15 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad¹⁶⁸.

3.1.9.2. Asistencia Humanitaria a poblaciones afectadas

El evento más reciente que afrontó el país en términos de desastres fue el terremoto que se produjo el 16 de abril de 2016 en las poblaciones costeras, de con una magnitud de 7.8 grados. Como consecuencia, 671 personas fallecieron y más de

¹⁶³ SNGR (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos). 2017. “Matriz consolidada de eventos adversos”. Hoja Informativa.

¹⁶⁴ BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Documento de enfoque Ecuador 2012-2017. Evaluación del programa país*. (Washington: BID).

¹⁶⁵ UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2018. “Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe INFORM-LAC”. Hoja Informativa.

¹⁶⁶

¹⁶⁷ SETEMAR (Secretaría Técnica del Mar). 2014. *Políticas públicas costeras y oceánicas: diagnóstico y propuesta de implementación*. Guayaquil: Editorial El Telégrafo.

¹⁶⁸ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES).

385.000 se vieron afectadas directamente ¹⁶⁹. Ecuador llevó a cabo labores de respuesta en 14 ciudades del país, un proceso de recuperación y reconstrucción estimado en 3.344 millones de dólares, que continúa hasta la actualidad. El Equipo Humanitario de País se activó para apoyar al Gobierno con la identificación de necesidades y acciones de respuesta.

El sismo interrumpió las dinámicas sociales y productivas en las provincias afectadas, fragmentó el tejido social y generó impactos directos en los medios de vida de las poblaciones afectadas. Además de la pérdida de vidas, hubo 35.000 viviendas afectadas y 21.000 puestos de trabajo perdidos¹⁷⁰. Las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más posibilidades de morir durante una emergencia o desastre que los hombres. Los daños y pérdidas en las edificaciones públicas y privadas fueron cuantiosos, lo cual evidenció el alto nivel de vulnerabilidad físico-estructural de las construcciones.

Según el informe a seis meses de respuesta al terremoto de la ONU, un total de 291.780¹⁷¹ personas afectadas recibió kits de alimentos y/o bonos de alimentación; 33.500 NNA recibieron kits escolares; 42.000 personas obtuvieron kits de salud sexual y reproductiva; 100.000 personas recibieron artículos de higiene; 3.559 carpas fueron reforzadas en este proceso; 200.000 personas tuvieron acceso a agua segura; 4.669 fueron beneficiarias del programa efectivo por trabajo; 151.699 personas recibieron artículos no alimentarios; 276.800 recibieron suplementos con micronutrientes y 102.300 personas recibieron atención psicosocial individual o colectiva¹⁷².

Si bien se lograron resultados importantes, la reflexión posterior evidenció que durante la respuesta hubo una débil coordinación entre el Gobierno nacional, los GAD y otras entidades nacionales e internacionales, poca disponibilidad de datos sobre las zonas rurales más aisladas y falta de datos desagregados. Se observó una limitada participación en involucramiento de las comunidades y actores locales.

Además de los desastres provocados por la naturaleza, se han reportado desplazamientos forzados en la zona de frontera norte debido a enfrentamientos armados entre grupos irregulares colombianos y a situaciones de violencia y actividades ilícitas. Ecuador es el país que alberga el mayor número de refugiados en América Latina y el Caribe (a 60.516 personas se les ha reconocido esta condición). En 2017, un promedio mensual de 570 personas cruzó la frontera en busca de protección internacional.

¹⁶⁹ Alcarraz, Ignacio Cristóbal, y OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). 2017. "Lecciones aprendidas. Terremoto del 16 de abril 2016. Equipo Humanitario de País. Ecuador. Informe de lecciones aprendidas del terremoto de abril de 2016".

¹⁷⁰ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2016. *Evaluación de los Costos de Reconstrucción Sismo en Ecuador, abril 2016*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).

¹⁷¹ Personas directamente atendidas, que no representan el total de la población afectada.

¹⁷² Alcarraz, Ignacio Cristóbal, y OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). 2017. "Lecciones aprendidas. Terremoto del 16 de abril 2016. Equipo Humanitario de País. Ecuador. Informe de lecciones aprendidas del terremoto de abril de 2016".

Los problemas identificados en esta sección muestran que el imperativo de “no dejar a nadie atrás”, contemplado en la Agenda 2030 y sustentado en la Constitución y en el PND 2017-2021, sigue vigente. Este requiere adoptar normas, políticas y jurisprudencia encaminadas a superar las causas más profundas de las problemáticas. Así, resulta trascendental trabajar en la eliminación de las barreras de acceso a los servicios sociales, tomando en cuenta las particularidades económicas, culturales, geográficas, étnicas, de género, de discapacidad y de movilidad que existen en la sociedad ecuatoriana. Además, es fundamental avanzar en la inversión social más eficiente y sostenible, al igual que en la disminución de vulnerabilidades resultantes de factores antropogénicos y exposiciones al riesgo.

3.2 Planeta

El cuidado del planeta es un eje central de la Agenda 2030, que considera que hay soluciones alcanzables y viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Siete de los 17 ODS tiene relación directa con esta temática: disponibilidad y gestión del agua (ODS 6); acceso a energías limpias (ODS 7); promoción de ciudades y comunidades más resilientes (ODS 11); modalidades de producción y consumo sostenibles (ODS 12); adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático (ODS 13); conservación de océanos, mares y recursos marinos (ODS 14) y promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres (ODS 15).

Un modelo de desarrollo sostenible reconoce la importancia de los recursos naturales y promueve su uso y manejo de una manera adecuada, haciendo énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar de la sociedad. En Ecuador, el gran desafío para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible se mantiene vigente, a pesar de los importantes avances registrados, sobre todo en el ámbito normativo y de política pública.

El Plan Nacional de Desarrollo destaca “la persistencia en el modelo tradicional, basado en la falsa concepción de la existencia de recursos infinitos, con patrones de consumo y producción no sostenibles –respecto a la deforestación y cambio de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, reducción y contaminación de fuentes de agua, y a la erosión y desertificación de los suelos– agudizará inevitablemente los efectos negativos del cambio climático en la sociedad, con especial perjuicio a las mujeres, la economía y biodiversidad”¹⁷³. Ante esto, se propone una reestructuración de la economía disminuyendo la dependencia de actividades extractivistas y transformándola en una economía que maneje eficientemente los recursos naturales, basada en el bioconocimiento y la bioeconomía, que posicione a la biodiversidad y a los recursos biológicos renovables como fuentes de saber, alimentos, energía y bienes industriales, provenientes de transformaciones de material orgánico¹⁷⁴.

¹⁷³ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), 64.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

La Constitución garantiza los derechos de la naturaleza, lo cual implica un cambio importante en la visión antropocéntrica respecto a la relación entre esta y el ser humano. Reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad e integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

La Carta Magna reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener la propiedad de sus tierras comunitarias, territorios ancestrales, participar del uso y la gestión de los recursos naturales renovables. Igualmente, tienen derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los recursos no renovables que se encuentran en sus tierras (art. 57). La garantía de esos derechos todavía representa un reto para el país; su limitada aplicación ha generado una importante conflictividad socioambiental. “El Estado tiene el deber indudable de consultar con los pueblos indígenas afectados antes de iniciar proyectos de inversión en el país. De ahí que las consultas deben realizarse en las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de acuerdo a los estándares internacionales pertinentes”¹⁷⁵.

Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente (COA) consolida la normativa nacional sobre protección del patrimonio forestal, patrimonio natural, recursos genéticos, cambio climático, calidad ambiental, entre otros. El COA asigna también un rol a la educación para la protección y conservación del ambiente y al desarrollo sostenible.

En esta sección se abordarán algunos desafíos del país en materia ambiental: cuidado y conservación de la biósfera, cambio climático, producción y consumo responsable y sostenible y eficiencia energética y productividad.

3.2.1. Cuidado y conservación de la biósfera

La biodiversidad es fundamental para el desarrollo sustentable de un país, su bienestar y su seguridad alimentaria. Ecuador forma parte de los 17 países más megadiversos del planeta¹⁷⁶, en virtud de albergar el mayor índice de especies vegetales y animales de la Tierra (en conjunto, tiene el 70% de la biodiversidad en el 10% de la superficie del planeta). El país posee también seis reservas de biósfera nominadas por la UNESCO: Galápagos, Yasuní, Podocarpus, El Cónдор, Sumaco, Macizo del Cajas y Bosque Seco.

¹⁷⁵ Misión a Ecuador (septiembre 2010). Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya.

¹⁷⁶ Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del PNUMA.

3.2.1.1. Biodiversidad terrestre

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador abarca 50 sitios. En el año 2015 se contabilizaron 8'260.534,65 hectáreas (el 33,26% del territorio nacional) bajo algún esquema de conservación o manejo ambiental¹⁷⁷.

El país ha llevado a cabo importantes esfuerzos de conservación de áreas frágiles y de importancia biológica; así como de generación e implementación de políticas públicas, normativas, programas e iniciativas nacionales y locales. Sin embargo, aún existen desafíos para la protección de los recursos naturales. La persistencia de un importante número de especies amenazadas y en peligro de extinción es síntoma de una situación estructural que responde a una gestión de recursos naturales que aún requiere más y mejores capacidades.

La mayoría de especies de plantas endémicas enfrenta algún grado de amenaza (3.504 especies, cerca del 78%). Un total de 353 especies (8%) se encuentra en peligro crítico de extinción, 1.071 (24%) están en peligro y 2.080 (46%) se consideran vulnerables¹⁷⁸. La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030 señala que “a nivel de plantas solo se conoce la situación de conservación de una quinta parte, las cuales corresponden con las especies endémicas del país, mientras que en el caso de la fauna solo se cuenta con información de los grupos de animales más grandes”¹⁷⁹.

Situación similar enfrenta la fauna silvestre: al menos 530 especies (sin incluir a los peces) se encuentran bajo alguna categoría de amenaza: 156 especies de anfibios están amenazadas de extinción (46 en peligro crítico, 68 en peligro y 42 vulnerables); 108 especies de reptiles están amenazadas (9 en peligro crítico, 42 en peligro y 57 vulnerables) y 161 especies de aves están amenazadas (16 en peligro crítico, 47 en peligro y 98 vulnerables). En cuanto a los mamíferos, 105 taxones se encuentran amenazados. Esto incluye 101 especies: de ellas, 20 se encuentran en peligro crítico, 28 en peligro y 57 vulnerables. Una de cada cuatro especies de mamíferos del país está amenazada¹⁸⁰.

A ello se suma el comercio ilegal, el contrabando, la cacería furtiva y la extracción de especies o sus derivados. En el año 2013, las provincias que reportaron tráfico de vida silvestre fueron: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua. El total de vertebrados decomisados fue de 634, entre mamíferos (200), aves (161), reptiles (148) y peces (125). Napo y Orellana tuvieron las cifras más altas¹⁸¹.

¹⁷⁷ MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2017. *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. (Quito: MAE), 37.

¹⁷⁸ MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2016. *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030*. (Quito: MAE), 136.

¹⁷⁹ *Ibidem*, 177.

¹⁸⁰ *Ibidem*, 140.

¹⁸¹ IGM (Instituto Geográfico Militar del Ecuador). 2017. *Atlas rural del Ecuador. Primera edición*. (Quito: IGM), 34.

El Mapa Histórico de Deforestación del Ecuador Continental reporta que en 2008 el país tenía una superficie de bosque nativo de 13'038.367 hectáreas: 80% en la Región Amazónica, 13% en la Costa y 7% en la Sierra. En 2014, la superficie boscosa se redujo a 12'753.387 hectáreas. Durante este período, la tasa de cambio de la cobertura boscosa fue de -0,37%, que se traduce en una deforestación neta promedio de 47.497 ha/año¹⁸², una de las más altas de América Latina. Las principales causas de deforestación incluyen el cambio de uso de suelo hacia la agricultura (con preponderancia de monocultivos), la construcción de carreteras e infraestructura y la tala ilegal de bosques.

La Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra en Ecuador reporta que más de un tercio de los sistemas de uso de tierra naturales tienen un grado leve de degradación. Están distribuidos principalmente en la zona central de la Amazonía ecuatoriana y en las vertientes orientales de la cordillera de los Andes¹⁸³. Las causas incluyen la acción antrópica, ya sea por el manejo de sistemas agro-productivos o por los servicios antrópicos que prestan.

La disponibilidad hídrica del Ecuador es de 20.700 m³ por habitante/año, cifra superior a la media mundial de 1.700 m³ por habitante. Esta disponibilidad proviene de la vertiente hidrográfica del Pacífico (5.200 m³/hab./año) y de la amazónica (82.900 m³/hab./año). La mayor demanda proviene de la vertiente del Pacífico (88%) y la diferencia, de la vertiente amazónica (12%)¹⁸⁴. La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) tiene la responsabilidad de garantizar el acceso justo y equitativo al agua, en calidad y cantidad, a través de políticas, estrategias y planes que permitan una gestión integral e integrada de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas.

En el caso de las Islas Galápagos, el diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de escenarios de desarrollo afirmó que “las condiciones actuales del modelo de desarrollo en el Archipiélago son insostenibles en el mediano y largo plazo. Este escenario representa un riesgo humano, en tanto amenaza la estabilidad de las actividades socioeconómicas de la población; un riesgo ecológico, pues amenaza su ecosistema único”¹⁸⁵.

3.2.1.2. Biodiversidad marino-costera

El territorio marino-costero continental bajo conservación o manejo ambiental alcanzó las 630.672,41 hectáreas en 2015, lo que supone un incremento de 51,23%

¹⁸² MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2017. *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. (Quito: MAE).

¹⁸³ FAO (Food and Agriculture Organization) y MAE (Ministerio del Ambiente). 2017. “Proyecto apoyo a la toma de decisiones para la integración y ampliación del manejo sostenible de la tierra DS-SLM: evaluación nacional de degradación de la tierra mediante la metodología Lada-Wocat”. Hoja de trabajo.

¹⁸⁴ MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2017. *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. (Quito: MAE), 36.

¹⁸⁵ Medina, Federico, Juan Pablo Bermeo, Jesús Ramos-Martin, Bernardo Bustamante, Juan Cadillo Benalcázar, Jaime Cevallos, Belén Liger, Freddy Llive, Rony Parra, Hernán Villarraga y María Eugenia. 2014. *Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de escenarios de desarrollo en el archipiélago de Galápagos*. (Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales/Centro de Prospectiva Estratégica).

desde el año 2010¹⁸⁶. En 2016, el incremento fue del 78% en comparación con 2012, sin embargo, persisten problemas en el manejo del manglar¹⁸⁷. Según datos del antiguo Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), entre 1969 y 2006 se perdieron 53,970 hectáreas de manglar en la costa ecuatoriana, lo que redujo la reproducción de moluscos y crustáceos. La principal causa está asociada con la presencia de camaroneras.

3.2.2. Cambio climático

La Constitución prioriza la lucha contra el cambio climático. Existen varias políticas y programas que tratan la problemática: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Socio Bosque, el Plan de Inversión Forestal, el Plan de Acción REDD+, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, el Primer Reporte Bienal de Actualización, entre otros. Las acciones de adaptación al cambio climático se implementan en el nivel local y comunitario. Están enfocadas a fortalecer la resiliencia de las poblaciones y los ecosistemas a los efectos adversos del cambio climático.

En su objetivo 3, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 plantea como meta la reducción de categoría, de alta a media, en el índice de vulnerabilidad frente al cambio climático, de la población, medios de vida y ecosistemas¹⁸⁸. Ecuador se encuentra en la fase de inicio de su Plan Nacional de Adaptación. En cuanto a mitigación, si bien el país hace un aporte mínimo a las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), está realizando esfuerzos importantes en varios sectores priorizados.

Las emisiones totales de dióxido de carbono (CO₂) para el año 2012 fueron de 80.672,16 Gg: sector energía, 46,63%; sector uso de suelo, cambio en el uso de suelo y silvicultura, 25,35% y sector agricultura, 18,17%. El aumento de la temperatura media anual hacia la mitad del siglo sería de 0,9°C a 1,7°C, y los mayores cambios se darían en la Amazonía (1,3°C - 2,1°C) y Galápagos (1,2°C - 2,5°C). Se reportan también cambios en los patrones de precipitación. Junto con el aumento de la temperatura, estos representan retos importantes para el país, en cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático¹⁸⁹.

La degradación de la tierra y el medio ambiente amenazan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. El cambio climático intensifica el fenómeno de oscilación austral de la presión atmosférica vinculado con la corriente de El Niño, lo cual repercute negativamente en la agricultura, la pesca, la producción de alimentos y la

¹⁸⁶ MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2016. *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030*. (Quito: MAE), 36-37.

¹⁸⁷ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2017. *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. (Quito: MAE).

biodiversidad. A su vez, ello genera presión sobre el alza de los precios de los productos alimenticios que consume la población¹⁹⁰.

La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático no es igual para todas las personas, depende de sus capacidades para adaptarse y de su situación económica, social y cultural. Por ejemplo, la construcción social de los roles de género deja en manos de las mujeres la responsabilidad de la subsistencia práctica de las familias (alimentación, limpieza e higiene de ropa y espacios, cuidado de niñas, niños y personas adultas y/o enfermas). Para esto, las mujeres requieren recursos; por ejemplo, agua, energía, alimentos y espacio. En el área urbana, la obtención de estos recursos será proporcional a los ingresos y a la oferta social. En el área rural, dependerá directamente de los recursos del entorno: a mayor riqueza del suelo y cantidad de agua limpia, mayor y mejor manejo de bosques y semillas, mayores posibilidades de subsistencia de las familias en condiciones dignas y disminución de la carga excesiva de trabajo de las mujeres.

Cabe mencionar que la persistencia de problemáticas asociadas con el cambio climático obedece, entre otras razones, a la insuficiente coordinación interinstitucional y local entre los sectores ambiente y desarrollo. El enfoque de sostenibilidad ambiental aún no es plenamente incorporado en las políticas y programas de desarrollo.

Otro de los retos está asociado con la participación de los pueblos indígenas, comunidades y nacionalidades, así como otros grupos excluidos, en la gestión sostenible de recursos naturales. Es necesaria también una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones para enfrentar los efectos del cambio climático. En ambos casos, la humanidad pierde oportunidades relacionadas con la experiencia y los conocimientos para la gestión y conservación de los recursos y del entorno. Se pierde también la posibilidad de transformar los roles sociales femeninos en roles humanos para la subsistencia de la red de la vida, que posibilita la existencia humana, y eliminar así las brechas de desigualdad entre los géneros.

3.2.3. Producción y consumo responsable y sostenible

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible solo se conseguirán con la reducción de la huella ecológica. El ODS 12 plantea “garantizar modalidades de producción y consumo responsables” a través del uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales¹⁹¹.

La Constitución establece como uno de los objetivos de la política económica impulsar el consumo social y ambientalmente responsable, así como generar incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la

¹⁹⁰ PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. *Plan estratégico para el Ecuador (2017-2021)*. (Roma: PMA).

¹⁹¹ ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2015. *70/1. Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. (Nueva York: ONU).

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables (art. 319).

La producción rural en el país es mayoritariamente estacionaria, con temporadas de sobreproducción y de escasez. Por ende, quienes habitan estas zonas, especialmente las mujeres, se ven afectados al recibir menores precios, que en ocasiones no les permiten ni siquiera cubrir los costos de producción. Los productos que contienen tecnología (alta, media o baja), basados en recursos naturales, tuvieron una participación promedio del 35,7% del total de exportaciones no petroleras, lo cual ratifica la esencia de producción de bienes primarios en el país¹⁹². En este tipo de producción están subrepresentadas las mujeres, quienes se ubican especialmente en la producción familiar de sustento y de transición.

En relación con el consumo responsable, una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo se pierden o desperdician¹⁹³. América Latina genera hasta 127 millones de toneladas de alimentos por año, lo cual significa que se pierden grandes cantidades de calorías y nutrientes necesarios para alimentar a la población. Ecuador no cuenta con datos sobre las pérdidas y desperdicios de los alimentos; sin embargo, se estima que existe un suministro disponible de alimentos suficiente para satisfacer la demanda de sus habitantes.

En cuanto a la producción agrícola, la productividad aún es baja tanto en productos básicos como en los que tienen potencial de exportación. Por tanto, se requiere el impulso de programas de asistencia técnica, capacitación e innovación, abriendo mercados en condiciones favorables, incorporando políticas de compras públicas que favorezcan a la producción nacional y mejorando el acceso a financiamiento productivo, a través del sistema financiero público, privado y de la economía popular y solidaria¹⁹⁴.

La participación en el PIB entre el año 2007 y 2016 del sector industrial, por su parte, muestra una reducción del 13,7% al 12,5%. Esto ocurre a pesar de los esfuerzos para cambiar la matriz productiva, de una producción primaria hacia una producción de mayor valor agregado, con innovación e incorporación de nuevas tecnologías, que promueva la eficiencia energética¹⁹⁵.

El país enfrenta una problemática en el tratamiento y disposición de los desechos. El 80% de la basura generada se vierte en botaderos a cielo abierto, donde las condiciones para el reciclaje son difíciles de manejar. En el caso de los desechos domésticos, el 60% de toda la basura llega a un botadero; el 17%, a rellenos controlados; el 20%, a rellenos sanitarios y el 3% restante, a otros destinos de

¹⁹² SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES).

¹⁹³

¹⁹⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES).

¹⁹⁵ *Ibidem*, 72.

eliminación de desechos sólidos¹⁹⁶. La competencia de manejo de desechos sólidos corresponde a los GAD municipales, según la Constitución (art. 264). Para abordar la complejidad del desafío, el Ministerio del Ambiente (MAE) estableció el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos.

El 44% de residuos sólidos de Ecuador proviene de las dos ciudades con mayor población: Guayaquil y Quito¹⁹⁷. La última recolecta un aproximado de 2.100 toneladas de residuos sólidos por día, que son acopiados en dos estaciones de transferencia y dispuestos en el relleno sanitario El Inga. Las fundas plásticas son otro factor de contaminación; su excesivo consumo e inadecuada disposición final generan efectos en el ambiente. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Ambiente), en cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un aproximado de 46.000 fundas plásticas.

Finalmente, en asuntos relativos a la calidad ambiental, Ecuador y el resto de los países latinoamericanos presentan un panorama preocupante para la salud y el ambiente, debido a la acumulación de sustancias químicas como los Componentes Orgánicos Persistentes (COP) y los plaguicidas obsoletos. En el territorio nacional se han identificado alrededor de 120 toneladas de sustancias tóxicas, sobre todo plaguicidas obsoletos¹⁹⁸, los cuales comprometen el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria de las poblaciones y sus medios de vida.

3.2.4. Eficiencia energética y productividad

Acceder a la energía resulta fundamental para la industria, el trabajo, la seguridad, el cambio climático, la producción y el aumento de ingresos. El ODS 7 se plantea garantizar el acceso de todas las personas a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. La eficiencia energética juega un papel importante en la competitividad y los aspectos sociales, pues es una de las maneras más efectivas de enfrentar el cambio climático y garantizar la seguridad del abastecimiento energético¹⁹⁹.

La Constitución establece, en su artículo 413, que “el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas, de bajo impacto, que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua”. El objetivo 5 del PND 2017-2021 incluye impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible. Tiene entre sus metas incrementar el ahorro de combustible para optimizar la generación eléctrica y la eficiencia energética en el sector de hidrocarburos.

¹⁹⁶ IGM (Instituto Geográfico Militar del Ecuador). 2017. *Atlas rural del Ecuador. Primera edición*. (Quito: IGM), 43.

¹⁹⁷ BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Documento de enfoque Ecuador 2012-2017. Evaluación del programa país*. (Washington: BID).

¹⁹⁸

¹⁹⁹ MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Eficiencia Energética - PLANEE 2016-2035*. (Quito: MEER).

La Agenda Nacional de Energía 2016-2040 previó que en 2017 la matriz energética ecuatoriana estaría compuesta por un 90% de energía hidroeléctrica, un 8% de energía térmica y un 2% de energía de otras fuentes renovables. En 2015, estaba compuesta por un 58% de energía hidroeléctrica, un 40% de energía térmica y un 2% de energía renovable²⁰⁰.

En los últimos años, el país ejecutó importantes inversiones con el fin de reducir la dependencia de la energía proveniente de combustibles fósiles y generar mayor seguridad energética, a partir de fuentes renovables. Inició la construcción de ocho proyectos hidroeléctricos. Se ha logrado una capacidad de generación eléctrica instalada de 7146 megavatios (MW) –casi el doble de lo que se requiere actualmente– y reducir la importación de energía, del 11% en 2006 al 0,5% en 2016²⁰¹.

El cambio de la matriz energética, además de aumentar la seguridad energética del sistema eléctrico, aportará a la mitigación de las emisiones de CO₂ en aproximadamente 6,3 MM de toneladas²⁰².

El Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 (PLANEE) tiene como objetivo incrementar el uso eficiente de los recursos energéticos, a fin de reducir la importación de derivados del petróleo, contribuir a la mitigación del cambio climático y crear una cultura de eficiencia energética. Se espera que en 2035 el umbral mínimo de energía evitada sea de alrededor de 543 Mbep. Esto representará aproximadamente 84.131 millones de dólares, con una reducción estimada de emisiones de GEI de 65 MtCO₂e. Los principales sectores de consumo energético nacional identificados en el PLANEE son: transporte (42%), industrial (18%), residencial (12%), comercial (5,68%), agropesca y minería (0,94%), construcción y otros (16,47%). El autoconsumo representó un 5%²⁰³.

Ecuador ha adoptado importantes medidas, que incluyen limitar la comercialización de equipamiento ineficiente; planes de recambio de equipamiento en el ámbito residencial; medidas arancelarias y tributarias para promover la eficiencia energética; tarifas preferenciales para promover el uso eficiente de la energía; reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio y el uso del distintivo de máxima eficiencia energética para electrodomésticos²⁰⁴.

Adicionalmente, las sinergias creadas entre el sector público, el privado y la academia, para mejorar la eficiencia energética y la productividad, han llevado a la

²⁰⁰ MICSE (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos). 2016. *Agenda Nacional de Energía 2016-2040*. (Quito: MICSE).

²⁰¹ MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Eficiencia Energética - PLANEE 2016-2035*. (Quito: MEER), 30.

²⁰² MICSE (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos). 2016. *Agenda Nacional de Energía 2016-2040*. (Quito: MICSE).

²⁰³ MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Eficiencia Energética - PLANEE 2016-2035*. (Quito: MEER).

²⁰⁴ *Ibidem*.

generación de políticas e instrumentos para el uso eficiente de la energía y los recursos para una producción más limpia. Existe apertura e iniciativas por parte de la empresa privada para adoptar estas prácticas, que no solo incrementan sus ingresos, sino que contribuyen a la protección del planeta. Ejemplo de ello es la creación del Centro Ecuatoriano de Uso Eficiente de Recursos y la generación del Acuerdo Sectorial de Producción más Limpia y Uso Eficiente de Recursos, con el sector de Alimentos y Bebidas. También se destaca la emisión del acuerdo ministerial que aprueba el distintivo de máxima eficiencia energética para electrodomésticos y la modernización de la industria nacional de refrigeradoras y electrodomésticos (INDUGLOB y ECASA) para producir artefactos de última generación y tecnología avanzada, más eficientes energéticamente y libres de gases refrigerantes, que afectan la capa de ozono.

El país aún enfrenta barreras que no le permiten aprovechar todo el potencial existente en las fuentes de energía renovable. Entre ellas, los altos costos de las inversiones iniciales de proyectos energéticos, el bajo involucramiento de actores clave, la falta de información, el acceso limitado a tecnologías eficientes y la dificultad de cuantificar y medir los beneficios de la eficiencia energética²⁰⁵.

Si bien Ecuador ha tenido importantes avances en el camino hacia un modelo de desarrollo sostenible, los patrones de consumo y producción no sostenibles han generado deforestación y cambio de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, reducción y contaminación de fuentes de agua, erosión y desertificación de los suelos; amenazas que profundizan el deterioro del planeta. Es necesario reestructurar la economía ecuatoriana, reducir su dependencia de actividades extractivas y transitar hacia una economía basada en el bioconocimiento y en el respeto a los derechos de la naturaleza.

3.3. Prosperidad

La noción de prosperidad en la Agenda 2030 se refiere a la necesidad de un crecimiento económico inclusivo, sostenible y orientado a la reducir la desigualdad y la pobreza. En este eje, los ODS 5, 8, 9, 10 y 11 abarcan el trabajo decente, estable justo y digno, sin discriminación, el acceso de las mujeres a recursos productivos, el desarrollo industrial innovador, la reducción de las desigualdades y las comunidades sostenibles.

El PND 2017-2021 incluye entre sus objetivos la consolidación del cambio hacia una estructura productiva más sofisticada y diversa, con actividades de mayor valor agregado e intensidad tecnológica.

Esta sección aborda: la situación del empleo y las condiciones de trabajo, la desigualdad económica frente a las tendencias del crecimiento, la situación de la

²⁰⁵ *Ibidem*.

estructura productiva y los recursos para la producción y la situación y efectos del proceso de urbanización en los circuitos económicos y productivos.

3.3.1. Trabajo estable, justo y digno

La Agenda 2030 promueve el crecimiento con empleo pleno, decente, estable y productivo, con remuneraciones dignas y justas. El ODS 8 apunta a un desarrollo económico sostenible, que garantice las condiciones necesarias para que las personas en edad de trabajar accedan al trabajo decente, a empleos de calidad y oportunidades laborales. Uno de los retos más grandes a los que se enfrenta este objetivo es lograr mayor y mejor inclusión de las personas en el mercado laboral, con énfasis en aquellas en situación de vulnerabilidad, lo cual requiere acceso a sistemas de protección social.

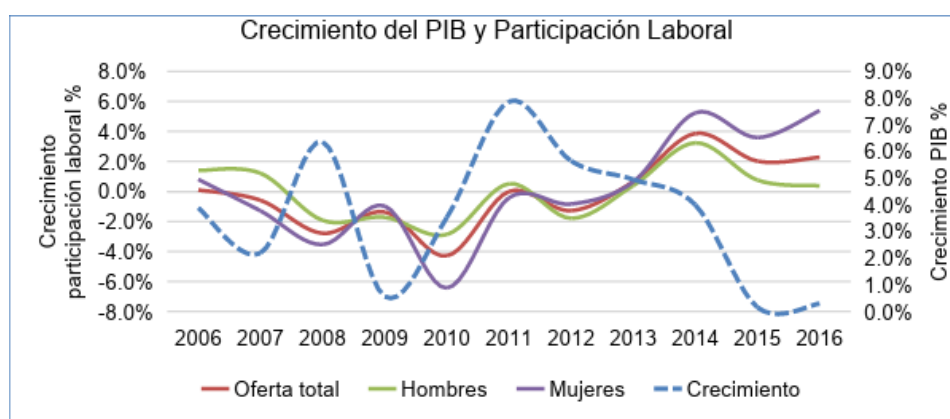
La Constitución garantiza el trabajo y empleo dignos y reconoce el trabajo como un derecho y deber social protegido por el Estado (art. 33). El primer eje del PND 2017-2021 promueve un desarrollo inclusivo, el derecho humano al trabajo en todas sus formas y a la seguridad social, con énfasis en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y el trabajo de personas en movilidad humana, al igual que de la comunidad ecuatoriana migrante retornada. Para lograrlo, se apunta a alianzas entre los sectores público y privado.

El segundo eje del PND 2017-2021 plantea una economía al servicio de la sociedad. El objetivo 4 se enfoca a consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario. El objetivo 5 plantea impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria. El objetivo 6 contempla desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

Las brechas de género se mantienen. Están expresadas en indicadores relacionados con el índice de desempleo de las mujeres, 1,5 veces mayor que el de los hombres, y en la participación laboral de estos últimos, 30 puntos mayor. Esto se debe en gran medida a las tareas de cuidado no remuneradas en el hogar, aunque la participación femenina ha crecido más rápido en los últimos años. Tanto para hombres como para mujeres, en la última década la participación laboral ha seguido la tendencia del crecimiento o decrecimiento de la economía, con excepción del período 2010-2012, caracterizado por un mayor crecimiento económico²⁰⁶ (gráfico 2). Esto quiere decir que la oferta laboral se incrementa más rápidamente en momentos de desaceleración de la economía, lo cual puede afectar las condiciones en las que la población oferta su fuerza de trabajo.

²⁰⁶ Vásconez, Allison. 2016. *Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambios 1995-2015*. (Quito: ONU Mujeres Ecuador).

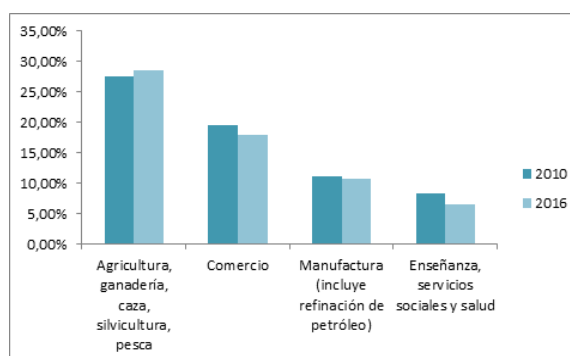
Gráfico 2. Crecimiento del PIB y participación laboral



Fuente: SISEC 2017.

En la actualidad, la mayoría del empleo es generado por el sector de comercio y servicios, que capta cerca del 41% de la población ocupada (38% de los hombres y 50% de las mujeres). Le siguen la industria manufacturera, con el 12,5% y la agricultura, ganadería y caza, con el 11%²⁰⁷. En las zonas rurales, el sector agropecuario es la principal fuente de empleo, que concentra al 28,6% de la PEA. Le sigue el sector de comercio y manufactura, incluida la refinación de petróleo, con el 17,9%²⁰⁸ (gráfico 3).

Gráfico 3.



Fuente: INEC 2017f.

En 2017, el 67,4% del empleo provenía de la microempresa, lo cual se explica, en buena medida, por la importante cantidad de trabajadores independientes. Por otra parte, las grandes empresas acumularon el 21,3% del empleo total en 2014. En términos generales, en 2017 el 80,6% del total de empleo se encontraba en el sector privado y el 19,4% en el público. Durante la última década, uno de los mayores generadores de empleo fue este último sector, con una representación creciente de empleo de mujeres²⁰⁹.

²⁰⁷ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017c. *Informe de economía laboral*. (Quito: INEC).

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017c. *Informe de economía laboral*. (Quito: INEC).

El país ha tenido un crecimiento bajo de sus sectores de mayor productividad, así como una reducción paulatina de aquellos de mayor productividad²¹⁰. No obstante, la participación de sectores de baja productividad sigue siendo mayoritaria, con un 46%, frente a los de media y alta, con un 34% y un 20%.

La baja capacidad del sistema económico de generar empleos en sectores dinámicos y de valor agregado obedece a una estructura económica que basada en la producción primaria y no diversificada, con baja innovación y promoción de la productividad del trabajo. La estrategia de competitividad más sencilla que se ha adoptado es la limitación de los costos del trabajo por vía de la baja calificación y las modalidades no reguladas.

La estructura productiva y laboral se mantiene con alta concentración de sectores grandes y dispersión de pequeños, junto con una alta segmentación de la demanda de empleo, lo que tiende a profundizar las desigualdades en el ingreso²¹¹. La permanente elevación del salario nominal y la estabilidad de precios a partir de la dolarización han permitido que el salario real crezca. Con esto, la población cubierta por la normativa del salario básico legal ha mantenido cierto poder adquisitivo. Sin embargo, además de la no generación de empleos en los sectores de mayor valor agregado, la estructura productiva descrita ocasiona que el salario de mercado se mantenga presionado a la baja. De esa manera, responde a una configuración de tareas de baja calificación, altamente inestables, con participación creciente de autoempleo y una gran proporción desregulada del mercado, dada la naturaleza de los sectores comerciales y de servicios. La mayor parte de la desigualdad salarial en América Latina es producto de la desigualdad y la concentración en la calificación de las personas trabajadoras, así como de la heterogeneidad de las empresas empleadoras²¹².

Por otro lado, alrededor del 40% de la población ocupada se encuentra en relación de dependencia: 40% de mujeres y 43% de hombres; el resto está distribuido entre el “cuentapropismo” y el autoempleo. Hay más cuentapropistas mujeres que hombres. Es mayor la proporción de mujeres en autoempleo, pero también con contrato estable de trabajo²¹³.

En cuanto a la calificación profesional, las tasas más bajas se concentran en el campo. En 2013, la agricultura ocupó el 62% de la PEA rural, con mayor absorción de mano de obra no calificada²¹⁴. Esto significa que cerca de un millón y medio de personas del área rural dependen de este sector.

Las condiciones descritas muestran una limitada capacidad de generar empleos de calidad, plenos y formales. Existe “un deterioro de la calidad del empleo, que se refleja en el aumento de las tasas de subempleo, la caída de los ingresos laborales, el

²¹⁰ CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2016. *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016*. (Santiago de Chile: CEPAL).

²¹¹

²¹²

²¹³ ONU Mujeres. 2017. “Nota diagnóstico mujeres y trabajo en Ecuador”. Hoja Informativa.

²¹⁴ MAGAP (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2015. *Política agropecuaria ecuatoriana. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025*. (Quito: MAGAP).

aumento de la informalidad y el incremento del empleo no remunerado e independiente, tendencia que se observa a partir del 2014”²¹⁵. Las condiciones de trabajo inadecuadas se presentan especialmente en el área rural, en la población indígena y las provincias de la Amazonía, donde superan el 70%. También persiste una brecha en el ingreso laboral promedio entre hombres (USD 526) y mujeres (USD 411), ampliada en la población con mayores calificaciones. Esto muestra una problemática doble: por un lado, no se remunera igual a las personas por un mismo trabajo realizado y por otro, las estructuras laborales afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Estas últimas con frecuencia están obligadas a realizar dobles o triples jornadas para aumentar sus ingresos²¹⁶.

El empleo inadecuado se elevó de 49% a 54% entre 2007 y 2016 (47,4% para los hombres y 61,8% para las mujeres). De las personas que salen del empleo adecuado –condición óptima e ideal para que las personas puedan alcanzar un nivel aceptable de vida– el 78,3% pasa al empleo inadecuado, el 12,1% pasa a la Población Económicamente Inactiva (PEI) y el 8,8%, al desempleo²¹⁷. En diciembre de 2016, la tasa de subempleo fue de 19,9%, un aumento significativo de 5,9% en comparación con diciembre de 2015. Las personas que mayoritariamente ingresan al empleo inadecuado en Ecuador son mujeres (55%), estudiantes y jóvenes (27,7%), personas con discapacidad (6,9%), jubiladas (3,9%) y rentistas (1,7%)²¹⁸.

Por otra parte, la inserción laboral de las personas en movilidad humana representa un desafío. Por lo general se vinculan a trabajos inestables y sin cobertura social. La población que participó en la Encuesta de Línea Media presentó indicadores más bajos en el acceso a un empleo digno y adecuado, en comparación con los resultados de la encuesta de 2014. A pesar de que la población en edad de trabajar y PEA correspondió al mismo porcentaje en ambas mediciones, las condiciones laborales empeoraron. Se puede anotar, por ejemplo, que la población ocupada en 2017 correspondía al 73,97%, frente al 91,26% en 2014, una diferencia aproximada de 17 puntos porcentuales durante esos tres años. El empleo adecuado también se vio afectado: bajó del 25% al 16% en el período señalado. Si bien el porcentaje de empleo inadecuado de este grupo bajó de 63,6% a 57,9%, el componente de subocupados subió de manera importante: de 29,70% a 37,86%. También creció el porcentaje de población desocupada, que pasó de 8,74 a 26,03²¹⁹.

²¹⁵ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC), 30.

²¹⁶ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida*, (Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), 50.

²¹⁷ PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y CPR (Comunidades de Población en Resistencia). 2015. *Compromiso por la equidad. La equidad en Ecuador: incidencia de la política fiscal y la política social*. (Quito: PNUD/CPR), 2-3.

²¹⁸ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC), 3.

²¹⁹ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de Línea Media”. Hoja Informativa.

Se registró mayor ocupación de hombres jefes de hogar que de mujeres: 87,78% frente a 75,72%. Mayor porcentaje de mujeres (49,40%) que de hombres (44,85%) trabajaban por cuenta propia. Las mujeres se dedicaban más a ventas o servicios de alimentos y labores de cuidado; los hombres, a ventas, construcción y agricultura. No hay diferencia significativa entre el porcentaje de hombres y mujeres que trabajaban como empleados privados o del Gobierno, pero sí una tendencia de los hombres a trabajar como jornaleros o peones y de las mujeres, como empleadas domésticas, producto de los roles socialmente establecidos²²⁰.

La tasa de otro empleo no pleno pasó de 26,4% en diciembre de 2015 a 25,1% en diciembre de 2016. El empleo no remunerado se incrementó en 0,7%: pasó de 7,7% a 8,4%²²¹. Las diferencias por sexo en este son elevadas: 15% de la PEA ocupada, en el caso de las mujeres, frente a 5%, en el caso de los hombres²²².

La tasa de informalidad del empleo en el país mantiene una relativa estabilidad desde 2007, entre el 40% y el 45%. El año 2016 cerró con indicadores que reflejaron una informalidad total nacional del 43,7%. En el área urbana y rural la tasa fue de 35,2% y 60,6%, respectivamente. Esto evidencia una notoria falta de desarrollo productivo local en las áreas rurales y poca generación de empleo de calidad. La informalidad se encuentra mayormente focalizada en la población femenina, cuya tasa fue de 46,4%, mientras que la de los hombres fue de 41,8%²²³. El fenómeno responde también a características estructurales de la oferta de trabajo del país tales como la instrucción formal. En ese contexto, se evidencia un alto grado de correlación entre la informalidad y la ausencia de instrucción: el 80% de la población que no presenta ningún nivel de instrucción es informal y le sigue un 68% de personas que no han culminado la instrucción primaria²²⁴.

El empleo temporal corresponde al 46% de la PEA ocupada. Alrededor del 90% de los trabajos informales son temporales. Ello implica que a la precariedad y falta de cobertura de la seguridad social que caracterizan a las posiciones informales se le suma la inestabilidad que conllevan los contratos por tiempo determinado. Sin embargo, la temporalidad también se extiende a la formalidad y afecta al 27% de trabajadores. Por otro lado, los regímenes temporales en la agricultura, que responden a épocas estacionales de producción, emplean gran cantidad de trabajadoras y trabajadores inmigrantes, cuya situación puede ser altamente precaria, dado un alto subregistro, escasos controles y poca capacidad de demanda de derechos laborales.

En la base de la estructura informal de la economía y el empleo, junto con la multiplicidad de regímenes de trabajo, se encuentra una normativa laboral que no se

²²⁰ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de Línea Media”. Hoja Informativa.

²²¹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC), 32.

²²²

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017c. *Informe de economía laboral*. (Quito: INEC).

adapta plenamente a esta multiplicidad ni a la dinámica actual del mercado de trabajo. La implementación de la normativa para regular y formalizar el trabajo es costosa y tiende a dejar brechas entre la demanda y la oferta. Por otro lado, el sistema de seguridad social que cubre a una proporción de la población empleada tiene limitaciones de sostenibilidad, en parte debido a que está estructurado bajo una dinámica laboral que explica solo un lado del mercado.

Las condiciones de empleo son el mayor problema, dado que las tasas de desempleo se mantienen relativamente bajas. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016 han fluctuado alrededor del 5%. En septiembre de 2017 la cifra de desempleo correspondió al 4,1% de la PEA, una reducción de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. En el ámbito urbano, la tasa fue de 5,4%, es decir, hubo una reducción de 1,3% con respecto a septiembre de 2016 (6,7%). En el ámbito rural, la tasa de desempleo no presentó variaciones anuales significativas (se ubicó en el 1,7%)²²⁵. No obstante, la desaceleración económica ha generado expulsión de trabajo en algunos sectores, en los últimos años. Los sectores que mayor reducción de empleo mostraron entre 2009 y 2016 son el sector de extracción de minas (25,12% como promedio anual) y la construcción (24,05% como promedio anual)²²⁶.

La tasa de desempleo sigue siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Así, en septiembre de 2017, 5,4% de las mujeres en la PEA nacional estuvo en situación de desempleo, mientras que entre los hombres el desempleo fue de 3,2%²²⁷. Por último, el desempleo juvenil –uno de los grandes retos del sistema laboral en la región– muestra también cifras altas en el país. En 2016 la tasa de desempleo de la población entre 18 y 29 años fue la más alta entre todos los grupos etarios (10,4% en el nivel nacional; 13,1% en el área urbana y 5% en el área rural). Por género, se evidencia un mayor asentamiento del desempleo juvenil para las mujeres, con una tasa del 13,3%, mientras que para los hombres es del 8,5%.

3.3.2. Desigualdad y crecimiento económico

La reducción de la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos ha tenido un avance muy disímil. Por ello, el ODS 10 apunta a la necesidad de que el crecimiento económico incluya las dimensiones económica, social y ambiental y, en particular, la reducción de las desigualdades.

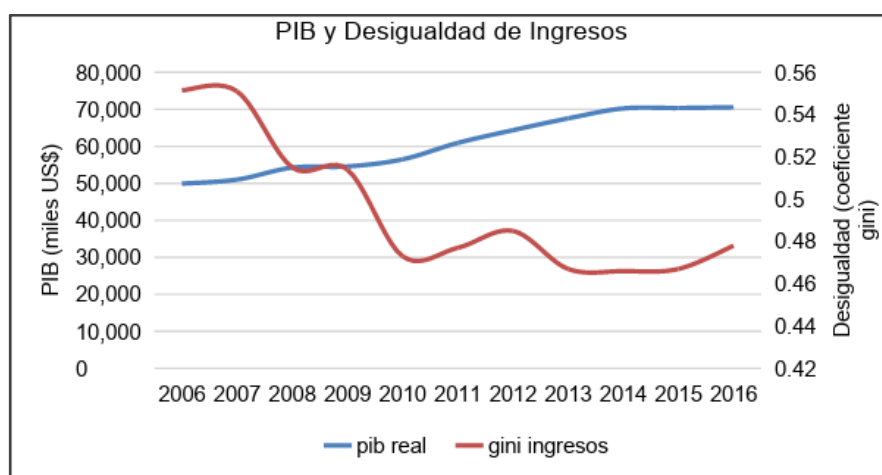
La evolución del coeficiente de Gini de ingresos en Ecuador permite observar dos momentos durante el período 2006-2016: un descenso lento, siguiendo una tendencia iniciada en 2002, hasta 2012, y un ligero repunte a partir de 2013. Al analizar la evolución del crecimiento económico y la desigualdad, la relación entre ambos es bidireccional. Su comparación permite intuir que, a la par de un crecimiento económico sostenido, se produce una reducción también sostenida de la desigualdad, aunque de forma más lenta (gráfico 4).

²²⁵ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC).

²²⁶ *Ibidem*, 47.

²²⁷ ONU Mujeres. 2017. “Nota diagnóstico mujeres y trabajo en Ecuador”. Hoja Informativa.

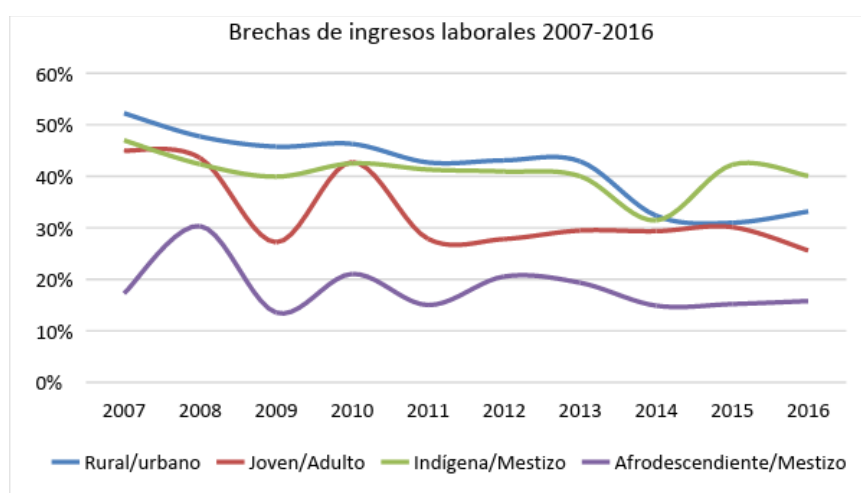
Gráfico 4. PIB y desigualdad de ingresos



Fuente: ENEMDU, varios años; Banco Central del Ecuador

Una proporción importante de la población en edad laboral no genera ingresos, pero sí trabajo no remunerado, que es transferido a la economía. Otra gran proporción recibe ingresos por debajo de su productividad, por cuanto se ubica en sectores precarizados o sufre discriminación. Estos son factores estructurales de la desigualdad de ingresos. Las mujeres, los y las jóvenes y la población en las zonas rurales están sobrerrepresentados en ambos grupos. Ese es uno de los vínculos más visibles entre la desigualdad general y las desigualdades horizontales. Las brechas de género en ingresos se han reducido, al igual que la población femenina sin ingresos, pero el ritmo de estas reducciones es menor que la reducción general de la desigualdad y el ritmo de crecimiento económico. Otras brechas de ingresos, como aquellas entre la población urbana y rural, la población joven y adulta y la población indígena y mestiza se mantienen sin cambios, sobre todo a partir de 2010 (gráfico 5).

Gráfico 5. Brechas de ingresos laborales (2007-2016)



Fuente: SICES 2017.

3.3.3. Desarrollo productivo, competitividad y emprendimiento

El crecimiento económico y las mejores condiciones de trabajo dependen del desarrollo productivo. La Agenda 2030 promueve la diversificación a través de tecnología e innovación, atendiendo a los sectores de mayor valor añadido. El ODS 9 se refiere a la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. Incluye también promover la innovación, la generación de empleo calificado y cambios fundamentales en las estructuras productivas.

El sistema económico de Ecuador es social y solidario (art. 283), pues tiende a generar una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. En el año 2015, Ecuador diseñó la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, política enfocada a fortalecer la innovación y la eficiencia productiva.

El PND 2017-2021 impulsa la productividad y la competitividad, así como el desarrollo de capacidades productivas para la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. Incluye entre sus intervenciones emblemáticas la “Gran Minga Nacional Agropecuaria”, la cual apuesta por articular intervenciones en el territorio y por desarrollar servicios financieros y no financieros para el sector.

Como correlato a la estructura laboral, en términos sectoriales, la estructura productiva del país se ha mantenido relativamente estable desde los años 80. Ha aportado de manera importante en las ramas de actividad relacionadas con los servicios, con un peso sobre el total del valor agregado nacional de entre el 65% y el 70%. Mientras tanto, las ramas de actividad primarias como la agricultura, pesca y minería se han mantenido entre el 16% y el 20% del total²²⁸.

Los índices de productividad han tenido una mejoría sustancial en los últimos años. En el periodo entre 2000 y 2006, esta creció a un ritmo de 2,28% anual, mientras que entre 2007 y 2013 creció, en promedio, un 3,5% anual. No obstante, existen grandes diferencias de productividad entre los sectores intensivos en recursos naturales y el resto de la industria, en particular las ramas intensivas en trabajo y aquellas relacionadas con la ingeniería, como la metalmecánica. De manera general, a pesar de que entre 2007 y 2013 la industria experimentó aumentos considerables en la productividad, la estructura productiva del país se concentró en los sectores primarios y de servicios, los cuales, por su naturaleza, no generan encadenamientos productivos (tabla 7).

²²⁸ Calderón, Álvaro, Marco Dini y Giovanni Stumpo. 2016. *Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social*. (Santiago de Chile: CEPAL), 20.

Tabla 7. Tasas de crecimiento promedio anual de la productividad del trabajo, 1980-2013. (En porcentajes)

Sector	2000-2006	2007-2013
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	-1,13	4,80
Explotación minas y canteras	1,13	1,30
Industria manufacturera	1,07	3,40
Electricidad, gas y agua	-4,45	5,64
Construcción	7,57	8,36
Comercio y restaurantes y hoteles	-4,85	1,66
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1,91	3,19
Establecimientos financieros y servicios prestados a las empresas	-0,43	-1,95
Servicios comunales, sociales y personales	9,44	4,21
Total	2,28	3,50

Fuente: CEPAL.

En relación con el sector agropecuario y agroindustrial, en 2017 se estimaba que el 36% de la población (6'094,829 personas) vivía en zonas rurales del país cuya actividad económica principal es la agricultura, seguida de la ganadería y pesca²²⁹. Entre 2006 y 2016, el sector agropecuario, y sus elaborados (productos agroindustriales), experimentó un crecimiento del 41%; el PIB agropecuario, a precios constantes de 2007, pasó de USD 6.550 millones en el año 2006 a USD 9.208 millones en 2016²³⁰. Dentro de este rubro, el sector agroindustrial ha representado, en promedio, el 30% y el agropecuario, el 70%. Este último es el de mayor peso y relevancia dentro de la economía agropecuaria. En 2016 el PIB agropecuario cerró con un crecimiento de 0,67% con respecto al año anterior, considerando, además, que en ciertos cultivos existió una disminución de la superficie sembrada nacional. Los cultivos más afectados fueron: banano (-5%), maíz duro seco (-22%) y arroz en cáscara (-4%)²³¹.

Por otro lado, permanece la división entre la agricultura empresarial (AE) y la agricultura familiar campesina (AFC). La primera concentra el 80% de la tierra en el 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPA), utiliza el 63% del agua para

²²⁹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017c. *Informe de economía laboral*. (Quito: INEC).

²³⁰ BCE (Banco Central del Ecuador). 2017. *Previsiones Macroeconómicas del Ecuador 2017-2020*, (Quito: Banco Central del Ecuador).

²³¹ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2016c. *Encuesta de Superficie y producción agropecuaria*. (Quito: INEC).

riego y emplea agroquímicos y energía para la agroexportación. Por su parte, la AFC representa el 84,5% de las UPA, con una concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego y su objetivo principal es producir para satisfacer las necesidades básicas²³².

Más del 64% de la producción agrícola nacional está en manos de pequeños productores. La mayoría de los alimentos consumidos provienen de la AFC (60%). En estas economías, la producción alimentaria se encuentra mayoritariamente a cargo de las mujeres. De igual manera, la AFC contribuye con la oferta de productos de exportación, con alrededor del 80% de las UPA de cacao y el 93% de las de café²³³. No obstante, el valor agregado bruto de la pequeña agricultura campesina disminuyó de 10% en 2007 a 7% en 2013. Dado que existió un aumento de la producción, se puede hablar de un deterioro del ingreso de los productores, debido a la caída de los precios al productor de los bienes de consumo interno y del precio medio (precio real) de los productos de exportación. Además, “los estudios sobre pequeña agricultura campesina sostienen que, en su mayoría, estos productores tienen limitado acceso a la tierra y están parcialmente integrados al mercado (...) Agregan que estas unidades presentan características de agricultura de subsistencia: bajo nivel tecnológico e ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades familiares”²³⁴.

Durante el periodo 2006-2015, la tendencia de las exportaciones agropecuarias fue al alza, con una tasa de crecimiento del 120% (2006: USD FOB 2.742 millones / 2015: USD FOB 6.040 millones). Dicho auge estuvo respaldado principalmente por el comercio de productos tradicionales (banano, plátano, café, cacao), que crecieron a una tasa promedio anual de 11,3% durante el periodo. De igual manera, los productos no tradicionales (flores, aceite de palma, brócoli, palmito, jugo de maracuyá, entre otros) contribuyeron al desarrollo de las exportaciones, con un promedio anual de incremento de 8,2%²³⁵.

La importancia histórica del sector agropecuario para PIB, empleo, soberanía alimentaria, encadenamientos productivos y redes/circuitos cortos de comercialización ha llevado a que Ecuador establezca como una prioridad el fortalecimiento de la AFC²³⁶. La Constitución plantea impulsar el desarrollo de economías rurales solidarias, la transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, las unidades comunitarias y de la economía social y solidaria, a través de mecanismos como políticas fiscales,

²³² FAO (Food and Agriculture Organization) y OPS (Organización Panamericana de la Salud). 2017. *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe*. (Santiago de Chile: FAO/OPS).

²³³ *Ibidem*.

²³⁴ MAGAP (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2015. *Política agropecuaria ecuatoriana. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025*. (Quito: MAGAP).

²³⁵ Monteros Guerrero, A., R. Gaethe, V. Lema, C. Salazar, R. Sanchez y F. Llive. 2016. *Panorama agroeconómico del Ecuador 2016*. (Quito: Coordinación General del Sistema de Información Nacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería).

²³⁶ FAO, Ecuador en una mirada, <http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecuador-en-una-mirada/es/>

tributarias y arancelarias, la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas, la recuperación de la agrobiodiversidad, el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos, que promuevan la equidad entre espacios rurales y urbanos (art. 281 y 282). En ese contexto, el sector agroecológico muestra dinamismo en el último decenio. Se calcula que existen al menos 140 circuitos agroecológicos de comercialización, que integran aproximadamente a 15.000 familias productoras y a más de 20.000 familias de consumidores estables²³⁷.

Otro sector de creciente relevancia en la producción nacional es el pesquero. El Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) es el ente encargado de formular, planificar, dirigir, gestionar y coordinar la aplicación de directrices, planes programas y proyectos para atender de forma especializada las gestiones del sector²³⁸.

Una de las principales amenazas a la sostenibilidad de los recursos pesqueros es la pesca ilegal, que perjudica los ecosistemas marinos, al desestabilizarlos y poner en riesgo su productividad. Se estima que la pesca ilegal alcanza 26 millones de toneladas anuales, valoradas en alrededor de 23 mil millones de dólares²³⁹.

En el caso del sector industrial, su productividad es superior al promedio de la economía. Sin embargo, debido al menor dinamismo de la manufactura, la diferencia se ha ido reduciendo. Así, si en 1999 la productividad de la industria, en términos de valor agregado, era superior en un 40,6% respecto al total de la economía, en 2013 esa diferencia fue del 27,4%²⁴⁰.

El valor agregado manufacturero (VAM)²⁴¹ en Ecuador tuvo un crecimiento anual promedio de 3,76% en el período 2005-2010, y una desaceleración al 0,94% anual entre 2010 y 2016, lo cual obedece en buena medida a la desaceleración económica de los últimos años. No obstante, ambos desempeños fueron relativamente mejores que el promedio para toda América Latina, con un crecimiento menor, del 1,40% y -0,35%, respectivamente, en los dos períodos. Por otra parte, se observa que el VAM per cápita en términos reales subió de USD 569,95 en el año 2005 a USD 607,58 en 2016, lo cual es positivo. Sin embargo, estos valores en términos absolutos son bajos, comparados con la media latinoamericana y la media mundial, que reflejan, en

²³⁷ Gortaire A, Roberto. 2016. "Agroecología en el Ecuador. Proceso histórico, logros, y desafíos". *Antropología Cuadernos de Investigación* 17: 12-38.

²³⁸ Decreto Ejecutivo 06, de 24 de mayo de 2017, en el que se crea el Ministerio de Acuacultura y Pesca.

²³⁹ FAO (Food and Agriculture Organization). 2016. *Proyecto fortalecimiento de las capacidades y las medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en los países de América Latina TCP/RLA/3604*. (Ciudad de Panamá: FAO).

²⁴⁰ Calderón, Álvaro, Marco Dini y Giovanni Stumpo. 2016. *Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social*. (Santiago de Chile: CEPAL), 27.

²⁴¹ El VAM de una economía es la estimación total de la producción neta de todas las unidades industriales manufactureras locales, obtenida sumando toda producción industrial y restando los insumos intermedios utilizados. De esa forma, mide la creación de valor agregado por la industria manufacturera.

promedio, niveles de VAM per cápita de casi el doble que Ecuador. El VAM como porcentaje del PIB en términos reales representó el 0,13 en 2005 y bajó levemente a 0,12 en 2016. Ambos valores son un poco más bajos que la media latinoamericana de 0,16, en 2005 y 0,13, en 2016. Ello muestra una leve tendencia a la baja del VAM/PIB en Ecuador y en la región, de manera opuesta al crecimiento en el promedio mundial de 0,15 a 0,16 entre 2005 y 2016²⁴² (tabla 8).

Tabla 8. Comparación del desempeño industrial de Ecuador con Latinoamérica y el mundo

Indicador	Período	Ecuador	Latinoamérica	Mundo
Valor agregado manufacturero (VAM). Crecimiento anual promedio	2005-2010	3,76	1,40	2,41
	2010-2016	0,94	-0,35	2,83
VAM per cápita (a precios constantes de 2010 en USD)	2005	569,95	1246,88	1355,32
	2016	607,58	1185,17	1660,80
VAM como porcentaje PIB (a precios constantes de 2010 en USD)	2005	0,13	0,16	0,15
	2016	0,12	0,13	0,16

Fuente: ONUDI 2017b.

En cuanto a la estructura y el desempeño empresarial de Ecuador, 28,3% del total de empresas son microempresas, 55,1%, pequeñas; 12,8%, medianas y 3,8%, grandes. Estas últimas acumulan el 73% de ventas y el 47,4% del empleo registrado en la seguridad social. La diferencia entre la participación de ventas y empleo se explica por diferencias en la productividad: en 2013 un trabajador de una microempresa apenas logró producir el 8,8% de lo que un trabajador de la gran empresa, en promedio²⁴³.

De las empresas creadas en el sector manufacturero en 2014, el 71,8% sobrevivió al primer año. De las microempresas existentes en 2009, el 26% incrementó sus ventas para convertirse en pequeñas y medianas. Apenas el 1% creció para convertirse en grande. Del total de microempresas, el 44,5% había desaparecido en 2013. En 2015 se evidenció cómo el estancamiento económico provocó la disminución neta del número de empresas, con una tasa de crecimiento neta negativa (-3,5%) por primera vez desde 2010. “El 50% de las muertes empresariales correspondió a empresas

²⁴² ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). 2017a. *Anuario de estadísticas industriales*. (S.l.: ONUDI).

²⁴³ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC).

dedicadas al comercio, y el 26% a la construcción; por tamaño empresarial, el 93% de las muertes se produjo en las empresas micro y pequeñas”²⁴⁴.

La situación descrita ha ubicado a Ecuador en el puesto 118 de 190 países en el ranking que mide la facilidad de hacer negocios. El aspecto más complicado son los procesos de apertura y cierre de un negocio: puesto 168 y 157, respectivamente. Esto se respalda con los indicadores del Monitor Global del Emprendedurismo (GEM, por sus siglas en inglés), que en 2016 situó el índice de actividad emprendedora temprana en Ecuador en 31,8%, tasa más alta de la región. Asimismo, el índice de intención de emprender (42,7%) fue superior a la media regional. En contraste, el indicador de discontinuación de negocios en los últimos 12 meses, que hace referencia al cierre de empresas, fue uno de los más altos de la región: 7,2% del total de empresas analizadas.

En este contexto, el surgimiento y potencial desarrollo de la economía popular y solidaria y del comercio justo abren varias oportunidades para focalizar la intervención pública, abrir posibilidades de asistencia técnica para acelerar su crecimiento, mejorar sus impactos positivos en la economía y generar empleos de calidad. La primera es un sector productivo que actualmente genera 600.000 empleos del sector real y USD 5 millones del sector financiero; la participación del segundo en el PIB es del 1% del total de las exportaciones²⁴⁵. La incorporación de actores al sector popular y solidario mantiene, no obstante, algunas limitaciones, como la adecuación de requisitos a emprendimientos económicos convencionales, la falta de mayor regulación y control, junto con definiciones técnicas sostenibles.

Como se mencionó antes, el sector exportador es uno de los principales motores del crecimiento en una economía abierta como la ecuatoriana. En 2017, las exportaciones constituyeron el 30% del PIB, de acuerdo con el BCE. Se identifican cinco destinos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas: la Unión Europea, con una participación del 25,0% de este tipo de exportaciones en 2016; Estados Unidos, con 22,8%; Vietnam, con 9,8%; Colombia, con 7,1% y Rusia, con 6,8%²⁴⁶. En cuanto a las exportaciones petroleras, los mayores socios comerciales son: Estados Unidos, con 51,8% de las ventas petroleras de 2016; Chile, con 16,2%; Perú, con 12,3% y Panamá, con 11,4%²⁴⁷. Especial atención ha tomado el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. Este espacio fue el destino de un cuarto de las exportaciones no petroleras en 2016, lo cual indica que el mercado común europeo es el principal demandante de los productos nacionales no petroleros. Se espera que en el futuro inmediato se dinamicen los procesos de acuerdo comercial y relaciones multilaterales

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵

²⁴⁶ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. (Quito: INEC).

²⁴⁷ *Ibidem*.

para promover las exportaciones ecuatorianas en mercados tradicionales y alternativos.

3.3.4. Infraestructura para la producción, innovación y tecnología

La Agenda 2030 reconoce la importancia de la inversión en infraestructura para alcanzar el desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades, fomentar mayor estabilidad social y conseguir ciudades resilientes al cambio climático. El ODS 9 plantea metas específicas sobre el aumento de la investigación científica y el mejoramiento de las capacidades tecnológicas de los países, en particular aquellos en desarrollo. Por su parte, el PND 2017-2021 promueve el impulso a la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, y el desarrollo de las capacidades productivas.

En los últimos años, el país ha mejorado las condiciones de la infraestructura y la conectividad a través de vías, puertos y aeropuertos. También ha incrementado la cantidad y calidad de la provisión de energía eléctrica. Se ha desarrollado infraestructura tecnológica que permite el acceso a información, conocimiento y una mejor comunicación.

La inversión en infraestructura para el desarrollo en los últimos años ha sido de más de 26.256,87 millones de dólares. Entre las prioridades se encuentra la inversión social para construir hospitales, centros de salud, escuelas y centros infantiles, 11,6% del PIB entre 2006 y 2016. En el sector de seguridad se construyeron 455 Unidades de Policía Comunitaria y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria. En los sectores estratégicos, la generación con fuentes de energía renovable duplicó su capacidad²⁴⁸.

Respecto a la red vial, el Gobierno invirtió entre 2007 y 2015 un aproximado de 8.225 millones de dólares en el desarrollo y construcción de aeropuertos, carreteras y puertos marítimos. Las redes de infraestructura facilitan el traslado de personas, el intercambio, la articulación y el fortalecimiento de las condiciones de actividades relacionadas con turismo, producción, servicios e información y conocimiento. El Foro Económico Mundial ubicó a Ecuador en el primer lugar de América Latina, con 9.296,41 km intervenidos y un presupuesto de 7.741,48 millones de dólares. Ecuador escaló 58 posiciones en el listado de países con mejor calidad vial. De igual manera, se han intervenido 11 aeropuertos y se renegoció la concesión del puerto estatal de Guayaquil, por donde ingresa al país la mayor cantidad de contenedores²⁴⁹.

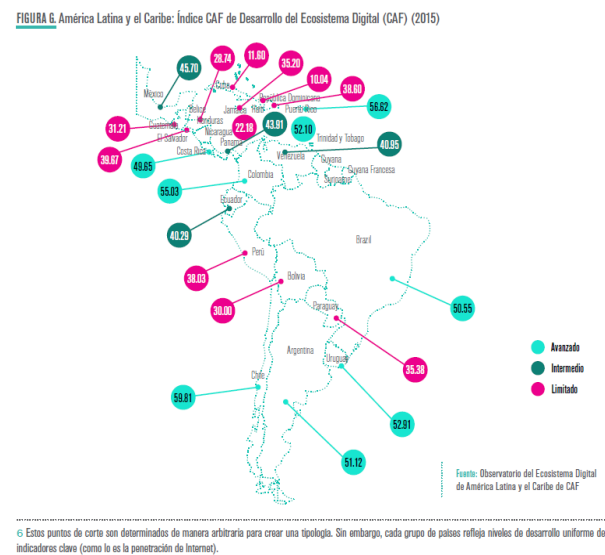
En cuanto a la conectividad digital, el índice de desarrollo del ecosistema digital de la CAF para los países de América Latina y el Caribe es de 45,47 (en una escala del

²⁴⁸ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 25.

²⁴⁹ MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y FEM (Foro Económico Mundial). 2017. (Quito: MTOP/Foro Económico Mundial).

0 a 100). Creció a una tasa anual de 6,83% desde 2004. Ecuador se ubica entre los países intermedios, con un índice de 40,29, como se observa en el gráfico 6.

Gráfico 6. Índice del ecosistema digital CAF en América Latina y el Caribe (2015)



El gráfico 7 muestra las calificaciones de cada uno de los componentes del ecosistema digital en Ecuador, con una comparación entre 2004 y 2015.

Gráfico 7. Calificaciones del índice de desarrollo del ecosistema digital CAF

Calificaciones del Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital CAF

Pilar	2004	2015
Infraestructura de servicios digitales	6	28
Conectividad de servicios digitales	16	49
Digitalización de los hogares	8	39
Digitalización de la producción	4	28
Nivel de competencia digital	35	83
Desarrollo de industrias digitales	10	22
Factores de producción del ecosistema digital	7	20
Marco regulatorio y políticas públicas	44	61
Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital	15	40

Fuente: CAF 2017.

Estas cifras responden al desarrollo de la infraestructura tecnológica en Ecuador, la cual ha tenido un crecimiento importante y ha permitido que cada vez más personas accedan a las tecnologías de la información y comunicación (TIC). A continuación, se muestran los principales resultados sobre TIC en el país registrados entre 2012 y 2016.

- Nueve de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular; 8,4 puntos más que en 2012.

- La tenencia de teléfonos inteligentes (*smartphone*) creció 15,2 puntos de 2015 a 2016, al pasar de 37,7% a 52,9% de la población que tiene un celular activado.
- Existió un incremento de 13,7 puntos en el equipamiento de computadoras portátiles en los hogares, de 13,9 a 27,6%.
- El 36,0% de los hogares del país tiene acceso a internet, 13,5 puntos más que hace cinco años. En el área urbana, el crecimiento es de 13,2 puntos; en la rural, de 11,6 puntos.
- El 55,6% de la población ecuatoriana ha utilizado internet en los últimos 12 meses. En el área urbana, la cifra es 63,8%; en la rural, 38,0%.
- Ocho de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años usaron internet en 2016. Le sigue el grupo entre 25 y 34 años, con el 67,3%.
- De las personas que usan internet en el país, el 54,1% accede desde su hogar. En el área urbana se mantiene el hogar como lugar de uso, con el 59,5%. En el área rural, el mayor porcentaje de población lo usa en centros de acceso público, con el 36,8%.
- En 2016, 11,5% de las personas en Ecuador eran analfabetas digitales (13,5% de las mujeres y 9,1% de los hombres). En promedio, se registraron 9,9 puntos menos que en 2012²⁵⁰.

Los avances sobre conectividad digital en Ecuador muestran una tasa de crecimiento marginal más rápida que en los países desarrollados. Asimismo, al igual que en otros países de la región, se observa una heterogeneidad, basada en diferencias entre zonas territoriales y grupos sociales, entre otros factores. En este escenario, el ecosistema digital aún no es equiparable al de los países desarrollados. La problemática se asocia también con la falta de un modelo de políticas para incrementar la productividad y la innovación, dirigido a orientar los avances hacia la producción en los sectores más dinámicos de la economía.

3.3.5. Urbanización y comunidades sostenibles

La calidad del hábitat y la vivienda son factores fundamentales para el desarrollo sostenible. El ODS 11 hace referencia al crecimiento de las ciudades y la necesidad de que se genere de forma inclusiva, productiva y sostenible, sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Apunta a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte, cultura y más facilidades para todas las personas, resilientes y sostenibles. Además, fomenta la protección del patrimonio cultural y natural del planeta.

La Constitución garantiza el derecho al hábitat y a la vivienda digna, a través del diseño e implementación de estrategias y programas nacionales que permitan articular los servicios, la gestión del espacio y el suelo urbano, así como programas de hábitat con enfoque de gestión de riesgos y programas de vivienda de interés social (art. 375). El COPFP y el COOTAD han creado normas y mecanismos que establecen un régimen de competencias claro en los distintos niveles de Gobierno. Además, definen un sistema de asignaciones fiscales y de mecanismos de financiamiento para

²⁵⁰ INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2016a. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad 2012-2016*. (Quito: INEC).

los GAD, que propenden a consolidar un proceso efectivo de descentralización para el manejo adecuado de suelo, servicios básicos y vivienda.

El PND 2017-2021 busca promover políticas para garantizar una vida digna, con iguales oportunidades para todas las personas. Se enfoca a generar conexiones entre vivienda y sistemas de infraestructura, agua potable y saneamiento adecuado, electricidad de la red pública, gestión integral de desechos y espacio suficiente y zonas seguras²⁵¹. Del mismo modo, promueve el desarrollo de capacidades del entorno. Como acción emblemática, incluye el programa Casa para Todos, orientado a la cobertura de vivienda digna, en un hábitat adecuado y seguro.

La transición rural-urbana se intensificó desde la década de los 80, con un ritmo de crecimiento tan acelerado que ha sido considerado “explosión urbana”²⁵². Esta situación ha generado diversas problemáticas:

1. Acceso limitado al suelo, con servicios y equipamientos, espacio público y vivienda digna y adecuada para los sectores de bajos ingresos;
2. Falta de control del crecimiento de la mancha urbana, que afecta los cinturones de reserva ecológica y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, debido a la reducción de suelos con vocación agrícola;
3. Dotaciones adecuadas de servicios urbanos como transporte público, equipamientos de salud y educación, áreas verdes, etc.;
4. Segregación espacial urbana;
5. Uso del transporte individual motorizado, sin considerar formas más sustentables de movilidad;
6. Espacios urbanos inseguros, con alta incidencia de violencia de género en los lugares públicos, especialmente en el transporte;
7. Proliferación de asentamientos en zonas de riesgos y persistencia del mercado informal y
8. Procesos especulativos del suelo urbano seguro.

Un alto porcentaje de población de todos los estratos sociales es propietaria de vivienda: 8 de cada 10 personas en el país poseen el lugar donde viven; apenas 2 de cada 10 pagan arriendo. De los que afirman ser propietarios de vivienda, el 5% aún está pagando una deuda por ella; el 11% vive en viviendas cedidas sin pagar arriendo y el 1% recibió su vivienda por servicios ofertados²⁵³. Pese a ello, el 10% de los hogares no cumple las condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. Por otro

²⁵¹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES).

²⁵² ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). 2012. *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 202. Rumbo a una nueva transición urbana*. (Brasil: ONU-Habitat), 18.

²⁵³ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 44. |

lado, 13,6% de viviendas en hogares de jefatura femenina presentan déficit cuantitativo de vivienda, frente a 11,8% correspondientes a jefatura masculina²⁵⁴.

A ello se suma la precariedad de los asentamientos a escala nacional: existen 729.291 hogares en esta situación, lo que representa el 25% del total de hogares ubicados en sectores amenazados. De ese total, 504.303 hogares se encuentran en zonas urbanas y el resto, en zonas rurales²⁵⁵. Guayaquil es el cantón con el mayor número de hogares en asentamientos precarios: 119.000 (20% de hogares) se encuentran en zonas de esta categoría. Le sigue Santo Domingo de los Tsáchilas, que tiene 36.867 hogares precarios (47% del total de los hogares del cantón). En Manabí, el cantón Montecristi tiene el mayor porcentaje de hogares en situación de precariedad, 14.258 (86%)²⁵⁶.

La vulnerabilidad a riesgos generados por desastres naturales es más alta en viviendas ubicadas en zonas de riesgo mitigable y no mitigable, así como en viviendas precarias. Esto se evidenció a raíz del terremoto de abril de 2016, que destruyó 13.962 viviendas en varias zonas urbanas de la Costa. De igual forma, resalta el caso de la ciudad de Esmeraldas. “Se estima que entre el 3% y el 6% de la infraestructura construida quedaría bajo el agua para finales de siglo si no se toman medidas, afectando a más del 8% de la población de la ciudad”²⁵⁷. Algo similar ocurre en Guayaquil, donde 993.126 habitantes (46,2% de la población) se encuentran en zonas susceptibles a inundaciones. En Manta, 91.951 habitantes (41,1% de la población) se encuentran en zonas inundables²⁵⁸. En 2017, el 11,8% de los hogares vivía en condiciones de hacinamiento.

Por otro lado, la proliferación de urbanizaciones cerradas y exclusivas ha intensificado el crecimiento expansivo y no sustentable de las áreas urbanizadas, en detrimento de las zonas productivas y de las áreas centrales con servicios. Se ha dado una progresiva precarización del espacio público, en el cual se ha priorizado el espacio para el transporte privado motorizado individual, lo que ha empeorado las condiciones de inequidad territorial, los problemas de movilidad y las prácticas especulativas, que se reproducen con adaptación al mercado informal del suelo.

Al analizar el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento poblacional entre 2001 y 2010, por grupos de ciudades, la diferencia más marcada entre la tasa de crecimiento del área amanzanada y de crecimiento poblacional se registra en Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del país²⁵⁹. En esta escala de ciudad, la tasa

²⁵⁴

²⁵⁵ ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). 2012. *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 202. Rumbo a una nueva transición urbana*. (Brasil: ONU-Habitat), 9.

²⁵⁶ *Ibidem*.

²⁵⁷ Sierra, Rodrigo, Saskia Flores y Giannina Zamora. 2011. “Adaptation to climate change in Ecuador and the city of Esmeraldas: An assessment of challenges and opportunities”. Technical Report.

²⁵⁸ MIDUVI (Ministerio de Desarrollo y Vivienda). 2016. *Posición nacional del Ecuador frente a la nueva agenda urbana*. (Quito: MIDUVI).

²⁵⁹ *Ibidem*.

de crecimiento de la mancha urbana durante el período censal 2001-2010 fue de 27%, mientras que la tasa de crecimiento poblacional durante este mismo período fue de 17%²⁶⁰. Esto implica la predominancia de un mercado especulativo del suelo, impulsado por las políticas urbanísticas locales, que retiene el suelo servido a favor de las lógicas del mercado. Se incorpora suelo urbano sin responder a procesos eficientes y planificados. Quienes pagan los costos más altos del proceso urbanizador son los municipios, al tener que dotar de servicios básicos, transporte, equipamientos e infraestructura a zonas cada vez más alejadas. Por último, la ciudadanía sufre los problemas de movilidad y falta de calidad urbana. Además, es importante analizar los efectos de la acelerada urbanización en las relaciones entre campo y ciudad. La dependencia de estas hacia el campo es un fenómeno usualmente invisibilizado, que no incorpora una adecuada internalización de costos sociales, económicos y ambientales.

Otro de los efectos de la rápida urbanización de las ciudades en Ecuador es la escasez de áreas verdes y de espacios públicos de calidad, circunstancia que incide en la calidad de vida, en la salud y el bienestar de los habitantes, además de equilibrar los ecosistemas urbanos y los servicios que proveen. Las ciudades ecuatorianas cuentan con un promedio de 4,69 m² de áreas verdes por habitante. Solo el 5% de los municipios del país (10 de los 221) cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que las ciudades dispongan como mínimo entre 9 y 11 m² de área verde por habitante²⁶¹. La situación es crítica, especialmente en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, con un índice verde urbano (IVU) de tan solo 1,13 m² por habitante. Parte del problema ha sido “consecuencia de la débil regulación del mercado de suelo, además, las cesiones de suelo para espacio público en el marco de proyectos de desarrollo urbano, cuando existen, no siempre son adecuadas, ni en proporción, ni en calidad o localización”²⁶².

En cuanto a los servicios básicos, en 2010 6 de cada 10 municipios del país no tenían ningún tipo de tratamiento de sus aguas servidas y solo el 13% llevaba control de sus descargas crudas²⁶³. Las tendencias de crecimiento urbano y, en especial, el crecimiento de centros urbanos medianos, si no se toman las medidas necesarias, apuntan al empeoramiento de la contaminación de las aguas superficiales, a mediano plazo. Las aguas residuales agrícolas se caracterizan por sus elevados contenidos de fosfatos y nitratos procedentes de fertilizantes, así como de una amplia gama de plaguicidas y agentes biocidas, en general. Por otro lado, las prácticas inadecuadas

²⁶⁰ *Ibidem*, 59.

²⁶¹ MIDUVI (Ministerio de Desarrollo y Vivienda). 2015. *Informe Nacional del Ecuador para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III*. (Quito: MIDUVI).

²⁶² ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). 2012. *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana*. (Brasil: ONU-Habitat), 71.

²⁶³ Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador).

del uso del suelo han acelerado la erosión de la tierra, incrementando las cargas de sedimentos en los ríos y arroyos²⁶⁴.

En resumen, el desarrollo urbano en Ecuador, si bien presenta avances en cuanto a la provisión de servicios, enfrenta fuertes retos relacionados con la desigualdad social, la capacidad de carga e impactos ambientales de la urbanización y la producción, efectos importantes sobre la salud y alta concentración de asentamientos precarios, sobre todo en las ciudades más grandes. Urge mayor análisis y propuestas en torno a un proceso de descentralización de la producción y generación de recursos fiscales, sin olvidar las vinculaciones urbano-rurales, a partir de las cuales se ha producido gran parte de las situaciones antes descritas.

Aunque la existencia de infraestructura básica y conectividad ha mejorado las condiciones de competitividad de la producción, los limitados apoyos al emprendimiento, la baja productividad agrícola, el limitado acceso a financiamiento y capitales, frente a una política impositiva y arancelaria que varía frecuentemente, frenan la atracción de inversión. Generar procesos de desarrollo económico inclusivo y equitativo parte también de una concienciación respecto a las relaciones entre el campo y la ciudad. Los acelerados procesos de urbanización tienen implicaciones en la producción, seguridad alimentaria, cambio climático y gestión de riesgos, que comprometen la construcción de resiliencia en las personas y comunidades más vulnerables.

3.4. Paz

La vigencia plena del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática son condiciones habilitantes para la consecución de la Agenda 2030. El ODS 16 señala que, para alcanzar la paz –entendida como la convivencia armónica de las personas y los pueblos– se requiere promocionar Gobiernos democráticos, con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y participativa, que asegure el acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.

A finales de 2016, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) aprobó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, entendida como “el modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo”. Esto implica que hablar de democracia paritaria no abarca solo la participación de las mujeres en la política y en lo público, sino una gestión política y pública al servicio de la igualdad de género.

El PND 2017-2021, en su tercer eje “Más Sociedad, Mejor Estado”, incluye objetivos sobre participación, mejoramiento de servicios, transparencia, paz y soberanía. Las políticas del objetivo 7 apuntan a fortalecer el sistema democrático y el derecho a la participación, promover el diálogo y la organización social y consolidar una gestión

²⁶⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 71.

pública eficiente e incluyente. Por su parte, el objetivo 8 se propone fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción, mejorando el acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Ecuador ha realizado importantes avances en estos ámbitos, pero aún enfrenta desafíos que serán abordados en las siguientes subsecciones: gestión pública eficiente y eficaz, gestión pública transparente, participación ciudadana, acceso a la justicia, sistema de rehabilitación social y entornos seguros y libres de violencia.

3.4.1. Gestión pública eficiente y eficaz

La Constitución (art. 227) establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. El PND 2017-2021 señala que el proceso de construcción de un nuevo modelo de Estado, que articule esfuerzos, competencias y recursos para superar las inequidades en el territorio, todavía supone importantes desafíos asociados con la gestión pública en todos los niveles de Gobierno y con la implementación de la política pública en los territorios.

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) define lineamientos para mejorar la gestión territorial y la gobernanza multinivel, así como para la gestión desconcentrada y descentralizada. Se han desplegado esfuerzos por lograr una mejor territorialización del Estado, partiendo de un régimen de competencias con base constitucional (art. 260-269), que se desarrolla legalmente en el COOTAD.

En aras de un proceso ordenado de desconcentración, el Ejecutivo ha promovido una organización del territorio en zonas, circuitos y distritos, para mejorar la aproximación con las localidades. Según SENPLADES, el porcentaje de distritos con al menos una intervención intersectorial, en ámbitos de política social y/o de seguridad, se incrementó en 12,2 puntos porcentuales entre 2013 (67,1%) y 2016 (79,3%)²⁶⁵.

Subsiste una enorme disparidad en la capacidad de los Gobiernos locales para ejercer sus competencias de modo eficaz, eficiente, oportuno y transparente. Por ello, el PND 2017-2021 se propone fortalecer las capacidades de los GAD para cumplir los objetivos nacionales y prestar servicios públicos, con énfasis en agua, saneamiento y seguridad²⁶⁶.

El Plan reconoce también desafíos pendientes en el fortalecimiento de capacidades para planificar, dar seguimiento, monitorear y rendir cuentas sobre la aplicación de las resoluciones de descentralización de competencias. Asimismo, se identifican desafíos en la descentralización fiscal, el fortalecimiento de la facultad tributaria de los GAD, la calidad y eficiencia del gasto, así como alta dependencia de las transferencias del Gobierno central a los GAD. Estas representan el 85% de sus

²⁶⁵ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 94.

²⁶⁶ *Ibidem*, 63.

ingresos totales; tan solo el 15% son propios. La dependencia económica de los GAD en Ecuador es la más alta de América Latina, seguida por México y Perú, y considerablemente mayor, al compararse con Chile y Brasil²⁶⁷.

La calidad de vida en los territorios depende tanto de la acción del Gobierno central como de los GAD. En línea con ello, en 2014 apenas el 4,70% de las personas calificó los servicios públicos municipales como “muy buenos”; el 38,90% dijo que eran “buenos”; el 34,47%, que no eran “ni buenos ni malos”, el 15,26%, que eran “malos”, y el 6,68% dijo que eran “muy malos”. Además, solo el 13,21% de las personas reporta haber asistido a alguna reunión municipal²⁶⁸.

Los GAD también tienen el desafío de consolidar y gestionar las competencias de catastros, gestión y uso de suelo y ordenamiento territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo²⁶⁹ supone formular una serie de instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio, que posibiliten cumplir las responsabilidades, competencias y facultades de los GAD y del Ejecutivo desconcentrado. La aplicación de este y otros marcos, en el contexto de la Nueva Agenda Urbana y los ODS, requiere desarrollar capacidades institucionales.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión pública, se han realizado acciones importantes para la simplificación de trámites. Se simplificó un total de 407 trámites, ahorrando a la ciudadanía alrededor de USD 20 millones²⁷⁰. La evaluación del servicio civil realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció que para 2015, Ecuador se encontraba en sexta posición entre los países evaluados mediante el Índice de Desarrollo del Servicio Civil, con un nivel de desarrollo medio, por encima del promedio general. Sin embargo, está pendiente el tránsito hacia un modelo integral de gobierno electrónico, con modernización y automatización de herramientas, la ampliación y perfeccionamiento del modelo de gestión por resultados y la ampliación del proceso de simplificación de trámites para GAD y otras entidades del Estado²⁷¹.

Adicionalmente, existen cinco Consejos Nacionales para la Igualdad en las temáticas de género, igualdad intergeneracionalidad, discapacidades, interculturalidad y movilidad humana. Según la Constitución, tienen atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas (art.156). Su presencia a nivel descentralizado se traduce en los denominados Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, con atribuciones análogas, como establece el COOTAD (art. 598). Pese a la relevancia de estos espacios y de la expedición de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad²⁷² y su reglamento, cada Consejo ha tenido trayectoria y capacidades diferentes para lograr

²⁶⁷ Correa Delgado, Rafael. 2017. *Informe a la Nación 2007–2017*. Quito: SENPLADES.

²⁶⁸

²⁶⁹ Ley Orgánica s/n, de 5 de julio de 2016, de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. (Suplemento del Registro Oficial No 790).

²⁷⁰ SNAP (Secretaría Nacional de la Administración Pública). 2016. *Plan nacional de simplificación de trámites*. Quito: SNAP, 8-9.

²⁷¹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 95.

²⁷² Ley Orgánica s/n, de 7 de julio de 2014, de los Consejos Nacionales para la Igualdad. (Suplemento del Registro Oficial No. 283).

una verdadera transversalización de los diferentes enfoques a lo largo del ciclo de la política pública. Los asuntos presupuestarios suponen también un reto para los Consejos.

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, ha recomendado el uso de catálogos y clasificadores presupuestarios a los ejecutores del presupuesto general del Estado. Ese instrumento ha permitido conocer el avance de la inversión pública en la igualdad de género y derechos de las mujeres. Su uso es obligatorio desde 2016 para los Gobiernos locales. No obstante, su implementación ha evidenciado una débil formación en género y la necesidad de corregir este problema para una mayor precisión.

Los sistemas de información que acompañan estos procesos son fundamentales. En Ecuador está consagrado el derecho de todas las personas a acceder libremente a la información generada en entidades públicas y en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Así, la información que produzcan los sistemas de planificación y de finanzas públicas debe ser de libre acceso²⁷³. La transparencia de la información reduce la opacidad en la gestión pública y contribuye a un escrutinio público informado. En la sección 3.5, relativa a las alianzas, se tratará este tema con mayor amplitud.

3.4.2. Gestión pública transparente

Los presupuestos públicos pierden ingentes recursos a causa de diversas formas de corrupción, lo que afecta las oportunidades de desarrollo de las personas y pueblos. La ONU estima el costo de la corrupción y los delitos relacionados con ella en alrededor de 1.260 millones de dólares al año para los países en desarrollo²⁷⁴. Una de las metas de la Agenda 2030 es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas.

Ecuador ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Según la Constitución, la Función de Transparencia y Control Social es la entidad encargada de establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, por medio de estímulos como la deliberación pública, la formación en valores, la transparencia y la rendición de cuentas (art. 207 y 208).

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social prevé un ejercicio anual de rendición de cuentas de las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas y personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés

²⁷³ COPFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), Ley s/n de 14 de octubre de 2010, para organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. (Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306).

²⁷⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 101.

público, y los medios de comunicación social²⁷⁵. En 2016, de un universo de 4.356 instituciones y autoridades, el 88,7% cumplió con este ejercicio, evidenciando un incremento de alrededor del 20%, comparado con 2013 (65,31%). El CPCCS recibe los informes, ha emitido normas y guías para promover y facilitar este ejercicio. Sin embargo, se requiere que este responda de forma más adecuada al interés ciudadano y que exista mayor involucramiento y cultura de exigibilidad por parte de la ciudadanía.

El país cuenta, además, con una política y Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, instrumento para definir políticas y acciones concretas. Se conformó un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (FTLC), con participación mixta de sociedad civil y Estado²⁷⁶. La Estrategia incluye cinco ejes: lucha contra la impunidad, promoción de la transparencia, educación y reflexión en valores, combate a la corrupción en la gestión privada y combate a la corrupción en la gestión pública.

En cuanto a la percepción ciudadana, el 47% de la población ecuatoriana cree que hay transparencia en las empresas privadas, pero el 49% cree que no la hay²⁷⁷. En relación con el sector público, los valores son similares: el 48% cree que sí hay, mientras el 50% cree que no. El 70,9% cree que está muy generalizada o algo generalizada la corrupción entre los funcionarios públicos²⁷⁸.

El PND 2017-2021 identifica como uno de los retos pendientes promover una cultura de transparencia y de denuncia a los actores de corrupción ante las instancias pertinentes. La Contraloría General del Estado (CGE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Cortes deben fortalecer sus roles para investigar, determinar y sancionar los casos de corrupción. A su vez, se debe adquirir y fortalecer los sistemas informáticos para detección temprana de corrupción, que pueden evitar evasión de impuestos o lavado de activos²⁷⁹.

3.4.3. Participación ciudadana

Es deber del Estado garantizar el ejercicio de los derechos de participación y generar las condiciones para que la ciudadanía, las organizaciones y grupos sociales interesados puedan ser parte y/o incidir en la gestión de lo público. Ecuador dispone de una extensa legislación que promueve y regula la participación ciudadana²⁸⁰.

La Constitución incluye entre los derechos de participación elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular

²⁷⁵ Ley Orgánica, de 20 de abril de 2010, de Participación Ciudadana y Control Social. (Suplemento del Registro Oficial No. 175).

²⁷⁶ Decreto Ejecutivo No. 21, de junio de 2017, que declara como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas.

²⁷⁷

²⁷⁸

²⁷⁹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 95.

²⁸⁰ Constitución, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, desempeñarse en la función pública con base en méritos y procesos transparentes, conformar y pertenecer a partidos y movimientos políticos y el derecho al voto. También reconoce el principio de paridad de género en el desempeño de empleos y funciones públicas.

3.4.3.1. Participación política y en asuntos públicos

En Ecuador, el voto es obligatorio para la ciudadanía entre los 18 y 65 años de edad, y facultativo para las y los jóvenes entre 16 y 18 años y para las personas mayores de 65 años. En las más recientes elecciones presidenciales, la segunda vuelta de 2017, se registró un ausentismo de un 17,08% del padrón electoral²⁸¹. El punto más alto de ausentismo fue en la elección presidencial de 2009, con un 24,7%.

Ecuador cuenta con un Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). Es un conjunto integrado de actores, instituciones, políticas, normativas, espacios, instancias y mecanismos que posibilitan el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en la gestión de lo público, según la Constitución (art. 279). Si bien algunas de las instancias que prevé el SNDPP han sido implementadas, –por ejemplo, los consejos ciudadanos sectoriales– persisten retos en su implementación integral: más allá de la clarificación de los mecanismos e instancias para la participación, es necesario trabajar en el fomento de una sociedad activa y participativa, y de una ciudadanía empoderada, conocedora de sus derechos y mecanismos para la incidencia y exigibilidad.

La participación ciudadana en organizaciones políticas formales es escasa. En 2015, el 93% de la población ecuatoriana reportó no trabajar nunca o casi nunca para un partido o candidato. Apenas un 3% dijo hacerlo con frecuencia y el 0% dijo haberlo hecho con mucha frecuencia. En el curso de las dos últimas décadas se ve un deterioro en estos datos: en 1996, el 20% reportaba trabajar muy frecuentemente o frecuentemente para un partido o candidato. La crisis del sistema de partidos repercute en la calidad de la representación política y en el funcionamiento de las instituciones de la democracia.

Por otra parte, en 2015, el 66% de ecuatorianas y ecuatorianos no se sintió representado políticamente en el legislativo y el 53,5% no se sintió representado por el Gobierno de turno. El 39% consideró el trabajo del Legislativo como “muy bueno” o “bueno”. Aunque representa un incremento frente a 2006, cuando apenas el 8% tenía esa valoración, la cifra sigue siendo baja²⁸².

3.4.3.3 Participación política de las mujeres

El marco constitucional y legal favorece la representación paritaria entre mujeres y hombres. Sin embargo, las mujeres continúan subrepresentadas, sobre todo en el nivel local. Según cifras del CNE, existen: 16 alcaldesas (7% del total de alcaldías); 2 prefectas, (9% de las prefecturas); 34% de mujeres en las concejalías urbanas; 25% en las concejalías rurales y 25% en las juntas parroquiales. La conformación de la Asamblea Nacional cuenta con un 38% de mujeres y 62% de hombres²⁸³.

²⁸¹

²⁸²

²⁸³

La situación de subrepresentación se da, por una parte, por un sistema electoral basado en listas abiertas, que permite al elector organizar la lista de candidatos y candidatas sin respetar la alternancia y, por otra parte, por la persistencia de la violencia política, que impide o limita el protagonismo de las mujeres. Otra de las causas se refiere a las circunscripciones electorales con número impar y los cargos de elección popular unipersonales, que impactan en el porcentaje de candidatas mujeres debido a que las listas, en su mayoría, son encabezadas por hombres. Por ejemplo, se contó con un bajísimo número (13,8%) de candidatas a prefectas y uno más escaso (12,2%) de candidatas a alcaldesas²⁸⁴.

Se suman a estos otros factores como la calificación y los conocimientos; la vinculación y el nivel jerárquico de las mujeres en las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones; la cultura política e institucional; así como los recursos, redes y respaldos que ellas tienen en el nivel local. La posibilidad de participación pública efectiva de las mujeres se ve limitada también por la influencia del ciclo de vida y familia: las mujeres solteras, sin hijos e hijas o con hijos e hijas mayores de 15 años tienen mayor probabilidad de participar. En el caso de los hombres, la organización familiar no es una variable significativa para su decisión²⁸⁵.

Las mujeres siguen demandando medidas que les posibiliten acceder en igualdad de condiciones con los hombres a las oportunidades creadas por el Estado como, por ejemplo, la ley de cuotas. Las brechas de género persistirán mientras ellas no sean parte de la toma de decisiones. Representan la mitad de la población y la proporción de representación debería se acorde a esto, tal como lo plantean la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria y la Constitución ecuatoriana. Las mujeres han colocado en el ámbito público aspectos no considerados previamente, tales como leyes contra la violencia, políticas públicas por la igualdad y creación de servicios públicos antes no concebidos como parte de la gestión pública. Un ejemplo de ello son los centros de cuidado infantil en los lugares de trabajo y/o de estudio y los programas para mejorar las ciudades y volverlas seguras para las mujeres.

3.4.3.4. Participación de pueblos indígenas y consulta previa, libre e informada

La Constitución incluye entre los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, su participación en los organismos oficiales, en la definición de las políticas públicas que les conciernen, así como en el diseño y la decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado (art. 57).

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), brazo político de la CONAIE, se ha mantenido en el registro electoral desde 1990. Sin embargo, en la Asamblea Nacional existen apenas 8 representantes indígenas, de un total de 137 asambleístas, lo que refleja un 5,9% de participación. En la diplomacia ecuatoriana,

²⁸⁴

²⁸⁵ Vásquez, Allison. 2016. *Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambios 1995-2015*. (Quito: ONU Mujeres Ecuador).

se han aplicado políticas de acción afirmativa para la incorporación de representantes indígenas en el servicio exterior. Aun así, la participación de indígenas en el Estado, en nivel central y descentralizado, es todavía baja, en términos representativos. Debe considerarse, además, que la mayoría ocupa cargos técnicos, no posiciones de decisión.

La Constitución garantiza el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental y culturalmente (art. 57). Si bien se han aprobado regulaciones como el Acuerdo Interministerial No. 120, Código de Conducta que Observarán las Empresas Públicas y Privadas Colindantes a Zonas Intangibles que Realizan Actividades Hidrocarburíferas en la Región Amazónica y el Decreto Ejecutivo 1247, Reglamento para la Ejecución de la Consulta Previa, Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos, estos resultan insuficientes para permitir el diálogo intercultural y la expresión del consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas. Además, se cuestiona el nivel de estos en la elaboración de los instrumentos, al igual que la ausencia de un instrumento legal claro y abarcador que establezca procedimientos y responsabilidades. Por otra parte, los instrumentos creados no son vinculantes, lo que disminuye las posibilidades de garantizar los derechos colectivos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación ante la falta de regulación para la consulta y recomendó al Estado cumplir su obligación de garantizarla, como una medida de participación efectiva. Entre otras recomendaciones sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada, sugirió adoptar una legislación relativa a esta, como derecho colectivo, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales²⁸⁶.

3.4.3.5. Participación de adolescentes

La Constitución garantiza los derechos de los NNA a la participación social y a ser consultados en los asuntos que les afecten (art. 45). Entre los mecanismos institucionales establecidos para garantizar este derecho, se crearon los Consejos Consultivos. El Estado ha reportado la conformación de 133 Consejos Consultivos Cantonales y uno nacional.

En Ecuador, el 37% de los NNA entre 8 y 17 años pertenece a un club deportivo; 32%, a una *jorga*; 23%, a una directiva del grado o curso y 19%, a un grupo religioso. El 66% de la niñez y adolescencia considera que los profesores toman en cuenta su opinión. El 71% de opina que los padres y madres toman en cuenta su opinión²⁸⁷. Sin

²⁸⁶ CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). 2017. “Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador. CERD/C/ECU/CO/23-24”. (S.l.: CERD).

²⁸⁷ Velasco, Margarita, Gioconda Carrera, Jesús Tapia y Eduardo Encalada. 2016. *Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad. Ecuador 2016*. (Quito: Observatorio Social del Ecuador), 149.

embargo, el Encuentro de Niñez y Adolescencia organizado con ocasión del 26 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (noviembre 2015) y la consulta realizada a más de 2.300 NNA en varias ciudades del país, con motivo de la elaboración del Informe Alternativo sobre la Convención, evidenciaron que los adolescentes perciben que el mundo adulto da poca o nula importancia a su voz, a sus opiniones, a sus propuestas e iniciativas.

En efecto, no se registran consultas a NNA sobre explotación minera, petrolera, agroindustrial, la decisión de cerrar las escuelas rurales y la definición de las políticas antidrogas en las unidades educativas. Tampoco sobre las políticas y protocolos para intervenir en casos de manifestaciones estudiantiles. En 2011, mediante el acuerdo ministerial N° 382-11, el Ministerio de Educación dispuso que, para la elección del Consejo Estudiantil por cada unidad educativa, solo pueden presentar candidatura estudiantes con un promedio de notas entre 17 y 20 puntos sobre 20. La obligación de elegir es para todo el estudiantado, pero el derecho a ser elegido está restringido.

El CPCCS emitió el 6 de abril de 2016 un reglamento para la elección de los miembros de la sociedad civil a los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI). Solo en el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se permite la participación de adolescentes, no así en los demás CNI.

El ejercicio del derecho a la participación supone fortalecer la relación entre Estado, sociedad civil y habitantes del país. La gestión pública, en todos sus niveles, necesita alimentarse constantemente de los aportes ciudadanos, para que refleje y responda a sus realidades. Para ello, son necesarios entornos normativos claros, mecanismos accesibles e inclusivos, acceso a la información y procesos de devolución, además de una ciudadanía empoderada, que conozca sus derechos y tenga interés en los procesos y decisiones que impactarán su ejercicio.

3.4.4. El derecho de libertad de asociación

La cohesión social y el desarrollo de la convivencia comunitaria dependen del fomento de la asociatividad, legitimando los espacios de organización y participación. La estrategia territorial del Plan Nacional de Desarrollo considera entre sus directrices la movilización, asociatividad y corresponsabilidad de todos los actores en el territorio, con una regulación previsible y simplificada²⁸⁸.

En el ámbito normativo, es importante señalar que persisten instrumentos para regular la participación de organizaciones de la sociedad civil que recibieron cuestionamientos en el nivel nacional e internacional por implicar restricciones a la libertad de asociación. Es el caso del decreto ejecutivo No. 193, que reemplazó al 16, en el que se mantienen artículos que fueron observados por los mecanismos de derechos humanos de la ONU²⁸⁹. Es el caso del trato diferenciado y discriminatorio respecto del financiamiento externo, así como de las causales de disolución abiertas

²⁸⁸ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES).

²⁸⁹ Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y Examen Periódico Universal.

a interpretación como “desviarse de los fines y objetivos” y “dedicarse a actividades de política partidista”. Como resultado, las organizaciones de la sociedad civil perciben un entorno poco favorable y una carga excesiva de regulaciones administrativas para su funcionamiento.

El Comité de Derechos Humanos recomendó revisar la legislación para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación para todas las personas. Cualquier restricción debe ajustarse plenamente a las estrictas exigencias establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

3.4.5. Acceso a la justicia

No se puede pensar en condiciones de paz duradera ni en el ejercicio de derechos sin una garantía plena de justicia. El ODS 16 pone de relieve que los avances en la promoción de la paz y la justicia siguen siendo desiguales entre las regiones del mundo y dentro de ellas²⁹⁰.

La justicia se rige por los principios de independencia externa e interna, autonomía, unidad jurisdiccional, gratuidad, publicidad y oralidad, se acuerdo con la Constitución (art. 168). La Carta Magna establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad (art. 75).

El PND 2017-2021 incluye en sus políticas la lucha contra la impunidad, la sanción penal para los autores de violaciones a los derechos humanos y la reparación integral a las víctimas de violación de derechos. También alude a la obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de los adolescentes infractores, a partir de un sistema penal que fomente la efectiva rehabilitación y reinserción social y familiar, así como la aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto social²⁹¹.

El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece principios rectores para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, sin discriminación. El Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019 tiene cinco objetivos: 1) asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios; 2) óptimo acceso a la justicia; 3) mejora y modernización de los servicios; 4) meritocracia en el sistema de justicia y 5) combate a la impunidad. En este contexto, el Consejo de la Judicatura reporta los siguientes avances:

- La tasa de congestión –número de causas acumuladas más allá del trámite normal que se recibió en un año determinado– se redujo de 5,71 en 2009 a 1,99 en 2015.
- La tasa de resolución de causas aumentó de 0,34 en 2009 a 1,24 en 2015.

²⁹⁰ ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2015. *70/1. Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. (Nueva York: ONU).

²⁹¹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES), 56.

- La tasa de pendencia –medición de las causas que esperan resolución final– bajó de 4,71 a 0,99 en el mismo período. Es especialmente notoria la baja en la tasa de pendencia en materia penal, que en 2015 se ubicó en 0,5.
- En 2012 se reportaban 8,44 jueces, 3,65 fiscales y 2,31 defensores públicos por cada 100.000 habitantes en Ecuador. En 2015, 12,8, 5,15 y 4,59, respectivamente.

Se han realizado importantes cambios normativos como el Código General de Procesos (COGEP), para racionalizar los trámites judiciales. Junto con la dotación de infraestructura física y mejoras informáticas, han permitido alcanzar las cifras reflejadas.

El Consejo de la Judicatura impulsó un proceso para evaluar el desempeño de jueces. De 1.517 jueces evaluados, 1.499 lo superaron. Así, el 98,81% de ellos permanece en la carrera judicial. Se impulsó, asimismo, el fortalecimiento de la Escuela Judicial. El 94,03% de los servidores aprobaron cursos puntuales con notas excelentes o muy buenas. En procesos más sostenidos de formación continua, el porcentaje de servidores judiciales que aprobaron con notas de excelentes o muy buenas baja al 78,79%²⁹². El Consejo también implementó una evaluación cualitativa a escala nacional de la calidad de las sentencias de 791 jueces penales. El 77% de ellos superó la evaluación, con nota satisfactoria o buena. Además, el índice de satisfacción de la ciudadanía con los servicios de Justicia aumentó en 2015 a 62,10%.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las alegaciones relativas al uso frecuente, por parte del Consejo de la Judicatura, del sistema de disciplina previsto en el COFJ para destituir a jueces, en particular a través del uso de la figura amplia del “error inexcusable”. También mostró preocupación por alegaciones sobre amenazas de iniciar procesos judiciales y procesos efectivamente iniciados contra jueces en relación con el ejercicio de sus funciones, y sobre la utilización frecuente del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del Gobierno²⁹³.

En el tercer ciclo del EPU, Ecuador recibió numerosas recomendaciones para mantener la independencia judicial y para los nombramientos no políticos de los jueces. En línea con ello, el Consejo de Derechos Humanos recomendó al Estado ecuatoriano incrementar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias²⁹⁴.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño recordó la importancia de la justicia especializada en niñez y adolescencia, expresó preocupación por la falta de servicios

²⁹² Consejo de la Judicatura. 2016. *Informe de rendición de cuentas 2016*. (Quito: Consejo de la Judicatura).

²⁹³ CCPR (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas). 2016. “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador. CCPR/C/ECU/CO/6”. (S.l.: CCPR).

²⁹⁴ Consejo de Derechos Humanos. 2017. *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Ecuador. A/HRC/36/4*. (S.l.: Consejo de Derechos Humanos).

especializados y recomendó capacitar a jueces de niñez y adolescencia especializados en todo el país²⁹⁵.

El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer llamó a que los instrumentos internacionales de derechos humanos formen parte de la formación profesional de jueces, fiscales y abogados. El Comité exhortó también a capacitar a jueces y fiscales sobre la investigación, el procesamiento y la condena pronto y efectivos de los autores de actos de violencia sexual en las escuelas. De igual manera, a que se fiscalicen sistemáticamente los casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero²⁹⁶.

Por último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acogió con satisfacción la adopción del COIP²⁹⁷, que penaliza actos de racismo y discriminación racial, aunque mostró preocupación por su limitada aplicación. Este Comité también recordó la importancia que tiene la justicia indígena. Conforme la Constitución, el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad (art. 171). Sin embargo, la sentencia No. 113-14-SEP-CC de la Corte Constitucional, en el caso conocido como “La Cocha”, ha mostrado límites al alcance de la justicia indígena, en relación con la justicia ordinaria. A su vez, el Comité expresó preocupación debido a que el anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria se encuentre paralizado en la Asamblea Nacional²⁹⁸.

3.4.6. Sistema de Rehabilitación Social

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) es el ente rector del Sistema de Rehabilitación Social. Mantiene líneas de trabajo en infraestructura penitenciaria, modelo de gestión y talento humano. En su informe de gestión de 2017 se reporta una disminución de 10 puntos porcentuales (15,07%) en el nivel de reincidencia delictiva, en comparación con el período 2013-2016 (25,79%)²⁹⁹. Las causas de esto se sitúan en la adecuación y construcción de infraestructura, junto con la puesta en marcha del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que incluye elementos educativos, laborales, culturales, deportivos, recreativos y de vinculación familiar para las personas privadas de su libertad (PPL).

²⁹⁵ CRC (Comité de los Derechos del Niño). 2017. *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador*. (S.l.: Comité de los Derechos del Niño).

²⁹⁶ CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). 2015. “Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador. CEDAW/C/ECU/CO/8-9”. (S.l.: CEDAW).

²⁹⁷ COIP (Código Orgánico Integral Penal), Ley s/n de 28 de enero de 2014, para normar el poder punitivo del Estado y tipificar las infracciones penales. (Suplemento del Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014).

²⁹⁸ CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). 2017. “Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador. CERD/C/ECU/CO/23-24”. (S.l.: CERD).

²⁹⁹ MJDHC (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos). 2017. *Informe de gestión 2017*. (Quito: MJDHC).

En los últimos años, se invirtieron importantes recursos para mejorar el sistema penitenciario, con un monto superior a los 300 millones de dólares. Se construyeron nuevos centros de privación de libertad, entre ellos, los centros regionales de Latacunga, Guayaquil y Turi. Ecuador cuenta con 38 centros de rehabilitación social (CRS) de varones y de mujeres, y 11 centros de jóvenes infractores.

Pese al mejoramiento y la construcción de infraestructura, el hacinamiento persiste. El promedio anual en 2016 fue de 22,45%, superior al registrado en 2015³⁰⁰. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos notó con preocupación que entre 2014 y 2016 se registraron 16 muertes violentas en lugares de privación de la libertad. Se recomendó al Estado incrementar sus esfuerzos para continuar mejorando las condiciones de detención y eliminar el hacinamiento, en particular asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas alternativas de privación de la libertad.

Asimismo, se recomendó redoblar esfuerzos para prevenir y poner fin a la violencia en los lugares de privación de libertad, asegurando que todos los incidentes de violencia sean investigados y los responsables, sancionados³⁰¹. El Comité contra la Tortura tomó nota de la información proporcionada sobre la investigación en curso de los presuntos abusos cometidos contra los internos del Centro Regional Sierra Sur Turi, en Cuenca, en 2016. Lamentó la falta de información sobre la investigación de presuntos casos de malos tratos a menores internados en centros para adolescentes infractores en Quito, Machala y Ambato³⁰².

Por último, se debe tomar en consideración que, a pesar de la aprobación de instrumentos como el Protocolo para la Atención a Población LGBTI en Situación de Privación de Libertad³⁰³, por parte del MJDHC, existen problemas serios en el tratamiento adecuado a esta población y el respeto a sus proyectos de vida.

3.4.6.1. Adolescentes en conflicto con la ley penal

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes (mujeres y hombres) de 12 a 14 años son responsables de sus actos, pero inimputables. Están sujetos a medidas socioeducativas no privativas de la libertad, siempre y cuando sus actos no sean tipificados como delitos graves. Estas medidas, según la norma, pueden ser interpuestas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que tienen como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los NNA.

En Ecuador existen 2 centros de privación de la libertad para mujeres adolescentes que han infringido la ley penal y 9 para hombres (11 en total). A su vez, para la

³⁰⁰ *Ibidem*.

³⁰¹ CCPR (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas). 2016. “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador. CCPR/C/ECU/CO/6”. (S.I.: CCPR).

³⁰² CAT (Comité contra la Tortura). 2017. “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador. CAT/C/ECU/CO/7”. (S.I.: CAT).

³⁰³ MJDHC (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos). 2016. *Informe de gestión 2015*. (Quito: MJDHC).

ejecución de las medidas no privativas de la libertad, desde 2014 están operando 7 Unidades Zonales. Un total de 540 adolescentes cumplen medidas no privativas de la libertad en estas últimas. El tiempo de las medidas va de un mes a un año y 6 meses. El mayor número de adolescentes cumple medidas de entre 1 y 3 meses.

En cumplimiento de sus atribuciones, el MJDHC aprobó mediante resoluciones ministeriales (2014) el Modelo de Atención Socio-psicopedagógico para ser aplicado en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), el Modelo de Aplicación de las Medidas No Privativas de la Libertad, así como el Modelo Educativo para Asegurar el Acceso a Educación. Los dos modelos responden a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y de La Habana. La falta de cobertura resulta en que aproximadamente otros 200 de los 600 adolescentes que infringen la ley cumplen medidas de privación de la libertad en ciudades distantes a la de su residencia. Esto dificulta las visitas domiciliarias y recuperar, mantener o fortalecer los vínculos afectivos o familiares, como lo dispone el Modelo y las Reglas de la ONU para la Protección de Menores Privados de la Libertad.

En la aplicación de las medidas socioeducativas de privación de la libertad se presentan algunos retos: los centros de privación de libertad no cuentan con espacio físico, profesionales especializados e infraestructura adecuada para cumplir con la disposición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) de separar a las y los adolescentes por edades y por tipo de medida de privación de la libertad. En 2016, en algunos centros adolescentes de 14 años cumplían con medidas de privación de la libertad junto con jóvenes de 25 años, lo que podría propiciar problemas en la convivencia y el proceso individual de reinserción familiar y comunitaria de las y los adolescentes. En Esmeraldas, el 60% de los adolescentes en los CAI está en fase preventiva por más de 3 meses, sin un juicio o sentencia.

3.4.7. Entornos seguros y libres de violencia

El índice de percepción de seguridad, entre 2012 (59,4%) y 2016 (60,6%), apenas se incrementó en 1,2 puntos porcentuales³⁰⁴. Los siguientes factores influyen en la construcción de entornos seguros y libres de violencia.

La tasa de homicidios general por cada 100.000 habitantes disminuyó sostenidamente entre 2010 y 2016, al pasar de 17,48 a 5,70. Sin embargo, en el grupo de edad entre 15 y 29 años, la tasa de homicidios fue más alta que la tasa general (30,76 en 2010 y 8,11 en 2016). Ello evidencia la necesidad de generar programas dirigidos a esta población³⁰⁵. La delincuencia organizada, el tráfico y la tenencia ilegal de drogas se han convertido en las actividades delictivas más recurrentes³⁰⁶. Para el Gobierno ecuatoriano resulta preocupante, en particular, el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes por parte de las y los adolescentes. Datos oficiales confirman que alrededor de 1 de cada 4 adolescentes se ha embriagado; de igual forma, en 2015 el 29% de adolescentes vio a algún estudiante de su colegio usando drogas. Para un 15% de esta población resulta fácil conseguir marihuana y a un 8% le sería fácil comprar heroína. Varios estudios mencionan que la población

³⁰⁴ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 96.

³⁰⁵ *Ibidem*, 51.

³⁰⁶

con mayor incidencia en el consumo de drogas proviene, en un 40%, de hogares que pertenecen al estrato socioeconómico medio-bajo y bajo³⁰⁷.

Estos factores aumentan el riesgo de adolescentes y jóvenes que viven en la frontera norte de Ecuador. La creciente presencia de actividades ilícitas en la zona y el fácil acceso a ellas se suma a la ausencia de oportunidades laborales y educativas y a la exposición a prácticas de violencia, exclusión y discriminación. En conjunto, se afecta el desarrollo integral de esta población, comprometiendo sus perspectivas de futuro.

El PND 2017-2021 también reconoce como graves vulneraciones de los derechos humanos a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Ecuador es país de origen, tránsito y destino de estas dos problemáticas. Por ende, es necesario un trabajo interinstitucional para fortalecer marcos normativos y crear planes nacionales para la prevención, protección integral y reparación, restitución de derechos, investigación y sanción, así como el acceso a la justicia para luchar contra estos delitos³⁰⁸.

En las cuatro provincias que limitan con Colombia (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) habitan aproximadamente 1'275.000 personas, en su mayoría mestizas (60%), aunque existe una alta presencia de afrodescendientes e indígenas. Los diagnósticos sobre la situación de la zona transfronteriza coinciden en la persistencia de desigualdades con el promedio nacional en diversos indicadores sociales: pobreza, escolaridad de NNA, abandono educativo, desnutrición, mortalidad materno-infantil, embarazo adolescente, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, fuentes de generación de ingresos y empleo, violencia intrafamiliar y de género, homicidios, suicidios, entre otros.

En la zona de frontera norte confluyen también otras condiciones de inseguridad asociadas con crimen organizado, comercio ilegal, tráfico y trata de personas, minería ilegal, conflictos por tenencia de tierras, desplazamiento forzado y refugio, migración irregular, pasos fronterizos irregulares y fragmentación del tejido social.

En el país, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. En las provincias de la frontera norte, los porcentajes son: Imbabura 63,5%; Esmeraldas 58,2%; Carchi 56,3% y Sucumbíos 54,8%. En el cordón fronterizo la incidencia más alta corresponde a la violencia psicológica, seguida por la violencia física, la sexual y finalmente, la patrimonial.

En la zona de frontera, 9 de cada 10 mujeres menores de 18 años han sufrido violencia sexual. En el 53,9% de los casos, el perpetrador ha sido el padre, hermano, padrastro u otro familiar. En cuanto a violencia sexual fuera del ámbito del hogar, en Sucumbíos, 19 de cada 100 mujeres han vivido violencia sexual en el ámbito social, educativo o laboral; en Imbabura, 16 mujeres; en Carchi, 18 y en Esmeraldas, 23.

Los datos sobre población refugiada ratifican que Ecuador es el país con más presencia de población refugiada en América Latina³⁰⁹. Las y los solicitantes de asilo

³⁰⁷

³⁰⁸ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 51.

³⁰⁹ ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 2017. "Ecuador". Hoja Informativa.

que no han logrado su regularización como refugiados siguen viviendo en el país con otro estatus migratorio o de forma irregular. Adicionalmente, se desconocen las cifras de personas con necesidad de protección internacional procedentes de Colombia que residen en Ecuador, pero nunca han solicitado asilo por desconocimiento, por desconfianza hacia las autoridades o por falta de recursos económicos para realizar los trámites.

Factores de riesgo para toda la región transfronteriza son la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, la persistencia y el reacomodo de grupos armados ilegales y los bajos índices de desarrollo en la zona. Por un lado, el proceso de paz ha traído réditos, debido a la reducción del conflicto armado. Por otro, en el contexto cambiante continúan otras expresiones de violencia local y armada, con sus respectivos reacomodos, disputas y alianzas.

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en las que las personas se sientan seguras y tengan las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Una gestión pública eficiente y transparente es clave para lograrlo, y para llegar a todas las personas con servicios públicos de calidad. Ecuador cuenta con marcos normativos y avances institucionales importantes en este ámbito, sin embargo, necesita avanzar hacia la consolidación de una buena gobernanza en lo local.

3.5. Alianzas

La Agenda 2030 plantea revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, basada en un espíritu de solidaridad mundial y centrada en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

En el ámbito interno, el Gobierno nacional ha identificado como uno de los retos el fomento de alianzas público-privadas (APP), con el objetivo de promover el empoderamiento y la corresponsabilidad del sector privado en el desarrollo del país. El PND 2017-2021 incluye entre sus objetivos incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo. Así, se busca generar empleo y transferencia tecnológica de manera intensiva, con producción limpia, en sus diversos esquemas, que incluyen mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación previsible y simplificada³¹⁰.

En el año 2015, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Esta tiene por objeto generar incentivos para promover la financiación de proyectos productivos y la inversión nacional y extranjera para la provisión de bienes, obras o servicios requeridos por el Ejecutivo o los Gobiernos locales. Faculta, además, a las empresas públicas para constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas y

³¹⁰ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida"*. (Quito: SENPLADES), 79.

sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados, en el ámbito nacional o internacional, y en el sector de la economía popular y solidaria.

Los Gobiernos locales también han desplegado esfuerzos para potenciar sus alianzas público-privadas, una alternativa ante la falta de recursos económicos. Alrededor de 82 de los 221 municipios del país gestionan el financiamiento de 320 proyectos con las APP. Estas obras necesitan 1.542 millones de dólares para su ejecución. Los proyectos apuntan a vivienda, turismo, vialidad, comunicación, transporte, saneamiento ambiental, urbanismo, cultura y producción, según datos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

El PND advierte también sobre la necesidad de reconocer a los actores no tradicionales que forman parte de la economía popular y solidaria y de pequeñas y medianas empresas para dinamizar el aparato productivo local y la economía nacional. Plantea impulsar los emprendimientos productivos y el fomento de las prácticas solidarias y asociativas de pequeños productores, al igual que su vinculación con mercados públicos y privados. En este contexto, la agenda de trabajo conjunta entre el sector público, privado y comunitario se centrará en el incremento de la productividad, la diversificación, la agregación de valor y la capacidad exportadora. De ese modo, se pretende lograr mayor competitividad, anclada en empleo de calidad y mejores oportunidades de negocio, para garantizar un crecimiento sustentable.

Por su parte, el sector privado, ha reconocido y planteado acciones para contribuir al desarrollo sostenible del país de forma creciente. El proyecto “Ecuador 2030 Productivo y Sostenible”, impulsado por el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, busca construir una agenda empresarial para crear oportunidades y dar solución a necesidades estructurales para la transformación productiva del país. La meta del proyecto es que el país ingrese de manera competitiva a la Cuarta Revolución Industrial (CRI) y avance en el cumplimiento de los ODS.

En el contexto regional, Ecuador busca profundizar el proceso de integración con América Latina, el Caribe y los países vecinos, como espacio de convergencia política y complementariedad económica, logística, estratégica, social, ambiental, turística, cultural y de cooperación, afianzando la capacidad negociadora de la región, fortaleciendo el desarrollo de las zonas fronterizas y la libre movilidad de las personas³¹¹. De igual forma, busca crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, ambientales, académicos y culturales, así como las líneas de cooperación para la investigación, innovación y transferencia tecnológica con socios estratégicos³¹².

³¹¹ SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. (Quito: SENPLADES).

³¹² *Ibidem*.

3.5.1. Información para el Desarrollo Sostenible

El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030 plantean la necesidad de mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación que permitan conocer los avances o retrocesos en su implementación, mediante una producción estadística con independencia técnica, relevancia, oportunidad, coherencia y accesibilidad.

La SENPLADES tiene entre sus responsabilidades dirigir el Sistema Nacional de Información (SNI), con el objetivo de integrar, compatibilizar y consolidar la información para la planificación. El SNI está conformado por el INEC y el Instituto Geográfico Militar (IGM). Para que los datos estadísticos tengan carácter oficial, deben cumplir los procedimientos y la normativa establecidos por la Ley de Estadística; deben ser entregados al INEC para su utilización, custodia y archivo.

El Sistema Estadístico Nacional está conformado por el Consejo Nacional de Estadística y Censos y el INEC. Tiene como objetivo la investigación, estudio, planificación, producción, publicación y distribución de las estadísticas nacionales. Está compuesto por los organismos e instituciones del sector público que realicen labores de carácter estadístico. La planificación estadística se desarrolla en diferentes escalas:

1. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico: alineada a la visión nacional de desarrollo de largo plazo. Tiene como objetivo definir la política y acciones de desarrollo estadístico que orienten la estructura y funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional.
2. Programa Nacional de Estadística: instrumento de política estadística de mediano plazo, que articula la estrategia nacional de desarrollo estadístico con la programación estadística nacional en todos sus niveles (nacional, sectorial y territorial), los compromisos regionales e internacionales y los proyectos anuales. Genera así un modelo de planificación estadística alineado a las prioridades nacionales de desarrollo, en sus diferentes componentes. Constituye un insumo indispensable para la articulación y el seguimiento de compromisos supranacionales.

El Programa Nacional de Estadística 2017-2021 es el instrumento clave para producir, difundir y promover información estadística necesaria para el seguimiento y monitoreo de objetivos del PND. Sus objetivos son:

- Determinar las brechas de información existentes entre la oferta y la demanda de información estadística y establecer los mecanismos que permitan la articulación de la producción, el aprovechamiento de nuevas métricas o la identificación de nuevas fuentes de información que garanticen el seguimiento de las agendas nacionales e internacionales.
- Definir el carácter oficial de las estadísticas incluidas en el Inventario de Operaciones Estadísticas, para el diseño y monitoreo de la política pública y permitir el adecuado seguimiento de la planificación nacional, respaldado en un Marco de Aseguramiento de la Calidad Estadística.
- Modernizar al Sistema Estadístico Nacional a través de la identificación y utilización de los registros administrativos con potencial estadístico para el establecimiento de un sistema estadístico basado en datos oportunos y de bajo costo de producción.

- Promover la difusión y el acceso oportuno a la información estadística, mediante el adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de la producción estadística contenida en el Programa.

En mayo de 2017 el INEC presentó el “Plan de desarrollo estadístico para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, el cual identifica, articula y gestiona, de forma ordenada y sistemática, la información estadística necesaria para monitorear la Agenda 2030. En el Plan se determinó que aproximadamente el 70% de los indicadores planteados en la Agenda son factibles de ser calculados en el corto plazo.

En este contexto, el INEC coordinó la conformación interinstitucional de 6 Comisiones Especiales de Estadística y 14 Mesas Técnicas-Temáticas de ODS. Se desarrolló también un Plan de Desarrollo Estadístico para ODS (gráfico 8).

Gráfico 8. Plan de Desarrollo Estadístico para ODS



Fuente: INEC 2017.

Para desarrollar información de los ODS, se han identificado diferentes retos. Entre ellos, la necesidad de consolidar un Sistema Estadístico Nacional (SEN), cuya producción vincule a otros actores –sector privado, GAD, academia–, quienes, además de ser naturalmente demandantes de información estadística, constituyen potenciales productores. Este plantea un reto en la implementación de la Agenda 2030. Por otra parte, es determinante para la transformación del Sistema contar con marcos jurídicos institucionales, infraestructura estadística y nuevas métricas para generar datos estadísticos. A ello se añaden el compromiso de ampliar y facilitar el acceso a la información, el fortalecimiento de los registros administrativos y la consolidación del sistema de certificación de la calidad de la producción de la información estadística.

La modernización del SEN y su fortalecimiento requieren establecer alianzas regionales y globales. Estas facilitarían intercambiar principios y buenas prácticas estadísticas, crear y emplear herramientas e instrumentos de evaluación que permitan medir el grado de madurez del SEN y las capacidades estadísticas con las que cuenta, en beneficio del desarrollo sostenible.

3.5.2. Implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030

En abril de 2018 el Gobierno ecuatoriano declaró la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible política pública orientada a cumplir sus objetivos y metas, en el marco de su alineación a la planificación y el desarrollo nacional. La SENPLADES tiene la atribución de normar y ejecutar el proceso de seguimiento y evaluación de las metas e indicadores de la Agenda 2030 que se priorizarán en la planificación nacional. Para ello, está previsto desarrollar un instrumento que norme el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores y metas. Asimismo, elaborará el informe de avance sobre la implementación de la Agenda 2030, en coordinación con el INEC y las instituciones del Estado que proveerán la información necesaria. También se ha considerado que los Consejos Sectoriales lleven a cabo acciones de articulación, coordinación, aprobación y evaluación de la política sectorial dentro de su sector, a fin de que sus miembros contribuyan al cumplimiento de la Agenda. Estas instituciones se encargarán de coordinar y asegurar la información para la evaluación del avance de cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes.

Los Consejos Nacionales de la Igualdad, en coordinación con los órganos competentes, serán los encargados de transversalizar el enfoque de igualdad en la política pública, así como proporcionar información para evaluar el avance de cumplimiento de la Agenda 2030. Por otra parte, el INEC está a cargo de implementar el Plan de Desarrollo Estadístico para el reporte de indicadores de la Agenda 2030 priorizados en la planificación nacional. En el proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación y observancia de la Agenda 2030, el Consejo Nacional de Planificación estará a cargo de conocer el informe de avance de cumplimiento. El MREMH está a cargo de articular las relaciones y la presencia del Estado en las instancias internacionales relacionadas con la Agenda 2030, conforme la Agenda de Política Exterior 2017-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo³¹³.

Los Gobiernos autónomos, por su parte, también se han involucrado para conocer y trabajar sobre la base de las metas y objetivos de la Agenda. La sociedad civil y la academia están llevando a cabo proyectos para contribuir a la mejora integral de las condiciones y medios de vida en Ecuador, a través del cumplimiento de los ODS, mediante su incorporación en las políticas públicas nacionales y locales y el fortalecimiento de la sociedad civil y de los GAD. Actualmente, en el país se desarrollan foros, mesas de diálogo, observatorios ciudadanos, grupos de trabajo y

³¹³ Decreto ejecutivo 371 (Registro Oficial No. 234, de 4 de mayo de 2018).

otras iniciativas donde se encuentran los actores antes mencionados para apoyar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030.

4. Conclusiones

La población ecuatoriana ha visto mejoras importantes en el cumplimiento de derechos e indicadores de desarrollo. No obstante, aún convive con problemas graves como la pobreza extrema, las desigualdades, el desempleo y la calidad del empleo, la producción y el consumo no sostenibles, la presión sobre los ecosistemas, la degradación medioambiental y la corrupción. En el país existen retos importantes en los ámbitos de personas, planeta, prosperidad y paz, que comparten causas estructurales y requieren una visión multidisciplinaria. El desarrollo integral de las personas y el ejercicio de sus derechos demandan superar estas barreras de manera articulada, enfocándose en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

La pobreza, la exclusión social y las limitaciones en el acceso a los servicios sociales son problemas multidimensionales que acentúan la desigualdad. Estos asuntos son la base de los obstáculos para el crecimiento económico y para la cohesión social, que aumentan las tensiones políticas y sociales. Conciernen al desarrollo de las personas y se afectan mutuamente, impactando en el bienestar y en la convivencia pacífica de la población.

El desarrollo humano también está relacionado de forma directa con el entorno, la naturaleza y el medio ambiente. La gestión no sostenible de los recursos naturales exacerba la pobreza, incide sobre los medios de subsistencia y los empleos, al igual que la conservación de los servicios vitales de los ecosistemas. Al mismo tiempo, pueden contribuir a garantizarlos de manera continuada. El crecimiento de la población, el cambio climático, la urbanización y las necesidades de la agricultura y la industria añaden más presión sobre estos recursos y causan su degradación. Comunidades que cuentan con la tierra como principal activo, familias rurales, mujeres y hombres en situación de pobreza y pueblos indígenas sufren mayores afectaciones en sus medios de subsistencia por problemas medioambientales.

Las posibilidades de trabajo decente y de medios de vida son indispensables para salir del círculo de la pobreza y disfrutar de medios de subsistencia sostenibles. El ejercicio del derecho fundamental a la educación permite lograr una mediana y alta cualificación de la población; de ese modo, influye directamente en el crecimiento económico y la productividad de las familias. Esta cadena de derechos fundamentales que se deben cumplir para que las personas tengan una vida próspera atraviesa asuntos de salud, vivienda, servicios sociales, justicia, entre otros. Además, las disparidades de género en la participación en el mercado laboral obstaculizan el desarrollo humano y representan una pérdida sustancial de potencial económico. Es evidente la forma en la que las distintas metas globales, relacionadas con los temas mencionados, están estrechamente ligadas y dependen unas de otras.

Para erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida, la prosperidad de las personas y proteger el medio ambiente, como lo prescriben la Agenda 2030, la Constitución y el PND, es necesario que la sociedad se encamine al desarrollo sostenible, gestionando riesgos y mejorando la resiliencia. Ello requiere una gestión pública eficiente, que garantice el acceso a la justicia, instituciones responsables y eficaces, y una gobernabilidad democrática, inclusiva y participativa. Atender estos principios

de manera conjunta y armónica hará realidad el bienestar humano y medioambiental, junto a una bonanza económica de largo plazo.

4.1 Ventajas comparativas

En las raíces de los desafíos analizados en las secciones de personas, planeta, prosperidad y paz concurren situaciones de pobreza, exclusión y discriminación, así como falta de articulación de las dimensiones del desarrollo sostenible.

La evaluación del Marco de Cooperación vigente evidenció la valoración positiva que los socios nacionales tienen del trabajo del SNU en el país, su capacidad de incidencia y de convocatoria. Cabe destacar el apoyo a la incorporación de estándares internacionales en leyes y políticas nacionales. De igual forma, se constató el enfoque de fortalecimiento de capacidades, sobre todo de los titulares de deberes, dirigido a mejorar la gestión pública y generar entornos favorables para la garantía de derechos.

El Sistema de Naciones Unidas se ha posicionado en Ecuador como un socio clave para el desarrollo; con mandato, capacidades y amplia trayectoria para abordar las causas de los problemas actuales. Su posicionamiento ha permitido alianzas con actores relevantes como la Asamblea Nacional, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los diferentes ministerios sectoriales. De tal modo, ha contribuido a enfrentar varios desafíos persistentes: la erradicación de la pobreza, la lucha contra las violencias y la discriminación, la gestión pública eficaz y transparente, el desarrollo rural y la protección del ambiente. Esto le otorga mayor conocimiento y experiencia al momento de generar una respuesta: ha desarrollado herramientas, metodologías y programas de formación, entre otros instrumentos para abordar los desafíos actuales.

La capacidad de convocatoria del SNU se traduce en las alianzas con otros socios nacionales como el sector privado, la academia, la sociedad civil y los Gobiernos locales, quienes confían en su capacidad y credibilidad para lograr objetivos comunes. Así, existen importantes alianzas con el Comité Empresarial Ecuatoriano, varias universidades, organizaciones de mujeres, de personas refugiadas, de pueblos indígenas, entre otros. Estas le han permitido al SNU aglutinar una serie de actores alrededor de grandes objetivos nacionales.

El proceso de reforma que atraviesa la ONU será, sin duda, una ventaja y oportunidad para el nuevo ciclo de cooperación, al apuntar a una organización más coordinada y eficiente, con un marco de cooperación más estratégico. Ello contribuirá a que las agencias, fondos y programas trabajen mancomunadamente y unan sus recursos y capacidades para lograr las prioridades nacionales.

El país presenta grandes avances en muchos de los ámbitos sociales, económicos y ambientales, pero aún requiere apoyo para consolidarlos. Ha encontrado en el SNU una cooperación respetuosa y alineada a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que representa el punto de entrada y la hoja de ruta para solucionar los problemas persistentes.

Bibliografía

- ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. “Encuesta de línea media”. Hoja Informativa.
- ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 2017. “Ecuador”. Hoja Informativa.
- Alcarraz, Ignacio Cristóbal, y OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). 2017. “Lecciones aprendidas. Terremoto del 16 de abril 2016. Equipo Humanitario de País. Ecuador. Informe de lecciones aprendidas del terremoto de abril de 2016”,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ehp_lecciones_aprendidas_terremoto_16a_ecuador.pdf
- Alwan, Ala, Timothy Armstrong, Melanie Cowan y Leanne Riley. 2010. “Monitoring and surveillance of chronic non-communicable diseases: progress and capacity in high-burden countries”. *The Lancet* 376. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61853-3
- Antón, John, y Fernando García. 2010. *Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural 2009-2012*. Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio/Unesco.
- Asamblea Nacional República del Ecuador. 2008. *Constitución de la República del Ecuador 2008*. Quito: Asamblea Nacional República del Ecuador.
- BCE (Banco Central del Ecuador). 2017. *Previsiones macroeconómicas del Ecuador 2017-2020*. Quito: BCE.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2012. *Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos. Programa para América Latina y el Caribe: Ecuador*. S.l.: BID.
- 2017. *Documento de enfoque Ecuador 2012-2017. Evaluación del programa país*. Washington: BID.
- s.f. “Documento de perfil de proyecto: fortalecimiento del sistema nacional de alerta temprana: desbordamiento de ríos en cuencas priorizadas y tsunamis”,
www.iadb.org/es/project/EC-L1221
- Black, Robert E., Lindsay H. Allen, Zulfiqar A. Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes de Onis, Majid Ezzati, Colin Mathers, y Juan Rivera y for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. 2008. “Maternal and child undernutrition: global and

- regional exposures and health consequences”. *The Lancet* 371. DOI:
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61690-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61690-0)
- BM (Banco Mundial). 2015. *Republic of Ecuador Fostering Productivity for Export and Growth Technical Note. Report No: ACS16906*. S.l.: BM.
- CAF (Corporación Andina de Fomento) y CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2017. *Perspectiva económica para América Latina 2017: juventud, competencias y emprendimientos*. Santiago de Chile: CEPAL/OCDE/CAF.
- CAF (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Hacia la transformación digital de América Latina y el Caribe: el observatorio CAF del ecosistema digital*. S.l.: CAF.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1059/Observatorio%20CAF%20del%20ecosistema%20digital.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Calderón, Álvaro, Marco Dini y Giovanni Stumpo. 2016. *Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social*. Santiago de Chile: CEPAL.
- CAT (Comité contra la Tortura). 2017. “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador.CAT/C/ECU/CO/7”. S.l.: CAT.
- CCPR (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas). 2016. “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador. CCPR/C/ECU/CO/6”. S.l.: CCPR.
- Cecchini, Simone, Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossell. 2015. *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). 2015. “Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador. CEDAW/C/ECU/CO/8-9”. S.l.: CEDAW.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y CONAMU (Unidad Mujer y Desarrollo Consejo Nacional de las Mujeres). s.f. *La equidad de género y el programa del bono de desarrollo humano*. Quito: CEPAL.
www.cepal.org/mujer/reuniones/quito/AArmas.pdf
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2004. *Población, envejecimiento y desarrollo*. S.l.: CEPAL.
- 2011. *El financiamiento para el desarrollo y los países de renta media: nuevos desafíos*. Santiago: CEPAL.
- 2013. *Sistemas nacionales de protección de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL.

- 2016. *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016*. Santiago de Chile: CEPAL.
- 2017a. *Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2017*. Santiago de Chile: CEPAL. www.cepal.org/es/publicaciones/42023-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2017
- 2017b. *Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- 2018. *Panorama social de América Latina 2017*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). 2017. “Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador. CERD/C/ECU/CO/23-24”. S.l.: CERD.
- COIP (Código Orgánico Integral Penal), Ley s/n de 28 de enero de 2014, para normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales. (Suplemento del Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014).
- CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). 2013. *Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2013-2017*. Quito: CONADIS.
- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. 2017. *La sociedad civil y la construcción de lo público. IV Informe de rendición colectiva de cuentas 2015-2016*. Quito: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. www.rendircuentas.org/wp-content/uploads/2017/08/IV-Informe-de-Rendicion-Colectiva-de-Cuentas-CEOSC-2015-2016_0.pdf
- Consejo de Derechos Humanos. 2008. *Informe de la Experta Independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, Misión al Ecuador*. Quito: Consejo de Derechos Humanos. <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7102.pdf?view=1>
- 2017. *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Ecuador. A/HRC/36/4*. S.l.: Consejo de Derechos Humanos.
- Consejo de la Judicatura. 2016. *Informe de rendición de cuentas 2016*. Quito: Consejo de la Judicatura. www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/documentosdirecciones/comunicacion/RendiciondeCuentas2016final.pdf

- COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), de 19 de octubre de 2010, que establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio. (Registro Oficial Suplemento No. 303 de 19 de octubre de 2010).
- COPFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), Ley s/n de 14 de octubre de 2010 para organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas de 14 de octubre de 2010, para organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. (Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010).
- Correa Delgado, Rafael. 2017. Informe a la Nación 2007–2017. Quito: Senplades.
<http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Informe-a-la-Nacion.pdf>
- Corte Constitucional del Ecuador. 2014. “STC 004-14-SCN-CC, de 6 de agosto de 2014”,
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2014/004-14-SCN-CC/REL_SENTENCIA_004-14-SCN-CC.pdf
- CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social). 2016. *Informe de rendición de cuentas 2016*. Quito: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- CRC (Comité de los Derechos del Niño). 2017. *Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador*. S.l.: Comité de los Derechos del Niño.
- Decreto Ejecutivo No 06, de 24 de mayo de 2017, en el que se crea el Ministerio de Acuacultura y Pesca.
- Decreto Ejecutivo No. 21, de junio de 2017, que declara como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
- Decreto Ejecutivo No. 371, de 19 de abril de 2018, en el que se declara como política pública del Gobierno nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (Registro Oficial No. 234 de 4 de mayo de 2018).
- EKOS. 2017. “Ecuador todavía depende de las remesas del exterior”. 2 de octubre.
<http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=9669>

- El Universo. 2018. “Ecuador es país de paso para la mayoría de venezolanos”. 19 de febrero. <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/19/nota/6630208/ecuador-es-pais-paso-mayoria-venezolanos>
- Enríquez Bermeo, Francisco. 2015. *Seguridad alimentaria: responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales*. Quito: Ediciones Abya-Yala. <http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2016/07/Seguridad-Alimentaria-texto.pdf>
- FAO (Food and Agriculture Organization), FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), OMS (Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de Alimentos) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2017. *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria*. Roma: FAO.
- FAO (Food and Agriculture Organization) y MAE (Ministerio del Ambiente). 2017. “Proyecto apoyo a la toma de decisiones para la integración y ampliación del manejo sostenible de la tierra DS-SLM: evaluación nacional de degradación de la tierra mediante la metodología Lada-Wocat”. Hoja de trabajo.
- FAO (Food and Agriculture Organization) y OPS (Organización Panamericana de la Salud). 2017. *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: FAO/OPS.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2016. *Proyecto fortalecimiento de las capacidades y las medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en los países de América Latina TCP/RLA/3604*. Ciudad de Panamá: FAO.
- Ferreira Salazar, Cynthia, Karina García García, Leandra Macías Leiva, Alba Pérez Avellaneda y Carlos Tomsich. 2014. *Mujeres y hombres del Ecuador en cifras II serie información estratégica*. Quito: CNIG.
- Freire, Wilma B, María José Ramírez-Luzuriaga, Philippe Belmont, María José Mendieta, Katherine Silva-Jaramillo, Natalia Romero, Klever Sáenz, Pamela Piñeiros, Luis Fernando Gómez y Rafael Monge. 2014. *Tomo I: Encuesta nacional de salud y nutrición de la población ecuatoriana de cero a 59 años. ENSANUT-ECU 2012*. Quito: Ministerio de Salud Pública/INEC.
- Gortaire A, Roberto. 2016. “Agroecología en el Ecuador. Proceso histórico, logros, y desafíos”. *Antropología Cuadernos de Investigación* 17: 12-38.

- IGM (Instituto Geográfico Militar del Ecuador). 2017. *Atlas rural del Ecuador. Primera edición*. Quito: IGM.
- INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2012. *Encuesta del uso del tiempo 2012*. Quito: INEC/CDTPDF. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Uso_Tiempo/Presentacion_%20Principales_Resultados.pdf
- INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y CDT (Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres). 2011. *Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres*. Quito: INEC/CDT.
- 2013. *Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humano de la población LGBTI en el Ecuador*. Quito: INEC/CDT.
- INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2009. *Encuesta de salud, bienestar y envejecimiento*. Quito: INEC.
- 2011. *Las cifras del pueblo indígena: una mirada desde el censo de población y vivienda 2010*. Quito: INEC.
- 2012. *Encuesta de salud y nutrición-ENSANUT 2012*. Quito: INEC.
- 2014. *Encuesta de condiciones de vida*. Quito: INEC.
- 2016a. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad 2012-2016*. Quito: INEC.
- 2016b. *Reporte de pobreza por consumo. Ecuador 2006-2014*. Quito: INEC.
- 2016c. *Encuesta de Superficie y producción agropecuaria*. Quito: INEC. www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/
- 2017a. *Ecuador en cifras*. Quito: INEC. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>
- 2017b. *Panorama laboral y empresarial del Ecuador*. Quito: INEC.
- 2017c. *Informe de economía laboral*. Quito: INEC.
- 2017d. *Estadísticas de entradas y salidas internacionales*. Quito: INEC. www.ecuadorencifras.gob.ec/entrada-y-salidas-internacionales
- 2017e. *Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores de pobreza y desigualdad*. Quito: INEC.
- 2017f. *Encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo. Indicadores laborales*. Quito: INEC. . http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Junio/062017_Presentacion_M.Laboral.pdf

- 2017g. *Reporte de pobreza y desigualdad*. Quito: INEC.
- INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 2017. “Evaluaciones Ser Bachiller”, <http://sure.evaluacion.gob.ec/ineval-dagi-vree-web-2.0-SNAPSHOT/publico/vree.jsf>
- Ley Orgánica s/n, de 20 de abril de 2010, de Participación Ciudadana y Control Social. (Suplemento del Registro Oficial No. 175).
- Ley Orgánica s/n, de 5 de julio de 2016, de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. (Suplemento del Registro Oficial No. 790).
- Ley Orgánica s/n, de 7 de julio de 2014, de los Consejos Nacionales para la Igualdad. (Suplemento del Registro Oficial No. 283).
- MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). 2012. *Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025*. Quito: MAE.
- 2016. *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030*. Quito: MAE.
- 2017. *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. Quito: MAE.
- MAGAP (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2015. *Política agropecuaria ecuatoriana. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025*. Quito: MAGAP. www.agricultura.gob.ec/la-politica-agropecuaria-ecuatoriana-hacia-el-desarrollo-territorial-rural-sostenible-2015-2025/
- MCDS (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social). 2017. *Informe de Desarrollo Social 2007-2017*. Quito: MCDS.
- Medina, Federico, Juan Pablo Bermeo, Jesús Ramos-Martin, Bernardo Bustamante, Juan Cadillo Benalcazar, Jaime Cevallos, Belén Liger, Freddy Llive, Rony Parra, Hernán Villarraga y María Eugenia. 2014. *Diagnóstico y análisis biofísico para evaluación y formulación de escenarios de desarrollo en el archipiélago de Galápagos*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales/Centro de Prospectiva Estratégica.
- MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2017. *Plan Nacional de Eficiencia Energética - PLANEE 2016-2035*. Quito: MEER.
- MICSE (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del Ecuador). 2016. *Agenda Nacional de Energía 2016-2040*. Quito: MICSE. <http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00362.pdf>
- MIDUVI (Ministerio de Desarrollo y Vivienda). 2015. *Informe Nacional del Ecuador para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo*

- Urbano Sostenible HABITAT III*. (Quito: MIDUVI.
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/05/Informe-Pais-Ecuador-Enero-2016_vf.pdf
- 2016. *Posición nacional del Ecuador frente a la nueva agenda urbana*. Quito: MIDUVI.
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/05/Informe-Pais-Ecuador-Enero-2016_vf.pdf
- MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 2014. *Ciudadanía activa y envejecimiento positivo*. Quito: MIES. <http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica.pdf>
- MINEDUC (Ministerio de Educación), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y World Vision. 2015. *Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador. Violencia entre pares en el sistema educativo*. Quito: MINEDUC/UNICEF/World Vision.
- MINEDUC (Ministerio de Educación). 2016. *Rendición de cuentas 2016*. Quito: MINEDUC.
- MJDHC (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos). 2016. *Informe de gestión 2015*. Quito: MJDHC.
- 2017. *Informe de gestión 2017*. Quito: MJDHC.
- Monteros Guerrero, A., R. Gaethe, V. Lema, C. Salazar, R. Sanchez y F. Llive. 2016. *Panorama agroeconómico del Ecuador 2016*. Quito: Coordinación General del Sistema de Información Nacional Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- MREMH (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana). 2018. *Plan nacional de movilidad humana*. Quito: MREMH.
- MSP (Ministerio de Salud Pública), SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), UNFPA (Fondo de Población para las Naciones Unidas) y SENDAS. 2017. *Estudio costos de omisión en salud sexual y reproductiva en el Ecuador*. Quito: MSP/SENPLADES/ UNFPA/SENDAS.
- MSP (Ministerio de Salud Pública) y Kimirina. 2017. *Estudio de prevalencia de VIH y otros ITS en Quito y Guayaquil*. (En prensa).
- MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y FEM (Foro Económico Mundial). 2017. Quito: MTOP/Foro Económico Mundial.

- OIM (Organización Internacional para las Migraciones). 2017. *Migraciones, ambiente y cambio climático. Estudios de caso en América del Sur*. Buenos Aires: Organización Internacional para las Migraciones.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2016. *Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016*. Ginebra: OIT.
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2017. “Situación en materia de salud y desarrollo”. Hoja de trabajo.
- ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2015. *70/1. Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Nueva York: ONU.
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
- ONU Mujeres. 2017. “Nota diagnóstico mujeres y trabajo en Ecuador”. Hoja Informativa.
- ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). 2017a. *Anuario de estadísticas industriales*. S.l.: ONUDI.
- 2017b. “Anuario de estadísticas industriales”,
<https://stat.unido.org/app/country/MVA.htm?Country=218&Group=957W>
- ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). 2012. *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 202. Rumbo a una nueva transición urbana*. Brasil: ONU-Habitat.
- PMA (Programa Mundial de Alimentos). 2017. *Plan estratégico para el Ecuador (2017-2021)*. Roma: PMA. <http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica.pdf>
- PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y CPR (Comunidades de Población en Resistencia). 2015. *Compromiso por la equidad. La equidad en Ecuador: incidencia de la política fiscal y la política social*. Quito: PNUD/CPR.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. *Estrategia de urbanización sostenible: apoyo del PNUD a las ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes en los países en desarrollo*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Urbanization/UNDP_Urban-Strategy_SP.pdf
- Ponce, Juan, y Fernando Carrasco. 2016. “Acceso y equidad a la educación superior y posgrado en el Ecuador, un enfoque descriptivo”. *Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Política y Acción Pública* 2 (3): 9-22.

- SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). 2016. *Informe de la Cooperación Sur-Sur 2016 en Iberoamérica*. Madrid: SEGIB.
- SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) y SETEP (Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza). 2014. *Estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza*. Quito: SENPLADES/ SETEP.
- SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 2013. *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. Quito: SENPLADES.
- 2014. *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza*. Quito: SENPLADES.
- 2016. *Evaluación de los costos de reconstrucción sismo en Ecuador, abril 2016*. Quito: SENPLADES.
- 2017. *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”*. Quito: SENPLADES.
- SETECI (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional). 2015. *Agenda nacional de cooperación internacional. Primera parte: política y prioridades de la cooperación internacional*. Quito: SETECI.
- SETEMAR (Secretaría Técnica del Mar). 2014. *Políticas públicas costeras y oceánicas: diagnóstico y propuesta de implementación*. Guayaquil: Editorial El Telégrafo.
- SICES (Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social). 2018. SENPLADES.
- Sierra, Rodrigo, Saskia Flores y Giannina Zamora. 2011. “Adaptation to climate change in Ecuador and the city of Esmeraldas: An assessment of challenges and opportunities”. Technical Report.
- SNAP (Secretaría Nacional de la Administración Pública). 2016. *Plan nacional de simplificación de trámites*. Quito: SNAP.
- SNGR (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos). 2017. “Matriz consolidada de eventos adversos”. Hoja de trabajo.
- SNU (Sistema de Naciones Unidas). 2018. “Reporte del Sistema de Naciones Unidas Ecuador, 2018”. Hoja informativa.
- Tomaselli, Andrés. 2018. *La educación técnica en el Ecuador: el perfil de sus usuarios y sus efectos en la inclusión laboral y productiva*. Santiago de Chile: CEPAL.
- UN DESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas). 2017. *International Migration Report 2017 Highlights*. Nueva York: UN DESA.
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2012. *Atlas mundial de la igualdad de género en la educación*. Francia: Ediciones UNESCO.

- 2016. *Indicadores de educación básica y bachillerato en Ecuador*. Quito: UNESCO.
- UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). 2017a. *Documento de información contextual*. Quito: UNFPA.
- 2017b. *Plan de acción del programa de país entre la República del Ecuador y el Fondo de Población de las Naciones Unidas*. S.l.: UNFPA.
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2016. “Resumen Ejecutivo Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad”. Hoja de Informe.
- 2017. “Aportes de UNICEF a la estrategia de plan de educación 2017-2021. Versión 10/05/2017”,
<https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp289577.pdf>
- 2017. “Malnutrición infantil en el Ecuador”. Hoja de Informe.
- 2017. “Aportes de UNICEF a la estrategia de plan de primera infancia 2017-2021. Versión 16/05/2017”.
- 2018. “Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe INFORM-LAC”. Hoja Informativa.
- Valencia, Cristina, y María Elisa Bernal. 2016. *Institucionalidad y marco legislativo de la discapacidad en el Ecuador*. Santiago de Chile: CEPAL.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/institucionalidad-marco-legislativo-la-discapacidad-ecuador>
- Vasallo Magro, José Manuel. 2015. *Asociaciones público privadas en América Latina: aprendiendo de la experiencia*. Bogotá: CAF.
- Vásconez Alison, Fabián Muñoz y Carlos Tomsich. 2015. *Trabajo infantil en Ecuador: hacia un entendimiento integral de la problemática*. Quito: INEC/UNICEF.
- Vásconez, Allison. 2016. *Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambios 1995-2015*. Quito: ONU Mujeres Ecuador.
- Velasco Abad, Margarita, Soledad Álvarez Velasco, Gioconda Carrera Herrera y Alison Vásconez Rodríguez. 2014. *La niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos*. Quito: Observatorio Social del Ecuador.
- Velasco, Margarita, Gioconda Carrera, Jesús Tapia y Eduardo Encalada. 2016. *Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad. Ecuador 2016*. Quito: Observatorio Social del Ecuador.
https://www.unicef.org/ecuador/Ninez_Adolescencia_Intergeneracionalidad_Ecuador_2016_WEB2.pdf

Villacís, Byron, y Daniela Carrillo. 2012. *País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador*. Quito: INEC.

WHO (World Health Organization). 2011. *Noncommunicable diseases country profiles 2011*. Ginebra: WHO.

www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/201804/LAC_INFORM_2018_v006_MainResults_SPA.pdf

ANEXOS

Anexo 1. Espacios de construcción y consulta interinstitucional

Fecha	Actividad	Resultado
22-8-2017	Reunión del Comité Técnico	Definición del alcance, los temas preliminares y las fuentes de información para el CCA
23-8-2017	Envío de propuesta inicial de estructura y temas del CCA	Revisión, compilación e incorporación de información del CCA
8-9-2017	Reunión del UNCT	Presentación, retroalimentación y validación de temas-estructura del CCA
10-11-2017	Reunión del UNCT	Presentación y revisión de avances
8-12-2017	Reunión del Comité Técnico	Revisión de estructura del CCA y de proceso de elaboración del documento
15-12-2017	Reunión del Comité Técnico	Revisión del proceso de elaboración del documento
6-2-2018	Taller con instituciones nacionales (ver lista 1)	Presentación y retroalimentación sobre los temas y desafíos del CCA
7-2-2018	Reunión del Comité Técnico	Presentación del primer borrador de CCA y acuerdos de criterios y parámetros para revisión
8-2-2018	Envío del primer borrador al Comité Técnico	Revisión del documento
22-2-2018	Taller con Representantes y Oficiales SNU Ecuador	Priorización de desafíos identificados en el proceso de elaboración del CCA

23-2-2018	Reunión con Cancillería y SENPLADES	Revisión y validación de desafíos identificados y priorizados en el proceso de elaboración del CCA
23-2-2018	Taller con instituciones nacionales (ver lista 1)	Socialización de temas y desafíos del CCA. Revisión de causas estructurales y de estrategias y actores clave para los efectos directos del UNDAF
6-3-2018	Reunión del Comité Técnico	Revisión del estado de avance del CCA y siguientes pasos, que incluyen la revisión de una nueva versión y una reunión con sociedad civil, sector privado y socios de cooperación
9-3-2018	Envío del segundo borrador al Comité Técnico	Revisión del documento
15-3-2018	Reunión con sociedad civil, sector privado y socios de cooperación (ver lista 2)	Socialización del CCA. Revisión y retroalimentación de efectos directos, estrategias y alianzas del nuevo UNDAF
18-3-2018	Envío del tercer borrador al PSG	Revisión del documento

Anexo 2. Lista 1

Instituciones nacionales convocadas a talleres CCA - UNDAF
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
Consejo Nacional para la Igualdad de Género
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
Consortio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Ministerio de Acuacultura y Pesca
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
Ministerio de Hidrocarburos
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Industrias y Productividad
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Ministerio de Minería
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Turismo
Ministerio del Deporte
Ministerio del Trabajo
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Gestión de Riesgos
Secretaría del Agua
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Secretaría Técnica del Plan “Toda Una Vida”

Anexo 3. Lista 2

Instituciones de la sociedad civil, empresa privada y cooperación internacional
Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo
Alianza para Emprendimiento e Innovación del Ecuador
Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador
Banco de Alimentos
Cámara de Comercio de Quito
Cámara Empresarial Ecuatoriana
Cámara Nacional de Acuacultura
Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP)
Comisión Internacional de Certificación de Eliminación del Sarampión
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
Conservation International Foundation
Consortio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Corporación ENYA Energía y Ambiente
Corporación Kimirina

Corporación Nacional de Bosques
Cruz Roja Ecuatoriana
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
France Volontaires
Fundación Futuro Latinoamericano
Fundación Heifer
Fundación Refugio Casa Matilde
Fundación SENDAS
GM OBB del Ecuador
Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres
Grupo Faro
Hivos
Plan Internacional
Radio Play Internacional
Red Nacional de Jóvenes Positivos
Save the Children
The Nature Conservancy
Universidad Central del Ecuador
Universidad San Francisco de Quito

Universidad Técnica del Norte
Universidad Técnica Particular de Loja
Woman for Woman Ecuador
World Vision
Socios de Cooperación internacional
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Banco Interamericano de desarrollo
Cooperación Alemana GIZ
Embajada de Alemania
Embajada de Argentina
Embajada de Brasil
Embajada de Chile
Embajada de Francia
Embajada de Guatemala
Embajada de Palestina
Fondo Italo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Organización de Estados Americanos